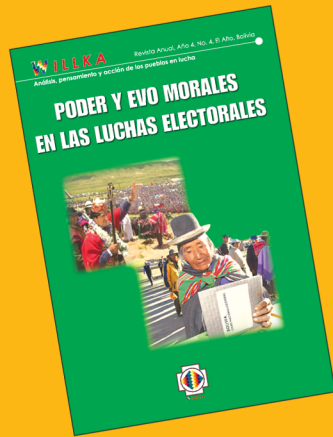


PUBLICACIONES DE LA REVISTA WILLKA:



Willka N° 4



Willka N° 5

La falsa descolonización se define por un discurso radical y prácticas reformistas. Hecho que en Bolivia es tan real. Se habla fuerte y sin embargo se actúa débilmente. Se alardea de la revolución y se hace políticas contra la revolución. Se dice ser indígena y se es anti-indígena. Se habla de la nacionalización y sin embargo no se nacionaliza. Se habla de la descolonización del Estado y se reproduce el Estado colonial. En resumen, existe una gran retórica discursiva pero sus acciones no tienen sentido real en el mismo momento del discurso. Lo que se dice se sabe que no será realidad. Esa es la regla del nuevo régimen de poder. Hablar y hablar sin hacer nada de lo se habla, ahí su fracaso.

WILLKA N° 6

FALSA DESCOLONIZACIÓN

2013

WILLKA

Revista Anual, Año 6, No. 6, El Alto, Bolivia

Análisis, pensamiento y acción de los pueblos en lucha

FALSA DESCOLONIZACIÓN

Después de siete años ¿por qué Bolivia no ha cambiado?



(CONAMAQ, por la asamblea constituyente, junio 2002)



Willka N° 1



Willka N° 2



Willka N° 3

LA FALSA DESCOLONIZACIÓN

**Después de siete años
¿por qué Bolivia no ha cambiado?**



Marcha de 2002 de CONAMAQ por la Asamblea Constituyente

El Alto- Bolivia



D.L.: 4-1-2724-13

WILLKA Revista Anual
Año, 6, No, 6, El Alto, Bolivia
Análisis, pensamiento y acción de los pueblos en lucha

FALSA DESCOLONIZACION

Lucila Choque Huarin
Pablo Mamani Ramírez
Carlos Arze Vargas
Cassio Garcia Ribeiro
Henrique T. Novaes

Pablo Mamani Ramírez
pwillkaa@gmail.com
Cel.: (591) - 67182560

Diseño: Sergio Caro Miranda
Impresion: WA-GUI 2481743
e-mail: impwagui@hotmail.com
2013

La Paz - Bolivia

INDICE

Presentación	5
Lucila Choque Huarin Mirando desde adentro al gobierno del MAS: el gobierno de Evo Morales y Alvaro García en Bolivia	11
Pablo Mamani Ramirez Nuevos reacomodamientos en el poder Cambios para arriba y nada para abajo	31
Carlos Arze Vargas La política económica del MAS: ¿Hacia el Vivir Bien o a la consolidación del capitalismo?.....	70
Cassio Garcia Ribeiro Henrique T. Novaes La transnacional Petrobras y metamorfosis de su estructura societaria: El “Petróleo es nuestro”	101

Presentación

La gran pregunta que nos deviene después de siete años del gobierno del Evo Morales y Álvaro García es ¿por qué no se han puesto en práctica, como se propuso, la descolonización del Estado colonial?, ¿por qué no se ha implementado las economías plurales y la economía comunitaria?, ¿existe un Estado plurinacional real?. Estas preguntas son sustanciales para constatar o no los cambios alardeados. Otras preguntas referidas a los siete años del gobierno del MAS son: ¿por qué se ha negado al sistema jurídico plural?, ¿por qué no existe una lucha radical contra del racismo y discriminación?. Se habla también de la nacionalización de los hidrocarburos, pero ¿existe una verdadera nacionalización de los hidrocarburos y minería en Bolivia?. En la propaganda se hace alarde de los pueblos indígenas originarios pero ¿por qué no se respeta los derechos de estos pueblos preexistentes a la colonia?. Finalmente ¿qué ha cambiado en la política, por ejemplo, frente a los gobiernos republicanos liberal y neoliberales? Preguntas que no sólo serán parte de esta década sino seguramente nos sobrevivirá unos 20 o 30 años.

Estas preguntas tienen sentido porque se ha creado un contexto de una gran disponibilidad histórica como nunca antes para trastocar el orden colonial y neocolonial de un país que aún vive 188 años de dominio de una casta que se autonombró señorial en base a una incipiente idea de “raza”. En efecto, después de 15 años de lucha antineoliberal y frente a nuevas formas de colonialismo moderno, Bolivia ha tenido un gran momento histórico para cambiar el neocolonialismo y su racismo interno. Cerca de sus doscientos años de su existencia, Bolivia, ha entrado a una crisis estructural. Pues

como nunca antes los movimientos indígenas originarios y populares han forzado abrir las puertas del Estado colonial y de ese modo pensar y hacer otra historia. Pero éste fue mal conducido por los señores del poder pese a su gran aureola revolucionaria.

Se ha tenido todas las fuerzas morales y políticos para trastocar el orden histórico dominante, es decir, para trastocar lo dado por un hecho constituyente. Las fuerzas de la oligarquía agroindustrial cruceña, por ejemplo, o las petroleras transnacionales, los banqueros, y el sistema político, han sido derrotadas milimétricamente y en distintos niveles y espacios sociales. No tenían argumento alguno para defender sus intereses ni tenían proyecto de sociedad (y aún no lo tienen). Sus argumentos de poder y su proyecto social habían sido derrotados y destruidos en sentido discursivo y en la cartografía del orden social y sus sentidos de realidad. Sus razones históricas del poder no tenían sentido porque éste aparecía como falso, incluso como inmoral. Pues socialmente se había comprobado que el proyecto neoliberal era anti-nacional y anti-indígena y junto a ello se había caído la máscara de la impostura democrática. Es decir, habían sufrido una derrota histórica en su propia cancha, con las reglas liberales, y en la cancha de los movimientos sociales, con y en el juego del poder comunal. Lo cual quiere decir que habían sufrido doble derrota. Una, en la propia lógica liberal-colonial y otra en la lógica de la lucha comunal e indígena. En otras palabras, eran incoherentes ante sí mismo y eran falsos ante los Otros.

Como consecuencia de ello, desde 2006, se produce un mando legítimo sobre el ejército y policía históricamente pro-oligarcas, se produjo una Asamblea Plurinacional mayoritario con dos tercios, se produjo un vigoroso “pacto de unidad” con cinco grandes organizaciones sociales indígenas originarios, se gana las elecciones con el 54 y 64 por ciento respectivamente, y de paso existe una gran disponibilidad social para cambiar el Estado colonial por otro Estado. Su referencia social de esto era las poblaciones aymaras o quechuas que habitan las grandes ciudades y las aéreas rurales. En pocas palabras, se

tuvo todo, pero absolutamente todo. Entonces ¿qué paso? ¿Por qué volvemos a un fallido escenario de imposibilidad de descolonizar el sistema político y de la economía?. ¿Quién y quiénes han truncado estas luchas? O ¿no estuvimos preparados para asumir estos grandes retos históricos?

De esto sale a relucir la afirmación de la falsa descolonización en Bolivia. Según Franz Fanon, la falsa descolonización se define por un discurso radical y prácticas reformistas. Hecho que en Bolivia es tan real. Se habla fuerte y sin embargo se actúa débilmente. Se alardea de la revolución y se hace políticas contra la revolución. Se dice ser indígena y se es anti-indígena. Se habla de la nacionalización y sin embargo no se nacionaliza. Se habla de la descolonización del Estado y se reproduce el Estado colonial. En resumen, existe una gran retórica discursiva pero sus acciones no tienen sentido real en el mismo momento del discurso. Lo que se dice se sabe que no será realidad. Esa es la regla del nuevo régimen de poder. Hablar y hablar sin hacer nada de lo que se habla, ahí su fracaso. O a lo sumo muy poco. Ese es el actual realismo de la política. De la que por supuesto no se salvan los grupos de poder oligárquico llamada en nuestro medio derecha. Ayer detestaban al indígena y hoy habla bien del indígena. Ayer lo sometía a la esclavitud y hoy hablan de su participación en la política. Hace sólo dos o tres años era el indio y hoy es el ciudadano. Aquí se descubre el doblez de los doctores de Charcas, la de dos caras. Una cara alabatorio y otra cara criminalizadora. Sin duda hay que hacer caso a este último porque esa es su realidad. Esa es la certeza. El primero es un gran distractor. Sólo eso.

Aquí la revista Willka pone lo suyo para reflexionar y tratar de evaluar las preguntas arriba planteadas.

Lucila Choque nos muestra, en este número, la nueva disconformidad basados en las grandes contradicciones del gobierno del MAS. De hecho nos relata de cómo se ha ido reconfigurando el viejo sistema del poder político mediante la apropiación discursiva de los ideales de la lucha social india-origenaria y popular. El discurso de Cambio sin cambio real hoy tiene su efecto contraproducente. Pues el Proceso

de Cambio sufre un gran revés ahora dada desde el seno mismo del gobierno “revolucionario”.

En nuestro artículo planteamos de cómo se produjo un gran proceso de reacomodamiento de las viejas y “nuevas” elites en el poder que es un hecho regular en la historia política de Bolivia. Descubrimos que los señores del poder no tienen el menor escrúpulo para hacerse del poder sin importar los factores ideológicos u otros hechos. En realidad, lo que les interesa es mantenerse en el poder para garantizar sus históricos intereses sociales, económicos y políticos. Y el gobierno del MAS sin duda es la expresión de ese hecho histórico. Y la misma esta dado en las “contradicciones” entre la lucha social y los intereses de los grupos de poder. Hoy el gobierno del MAS se ha convertido en la expresión de los señores del poder, esa es su realidad política y su catástrofe.

De su parte, Carlos Arze V. nos presenta un balance de las políticas públicas del gobierno del MAS de los últimos siete años a partir de un discurso electoral que en los hechos se ha convertido en un discurso retórico. La idea de Vivir Bien-sostiene Arze- como núcleo de la transformación está en los hechos contradicha por el patrón de acumulación exportadora y extractivista de la economía boliviana. En ese sentido, suma qamaña sólo es una mercancía simbólica para interpelar al mundo racionalista de Europa, porque en la realidad económica, éste no tiene efecto. Aunque hay pequeños intentos pero que no son sustanciales. Los ejemplos de ellos son la errática nacionalización de los hidrocarburos, la constitucionalización del latifundio en el oriente, y la continuidad de salarios bajos, etc.

Cassio García y Henrique Novaes nos muestra, desde Brasil, que el Petrobras no es una empresa brasileña como se trata de pensarla aquí en Bolivia sino es una gran transnacional con capitales asiáticos, británicos y con capitales brasileños. Desde esa condición tiene intereses geoestratégicos sobre Bolivia, particularmente de sus riquezas naturales. Así se explica su interés primordial en el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécore

de la cual el gobierno boliviano es su gran anfitrión. De hecho el subimperio brasileño necesita, como cualquier imperio, de recursos naturales y para ello se presenta como “amigo” y no propiamente como los norteamericanos. Este trabajo nos muestra este detalle.

Así la Revista Willka se ha propuesto hacer una breve evaluación de los siete años del gobierno de Morales-García y para ello hemos invitado a varios analistas aymaras y no indígenas (aunque algunos pese haber aceptado no cumplieron) y a amigos brasileños para encontrar algunas pistas sobre sus logros y sus grandes fracasos. Con seguridad no alcanzaremos a cumplir con este objetivo pero al menos pretendemos plantear esta problemática para el devenir social y el tiempo histórico.

Pablo Mamani Ramírez
Responsable de Revista Willka
El Alto, 21 de septiembre de 2013

MIRANDO DESDE ADENTRO AL GOBIERNO DEL MAS

El gobierno de Evo Morales y Álvaro García en Bolivia

Lucila Choque Huarin¹

“mis ojos guardan una memoria escindida hoy de las sujetas y sujetos políticos en Bolivia”.

Introducción

Bolivia, un país hasta hace pocos años atrás sumido en las sombras de la historia, hoy asume un gran reto, la construcción de un proyecto societal llamado “Estado Plurinacional”, producto histórico-político de grandes movilizaciones de muchos actores sociales: pueblos y naciones indígena originario campesinos y sectores populares empobrecidos.

Las largas y penosas y a la vez hermosas luchas del que dijieran un día “*ya es otro tiempo el presente*”²(Hilton y

1 Mgs. en Filosofía y Ciencias Políticas. Lic. en Trabajo social, docente de Universidad Pública El Alto, la Universidad Mayor de San Andrés y Presidenta del Colegio Departamental de Trabajadores Sociales La Paz gestión 2013 -2014.

2 En 1795 cuando todavía quedaba la memoria fresca de la gran insurrección de Tupaj Katari en la región de La Paz, los aymaras del pueblo altiplánico de Jesús de Machaca (provincia Pacajes) se levantaron para destituir a un cacique ilegítimo. Según testigo del lugar, el líder de la revuelta proclamó que “ya era otro tiempo el presente y que el cacique, su segunda tanto como también el cura se habían de mudar y que se habían de poner los que el común quisiese.

Thomson citando en Archivo de La Paz (ALF) 1795C.122E. 25.8v, 2003:7), no provienen sólo de estos últimos años; esto debemos dejarlo bien claro. Las largas luchas de los pueblos en Bolivia en particular y América del Sur o centro en general, son sueños de libertad que se han sumado de coyuntura en coyuntura aunque ha sido visto por separados por la modernidad individualista. Estos son como los quipus que almacenan procesos, hitos, momentos cristalizados cíclicos en movimiento, conocidos por nosotros como el Pachakuti, y que muchas veces no tiene importancia.

En el caso boliviano existe una memoria larga que precisamente hace a las movilizaciones de este “presente” o que este nuestro tiempo aflore una memoria aún escondida o escindida por el tiempo y por la modernidad, hablamos de relaciones de poder que se han constituido en este hermoso escenario en las tierras llamadas hoy Bolivia.

Cuando nos referimos a las relaciones establecidas entre aymaras, quechuas y guaraníes llamados bolivianos con los y las descendientes de los criollos o extranjeros que vinieron a posesionarse como dueños absolutos de nuestras tierras, existen heredadas formas de poder. Bien lo expresa:

“Es difícil hablar y apostar por la potenciación de las personas en un mundo como el que vivimos, donde soñar se ha reducido a éxito, y este a su vez a logros materiales, cuando pierde sentido creer en lo diferente; en una época donde cada vez más se pierde la necesidad de trascendencia moral y el deseo de aventurarse, cuando se debilita la voluntad de atreverse limitándose al espacio de la eficacia que proporcione reconocimiento” (Zemelman, 2010:3).

La necesidad de sobrevivencia en Bolivia se ha convertido en un camino que debe transitar hacia una libertad que recupere el cómo piensa el aymara desde su mundo, los quechuas y los guaraníes, aunque ahora quienes vivimos en las ciudades ya no quieren ser llamados aymaras por ejemplo sino simplemente bolivianos. Pero ¿cómo nos

estamos pensando? y con ¿quiénes nos relacionamos y cómo piensan ellos de nosotros?.

Tener conciencia histórica de lo que somos ha tenido muchos precedentes como las últimas movilizaciones o disconformidades dadas en actos de resistencia al poder hegemónico, contra políticas neoliberales constituidas como inercias a las élites que quisieron “cosificar” lo indio encubierto desde 1492, queriendo mostrarnos como personas que han transitado una modernidad llamada “mestizaje”.

La apreciación de diferentes sectores movilizados continuamente en el país nos ha mostrado los excedentes de los límites de una situación dada (Zemelman, 2010:7), es decir, con todo se busca llegar al fondo del problema por el que transitamos los pueblos y naciones empobrecidos. Por eso las movilizaciones han roto cualquier esquema de la modernidad, es la forma de romper los límites de las políticas como estrategias contra la vida, para re-cuidar la vida de la comunidad encubierta como son los ayllus rurales y urbanos. Ingresar a ese despliegue de inconformidades como posibilidades de desenvolvimiento son aperturas que nos muestran diferentes realidades o verdades, no una sola. Del balance del primer y segundo periodo del gobierno boliviano, no puede quedarse entonces desde la mirada de un solo actor social: el Estado es una institución que guarda las intenciones de su clase y étnica, cuando las transformaciones suscitadas en Bolivia han hecho emerger a varios sujetos sociales y cada uno con su proyecto societal como posibilidad real en movimiento.

Entonces el escenario es más denso, son varios actores, cada uno con sus propios problemas, cada uno con sus historias, pero a la vez también con una sola voz que se levanta fuerte y enorme en el escenario de estos últimos años, la emergencia de lo indígena originario campesino en Bolivia, o la presencia de los indios bolivianos empobrecidos, quienes no se han pensado como individuos multiculturalistas sino han pensado a Bolivia como parte de un gran territorio, y la reconstitución de sus derechos sociales, económicos y políticos comunitarios heredados desde Tiwanaku y del Tahuantinsuyo, desde el

territorio de los ayllus³ en tierras altas y las tentas en tierras bajas.

Uno de los grandes momentos que avizoró las resonancias de estas movilizaciones ha sido precisamente el papel de los pueblos y naciones anteriormente invisibilizadas por el poder hegemónico del Estado colonial. Con la emergencia de estos grupos sociales me refiero a los aymaras, quechuas y guaraníes que son actores que cargan en si una serie de proyectos que interpelan al conjunto de la sociedad; su importancia radica en la forma adoptada como “organizaciones sociales”, tal vez aplicada ahora a la coyuntura política; el mostrarse en cada plano histórico no significa hacerse protagonistas sino que arrastran herencia de sus abuelos/as de su sometimiento y de la clara evidencia de una clasificación positivista de quienes re-planificaron el territorio ancestral como forma de dominio sobre los cuerpos de nuestros pueblos.

Los sentido de pertenencia permiten a la población nacional organizarse no solo en el plano formal: acceder a una personería jurídica que los represente que no la visión occidental de la democracia representativa sino ver también con el mito, lo propio, la democracia comunitaria, es decir, es atreverse a mirar dentro de su propia identidad cuajada en el Pachakuti (tiempo cíclico), hacia el Suma Qamaña (Vivir Bien) y en lo posible saltar más allá de la fatalidad marcada por la colonialidad interna y un capitalismo salvaje global que aún mantiene a la mayoría de la población en condiciones de explotación y opresión; eterna subordinación a las élites del poder hegemónico que se encuentran en Bolivia: empresarios latifundistas distribuidos principalmente en todas las instituciones privadas y públicas.

3 Es un régimen de apropiación del territorio fundada sobre la propiedad común y la posesión privada, significa que la tierra y el territorio le pertenecen al propio Ayllu, a ese conjunto de hombres y mujeres que provienen de Tiwanaku o el Tawantinsuyu, y la posesión privada es concebida solamente por la pertenencia a esta estructura de apropiación, por eso no se puede dividir al ayllu en propiedades privadas, todo les es común a todos y así aprenden a cuidarla (Untoja, 1992, 11). De la misma forma podemos expresar que el Ayllu tiene o posee una estructura socioeconómica y política en base a dos elementos: territorio y familia (Paniagua, 2008:105-106).

Rompiendo las barreras postmodernas del papel estatal

Los momentos donde se encuentran Estado y Sociedad civil no tienen quiebres temporales sino fisuras de poder para mejorar las condiciones de vida o empeorarlas y cada acción es decisiva en Bolivia ya sea de parte de los que gobiernan o de quienes esperan “cambios” del gobierno o desde las movilizaciones inconformes con discursos que tratan de hacer aflorar las demandas olvidadas.

La aparición de Evo Morales como líder en el MÁS-IPSP fue de gran envergadura (nadie lo puede negar), debido a que este movimiento en esta fase se construye con una mirada más de participación plena de todas las organizaciones sociales y la sociedad civil en su conjunto con convicción colectiva, porque muchos indios e indias, se miraban en el rostro del “hermano Evo”.

Herve Do Alto define al MAS como una hegemonía inédita en tanto partido campesino, liderado por Evo Morales, definiendo al campesinado como la cabeza del movimiento donde predomina evidentemente la “cuestión campesina” (Herve, 2011:1-2). Esto como apreciación de contexto.

Pero ya el 2006 pude constatar que existen diferentes posturas ideológicas en el MAS-IPSP, llamado así Partido de gobierno; tuve una experiencia interesante. Por primera vez junto a algunas compañeras profesionales pensamos y dijimos si nos enlistamos a las filas del MAS tal vez podremos aportar; fuimos y nos presentamos ante varias personas que no conocíamos, pero lo primero que nos pidieron “¿cuánta gente van a conseguir?, deben traer cada una por lo menos unos cien- nos miramos con las compañeras y nos fuimos del lugar; afuera en la calle nos enteramos que mucha gente de partidos tradicionales anteriores se hallaban ahí en esa casa, finalmente decidimos no ingresar a un partido, sin que haya primero objetivos que recogieran las demandas de los pueblos, con personas quitoneándose los cargos. Pero también conocí personas con mucho cariño y empeño en el MAS, y eran precisamente aymaras por ejemplo que hasta ahora tienen esperanza en el “hermano Evo”.

No podemos desconocer que en el primer periodo de mandato del gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera eran vistos como hermanos de todo el pueblo boliviano, de los y las que habíamos luchado en las calles con movilizaciones para mejorar nuestra calidad de vida y nuestros sueños, eran una posibilidad para aportar a la construcción de una nueva realidad esperada por las organizaciones sociales quienes habían logrado cohesionarse en el “Pacto de Unidad”⁴ y se hallaban como nunca más organizadas en torno a una sola agenda nacional: lograr conformar un poder constituyente a través de la Asamblea Constituyente como el lugar desde donde se producirían los “cambios” esperados para todos los sectores marginados y explotados milenariamente.

Otro elemento importante será la agregación en torno a la nacionalización de los hidrocarburos, repercutiendo en la condensación de nuevas lógicas o sentidos a fin de establecer equilibrios políticos, a la par de recomposiciones en un ascenso y descenso en las estructuras de poder (Argirakis, 2012:37); desde la agenda de Octubre esa era la idea, que las transnacionales dejaran el país, pero hasta la fecha no fue así; el modelo de desarrollo se mantiene.

Entre el 2000 al 2003 se devela la crisis del Estado-nación y se produce un quiebre epistemológico porque se cuestiona al modelo neoliberal desde dentro de ella misma. Los efectos del decreto supremo 21060 ponen en el tapete el cuestionamiento de una democracia “pactada”, que vivió el país a través de una sola forma de gobierno, la representativa, defendida hasta ahora por las élites del país.

La democracia representativa no se origina en nuestro territorio sino Simón Bolívar trae al crear el país “Bolivia” y

4 El Pacto de Unidad se hallaba conformado por Organizaciones matrices de los indios: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación de Mujeres Indígenas, Originarias Campesinas “Bartolina Sisa” quienes procedían de una organización sindical desde finales de los setentas y la década de los ochentas; de la misma manera la Confederación de los “interculturales” recientemente habían cambiado de nombre llamados antes “colonizadores”, junto a las organizaciones de aymaras que quieren recuperar el territorio ancestral del Ayllu conocidos como CONAMAQ y finalmente pueblos de tierras bajas autodenominados ahora como indígenas conocida como LA CIDOB.

que hereda junto a las formas de desarrollo que se había iniciado en Europa, el Estado-Nación se había logrado erigir en países como Inglaterra, Francia con la Revolución francesa 1789, Alemania, Bélgica, España y otros. Es decir, hubo experiencias europeas de formas de gobierno mediante la representatividad: el parlamento o el presidencialismo juntamente al voto universal, así como todo lo que producía Europa era conocimiento “universal”.

Uno de los intelectuales que precede a la formación de los Estados-Nación es precisamente es Thomas Hobbes quien expone que la sociedad se halla constituida por hombres parecidos a los lobos y entonces se enfrentan lobos contra lobos llamada el iusnaturalismo que necesita un pacto como la única forma de no matarse a través de la institucionalidad del Estado.

Jacques Rosseau de la misma forma contribuye a ésta considerando que el hombre ha nacido libre y por todas partes se encuentra encadenado, por eso su libertad debe ser refrendada hacia la obediencia voluntaria institucional que sería el Estado-Nación, esta idea nace de la visión que se tenía de que los hombres no son iguales o no nacen iguales. Un hecho que se da en el razonamiento de Calígula, y de Hobbes, quienes pensaban que la humanidad es como un rebaño, donde el pastor es el jefe superior y nace para ser jefe para gobernar, por eso justificaban que los reyes eran dioses y que los pueblos eran bestias.

Estas ideas se manifiestan de forma estatal, no olvidemos que durante muchos años desde 1825 (en Bolivia) no hubo cambios en la concepción del poder sino la reproducción de la clase hegemónica, esto es sólo las élites en Bolivia podían hacer política; no así los pueblos indios porque fuimos considerados hasta ahora bestias.

En esa relación es razonable entender que un Evo Morales salido de un lugar pobre como es Orinoca en el departamento de Oruro fuera aceptado como el hijo o hermano de sangre, la “imagen del sujeto constitutivo”, que había llegado al poder para cambiar la estructura del Estado, mediante otra forma de gobierno. Nos preguntamos ahora

que Evo Morales Ayma ¿seguirá el mismo que sufría de hambre junto a sus compañeros/as coccaleras?.

Continuando con la descripción de los hechos:

“2004 al 2008 se trata de la configuración del campo político nacional por medio de la articulación del Bloque Cívico Regional cruceño y su confrontación con el bloque indiano-originario, campesino popular, para dar lugar a la disputa política polarizada dividida en dos momentos: el primer momento de la ruta crítica legal institucional de los cabildos, referéndums, iniciativas legislativas ciudadanas y procesos electorales, caracterizado por el constitucionalista cruceño especialista en autonomías-Juan Carlos Urenda,... este es el momento de articulación, auge, legitimidad y despliegue máximo del Bloque Cívico regional⁵ conocido como el empate catastrófico. Al final del empate catastrófico se consolida con el evento electoral del Referéndum Revocatorio de agosto del 2008 iniciando el segundo momento de la administración de la disputa política, por medio de hechos de fuerza o la ruptura de la ruta crítica legal institucional”.

2008-2009 estos años aparecen como clivajes y rupturas del ciclo anterior a través de cinco hechos de fuerza, dialógicos y electorales significativos que determinan el fin del punto de bifurcación. Estos hechos son: la toma de instituciones en el oriente, en septiembre de 2008, el Referéndum Nacional Constituyente en enero del 2009, los efectos del sindicato caso terrorismo de Eduardo Rozsa Flores en abril del mismo año, las dificultades para la oposición de derechas de consolidar un “frente único”, para las elecciones nacionales de diciembre de 2009, provocando la decadencia del Bloque Cívico regional.

5 “Es una categoría analítica construida para nombrar y caracterizar la conformación de una alianza pluri – institucional, suprapartidaria y para – política que contenía diversas formas organizativas de las oposiciones nacionales en contra del interrelativo proceso de embate a la estatalidad o estado en crisis, que tiene su momento de develamiento, a inicios del 2000. Este proceso de embate a la estatalidad fue realizado por la Confederación de movimientos sociales que forman luego el Pacto de Unidad, a través del bloque indiano –originario campesino popular o bloque socio histórico antagónico al Bloque Cívico Regional. El mencionado Bloque Cívico Regional, conformó un bloque histórico de resistencia y búsqueda de mantenimiento conservador del statu quo en el país, asentándose en la geografía material y simbólica de la denominada “media luna”, articulando su proyecto político contra hegemónico en torno al dispositivo ideológico y discursivo, de la autonomía departamental”(Argirakis,2012:49).

Entre el año 2000 al 2009 evidenciamos la transformación del sistema político partidario de la democracia pactada hacia la configuración del campo político nacional...una nueva agenda nacional tomó cuerpo, en la refundación del Estado Plurinacional. Así las lógicas y formas de manejo de la disputa política cambiarían sustancialmente de este momento en adelante (Argirakis, 2012: 38).

Las regiones bolivianas se fueron mostrando tal como es mediante las vías del territorio, como el llamado camino real trabajado ya por los incas, que une la costa peruana con La Paz pasando por el Cuzco, que va a dar fisonomía a la ruta terrestre de Chuquisaca, relacionada con Potosí y Tarija, pero donde los pueblos indígenas siempre se hallaban encubiertos (Roca, 2007: 15) por las élites latifundistas ahora como en Santa Cruz, Beni y Pando, quienes han mantenido las vías sólo para el uso y sus productos, pero que en nada han influido en políticas para beneficio de los pueblos empobrecidos.

Era enero del 2009. Nunca vi ante mis ojos marchar tantos actores sociales como son los pueblos y naciones indígena originario campesinos, apoyando a su presidente "EVO", pero en realidad era una nueva esperanza ante la disconformidad: la aprobación del nuevo texto constitucional; yo primera vez conocí en la Plaza Murillo a los hermanos y hermanas de tierras bajas, los vi y acompañé desde Caracollo, un lugar que se encuentra en el departamento de Oruro, fue impresionante verlos bajar desde Altu Pata (ciudad de El Alto), hasta la sede de gobierno, muchas de ellas no venían abrigadas, porque querían hacer su entrada a la sede de gobierno a la "Plaza Murillo" con su verdadera indumentaria, no traían zapatos, me emoció hasta llorar porque en sus ojos había una gran esperanza en el nuevo texto constitucional, no cabía ni una paja, y en esto me encontré con una amiga (Karin Monasterios) y apenas pudimos llegar hasta este lugar para ver el acontecimiento más grande y esperado: el nacimiento de un nuevo Estado llamado Plurinacional que contenga derechos ancestrales para una mayoría de la población boliviana olvidada por la institución del Estado.

En este escenario la paradoja se encuentra en el tipo de Estado que nació el 7 de febrero de 2009, como un instrumento que recogió nuevamente las visiones de las élites hegemónicas, debido a la negociación que hace el vicepresidente Álvaro García en el Congreso Nacional liderado por el entonces Senador de PODEMOS Carlos Borth, donde se cambiaron contenidos de artículos sustanciales elaborados en el texto de Oruro por los assembleístas del MAS y de otras tiendas políticas, quienes con mucha paciencia y pasión empujados por las organizaciones sociales del país, habían logrado construir un nuevo texto constitucional.

Desde entonces ya sentí un sabor amargo, de alguien que nos estaba traicionando, ¿por qué ceder tanto cuando las condiciones del gobierno tenían tanto apoyo a sus acciones fortalecidas por las organizaciones sociales como el hasta entonces?. El “Pacto de Unidad”: la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación de Mujeres Campesinas Originarias indígenas de Bolivia “Bartolina Sisa”, la Confederación Sindical de Colonizadores o Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCB), la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Kollasuyu (CONAMAQ) ha sido la fuerza naciente. Pero ¿qué pasó con el hermano Evo?.

Desde mi punto de vista la cristalización de la reproducción del orden establecido por el poder que nunca fue legítima es resultado de la crisis económica y política en la que se resquebrajó el Estado-nación boliviano, es decir, fruto de las políticas neoliberales asumidas por los mismos; sin embargo, entre la muerte o destrucción de un instrumento de poder como es el Estado que resume la reproducción de la vida de su sociedad, esta no ha culminado en su crecimiento, sólo se quedó en el nacimiento, entre el poder constituyente y una nueva herida abierta por las políticas en contra de la mayoría de la población marginada de derechos. Hoy el Estado es uno más de los actores que no aglutina decisiones de los diversos actores. En este escenario político, la existencia del Estado Plurinacional si bien es un nuevo reto, no tiene antecedentes

desde el pensamiento de las poblaciones preexistentes como fue el Estado Tiwanakota o el propio Estado Inca del Tawantinsuyu antagónicos al pensamiento socrático europeo, sino que nació mezcla de esa combinación con las élites del bloque de poder en el seno del Estado-nación, con apropiaciones inclusive de la mirada de partidos de izquierda.

Como concepto según Rafael Bautista tiene un modo de despliegue histórico, el concepto sería su contenido, y contiene lo potencial de ese contenido, al que se refiere como formas de vida, que al formalizarse va adquiriendo su propia lógica y su consistencia; concuerdo con él cuando el Estado se cristaliza puede ser en momentos de crisis, que atraviesa el país. ¿En qué medida sirve el Estado como instrumento o institución de cambio y transformación?

Visiones de territorio

Otro de los problemas hoy sin resolver es precisamente el acceso a la tierra y el territorio. El Plan Bohan implementado en 1953 con la Reforma Agraria había diseminado y fraccionado el territorio en pequeñas parcelas con títulos a cambio del “Voto Universal”, esta fue sin duda una política de la democracia representativa con el fin del blanqueamiento del indio o indígena, para llevarlos hacia las urbes o ciudades, con el fin de mantener la división social del trabajo: los indios y afro bolivianos como mano de obra barata para el mercado como capital /trabajo del que salió un nuevo nombre como es el “campesino/a” que viene desde los años setenta y ochenta y se organiza como “sindicato”, esta nueva forma de organización respondió en esta coyuntura a políticas nefastas de la dictadura militar de los sesenta al ochenta, veinte años de dictaduras.

Ahora después de tantos años de la Reforma Agraria ¿habrá ayudado en la organización social el tema del sindicato?. Al parecer “SI”, porque en Bolivia no se puede negar la fuerte influencia de la CSUTCB y las Bartolinas en todo el territorio boliviano junto a Evo Morales en el Gobierno, pero al mismo tiempo no se puede negar esa influencia sólo a partir de una

obediencia al Estado, dado que de ahí surgió otros problemas a nombre de estas organizaciones sociales.

La manera de cómo han ido surgiendo nombres en la palestra política nos sugiere que detrás de ellos no son pobres, entonces nos preguntamos quienes dirigen estas organizaciones, ¿serán las que demandamos “cambios” para eliminar la pobreza en Bolivia?.

El Estado colonial es responsable de resquebrajar el territorio de los suyus, markas y a los ayllus así como desbaratar mucha ciencia y conocimiento, pero al mismo tiempo existen territorios donde ni siquiera lograron ingresar los conquistadores o invasores, estos mantienen hoy “sincréticamente” entre la modernidad del Estado-nación o la Bolivia republicana y lo que puede ser el Estado Plurinacional, en sus territorios ancestrales, sus formas de gobierno, sus instituciones propias así como su códigos morales, que no son reconocidos hasta hoy en Bolivia como parte de su organización territorial; no se hallan reconocidas los ayllus y markas; Bolivia está organizado entre Departamentos, Provincias, Municipios y Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOCs antes cantones). Produciéndose entonces un gran problema con el proyecto de reconfiguración territorial y el acceso a la formas de propiedad.

Aunque la territorialización ha adquirido otra connotación a partir de la aprobación de las cuatro autonomías: departamental, regional, municipal y autonomía indígena originaria campesina. El reconocimiento de las entidades territoriales autónomas (ETAS) recogen las experiencias de los españoles.

Existe una organización social que responde al “sindicato” y se halla ahora muy vinculada al gobierno Plurinacional como es la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y la Confederación Única de Mujeres Campesinas Originarias Indígenas de Bolivia “Bartolina Sisa” que son el soporte del gobierno de Evo Morales Ayma principalmente, además de los Interculturales llamadas “las trillizas” en el contexto de gobierno, quienes enfrentan el problema del minifundio y el surcofundio, que

han logrado con las políticas neoliberales crear el problema de las migraciones internas y externas sin una ley que las y los apoyen dentro y fuera del país. Y el gobierno no resuelve este hecho.

Al mismo tiempo esta división del territorio al interior de la configuración estatal plantea las visiones contrapuestas de las organizaciones sociales que buscan restituir a sus territorios desde el ayllu y la otra antagonica a la restitución ancestral es la demanda de derechos desde la visión del sindicato, cada uno legítimos en sus demandas, constituyéndose en un gran problema territorial: “sindicato versus ayllu”, que en el fondo es la lucha por el territorio de formas legítimas e históricas, situación política de transformación estatal que no se plantea el gobierno; no es lo mismo tener acceso a la tierra y al territorio desde una visión sindical que una cosmovisión del ayllu dentro de un modelo de sedimentación neoliberal.

La llegada al gobierno del MAS puso en el tapete una mayor discusión como disputas entre las propias organizaciones sociales, había una mirada diferente entre indios sobre el territorio y continúa existiendo, la controversia se vinculaba a la critica que venía del indianismo o “katarismo”, hacia la forma sindicato como estructura ajena a las comunidades, que fue impuesta desde una concepción monocultural. El katarismo siempre había combinado la visión étnica con la visión de clase, pero en sus variantes indianistas más radicales las formas de política de izquierda aparecía como apenas otra forma exógena y colonial (Schavelzon, 2012: 102).

Horizontes abiertos

Parecería importante recordar la teoría amigo/enemigo de Carl Schmitt (s/f), muchas de las veces no se sabe quién es el enemigo y quien el amigo, en esta relación Estado y sociedad civil, porque si bien muchas personas de las propias organizaciones sociales se han convertido en altos funcionarios y también parte de la clase media o profesionales destacados que fungían como operadores técnicos en

instituciones no gubernamentales ahora parecen enemigos de las reivindicaciones de nuestros pueblos.

Otro tema fundamental que se plantea desde las organizaciones sociales es el dilema de la identidad, cuestionada por la derecha y la izquierda, quienes pretenden que la identidad solo es un mero encaprichamiento sobre la forma que el ser migrante hace desaparecer las raíces que envuelven a cada boliviano, por eso más que todo desde la clase media quieren empoderar en la agenda nacional de que en Bolivia existe “lo mestizo”, para impulsar una nueva forma de multiculturalismo, que el gobierno más bien no tomó en cuenta para el censo realizado el 2012 que hasta ahora existen fechas sin emitir los resultados.

Podríamos afirmar que en el primer periodo del Gobierno se dieron de forma conjunta con los sectores sociales, el Bono Juancito Pinto, el Bono Juana Azurduy, principalmente la Renta Dignidad, recuerdo a muchos adultos/as mayores en la ciudad de El Alto y las provincias anterior a la Asamblea Constituyente su organización llamada Asociación de Adultos Mayores (ASAMA), tenía ya la propuesta de la Renta Dignidad que luego fue constitucionalizada en la Asamblea, estos proyectos o programas fueron parte del Plan de Desarrollo planteada por el gobierno para el año 2006-2011; sin embargo la misma sociedad civil aún no conoce los impactos de estas políticas.

En el segundo periodo de Gobierno la oposición desaparece del escenario político de forma abierta y de confrontación con el gobierno, muchos analistas indican que desapareció y esa afirmación si es una falacia; las élites no desaparecen, al contrario si bien el gobierno pudo desarticularla, gracias a medidas decisorias de los movimientos sociales indígenas, o las organizaciones sociales hasta personas de a pie convencidas o con conciencia de la defensa del “Proceso de cambio”, ahí comienza otro escenario para Bolivia.

Aparecen los sujetos con sus propios proyectos como los sectores indígenas y originarios solicitando respuestas a procesos de demandas sobre “límites” por ejemplo en algunos

sectores de Oruro, o indígenas originarios campesinos que habían demandado el manejo de su centro minero; mineros demandando nacionalización o posicionamiento estatal frente a mineros cooperativistas; el gobierno responde con medidas de agresión mediante la Institución policial como ente que defiende a la clase social del Estado, mientras que la gestión pública se encuentra en elaborar “leyes” y es ahí donde aparecen servidores públicos empoderados (Ministros y técnicos).

Siento la “subvención” existente de parte del Estado a los recursos hidrocarburíferos es un tema no discutido por el pueblo boliviano, solo con las organizaciones sociales o “las trillizas” pero con sus cúpulas dirigenciales que no han logrado desmontar la verdadera “representación” de las mayorías, por esta razón el pueblo boliviano recibimos la noticia del gasolinazo como un balde de agua fría igual que el DS. 21060. De noche a la mañana nos despertamos con el gasolinazo, todo subiría de precio, y así fue.

En esta ocasión quiero recuperar la palabra de quienes no se hallaban organizados pero eran parte de quienes habían luchado en las movilizaciones de estos últimos años, no se encontraban las organizaciones sociales sino el sujeto político inconforme que se muestra nuevamente, recuperando su sentido, encaminando el proceso que en el gobierno se ha quedado en discurso, es quien consigue en estas crisis transformaciones y a quienes hoy agradecemos, no se logró frenar la subida de precios pero más que todo ha influido mucho en la subida de precios desde entonces en las viviendas (alquileres, anticréticos y precios de las viviendas) y no así en los alimentos.

Modelo de sociedad

Desde la llegada al gobierno se ha visto una fuerte influencia de parte del Vicepresidente Álvaro García Linera por “incorporarnos” desde una visión de izquierda a la propuesta primero de un “Capitalismo Andino” (que no tuvo repercusión), luego en ambos en la visión de un “Socialismo

Comunitario” donde lo indígena es sólo como imagen sin propuesta.

En Venezuela de la misma forma se plantea el “Socialismo del siglo XXI”, cuando los pueblos indígenas aún se encuentran como soporte para un gobierno de izquierda. En el caso de Bolivia el gobierno del MAS tiene en su seno a comunistas y socialistas de partidos políticos de izquierda, quienes responden también a una forma de gobierno representativa, donde el socialismo es un discurso sin práctica; se mantiene relaciones neoliberales de mercado. Por lo tanto es prematuro aún pensar, en un modelo de sociedad con contenido socialista, cuando las movilizaciones del sujeto emergente en Bolivia son los pueblos indígenas originario campesinos; se plantea nuevamente la cuestión de si vamos a ¿crear un socialismo copia otra vez de Europa?, y esto ¿con formas de gobierno representativas? ¿Dónde quedan las formas embrionarias de sentido comunitarias del ayllu? ¿O de qué tipo de comunidad estamos tratando de construir?

Otro problema central es la confrontación actual de “indios contra indios”, estos últimos meses del 2013, como fue la confrontación de las “trillizas” con la Central Obrera Boliviana por el tema de “la jubilación”, problemas irresueltos nos vuelven a poner en alerta, ¿debemos buscar el bienestar solo a través del éxito? ¿O mejor nos falta un diálogo entre iguales sin intermediarios como quienes hoy tienen el poder?

Breves conclusiones

La agenda de las movilizaciones de la Guerra del Agua el 2000, la Guerra del Gas el 2003 y la agenda de la lucha por los Hidrocarburos el 2005, han logrado levantar en Bolivia una clara conciencia o un quiebre en el pensamiento de que ya no somos los mismos, esta nueva generación somos o hemos comprendido que solos no podemos enfrentar cambios, sino a través de la organización y la unidad como sentido de pertenencia, que significaría no solo haber atravesado la conciencia, sino nos encontramos ante tiempos

de transformaciones estructurales porque los contenidos del Estado-nación no se ha desmontado.

La oposición conservadora se encuentra esparcida en todo el escenario político, no creemos que haya desaparecido como indican muchos analistas, existe como el camaleón incrustado en todo el aparato estatal y en las propias organizaciones sociales y que mantiene el poder económico desde las empresas y el latifundio y la agroindustria en detrimento de la pequeña parcela que sobrevive.

Otro elemento para este tema de balance es el modelo que adopta el Estado para gobernar, es decir, la configuración del Estado con la sociedad civil habría de haber cambiado a una relación horizontal, es decir, a una democracia más participativa, pero en el segundo periodo de gobierno las Leyes no son consensuadas sino desde el escritorio de los técnicos abriendo fisuras nuevamente en las demandas de los sujetos políticos.

Existe una gran preocupación ahora para todo el pueblo boliviano, pues en qué medida los recursos naturales no sólo de Bolivia también en toda Latinoamérica, se han confiscado de manera estatal, cuando el proyecto de Simón Bolívar, al fundar Bolivia en 1825, deseaba que todas las tierras pasen a manos del Estado-nación, esa forma de expropiar el territorio a los verdaderos dueños de la tierra y el territorio, se ha mantenido con las leyes liberales; es un problema porque ahora quienes se hallan gobernando desde el Estado indican que los indios llamados (Indígenas Originarios Campesinos en la Constitución Política del Estado) no pueden ser dueños de la riqueza de sus territorios. Así lo indica la Ley y es así como está planteada en la Constitución. Por lo tanto ¿quién es dueño de las riquezas naturales y de los territorios en Bolivia? ¿En qué clase social se halla concentrada la riqueza social?. Pues se conoce la implementación del Plan IRSA: empresarios privados mundiales que vienen creando carreteras en toda América latina con el fin de abaratar costos para el saqueo del agua, hidrocarburos, y todos los otros recursos naturales como la madera y los maderables para tener ciudades como Dubay (una Megaciudad) creada de la nada para los multimillonarios

en un país como la India o pensando ir a habitar Marte o la Luna.

2010 es crucial para Bolivia, y en lo adelante, el gobierno se desenmascara para mostrarse como un gobierno rendido a las transnacionales, es decir, desde ahí la confrontación por el TIPNIS, el Parque de reserva natural en el Isiboro Sécore, por realizar una carretera, tendrá otra fisura que rompió con el Pacto de Unidad: la CIDOB y CONAMAQ, que a la fecha no tiene respuesta y mejor ha hecho confrontar a indios contra indios, de la misma forma las élites también se encuentran solapadamente encubiertas entre nuestras demandas.

No estoy de acuerdo en clasificar este tiempo de transformaciones en Bolivia, de forma positivista, o evolucionista; el Estado y el gobierno en sí ya no representan a los pueblos indígenas originarios campesinos de base y a los sectores excluidos y explotados sino se quedaron con sus cúpulas, favoreciéndose sólo a pocas personas.

Como autocrítica a las propias organizaciones sociales, que poco a poco han dejado las agendas que aglutinaban a toda la población, para convertirse en líderes cooptados por el gobierno, sirviendo a objetivos más estatistas y prebendales de la misma forma con algunos soñadores como “técnicos” que luchaban por una justicia común, hoy se encuentran en el Estado, consumidos por la administración legalista.

El gran problema radica en las agendas de lucha de los varios sujetos emergentes, desde todos los rincones del país, un enfrentamiento ahora del Estado con la sociedad civil, cuando debería ser con las transnacionales que hoy tienen gran vigencia por los contratos anteceditas por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (desde la década del noventa).

Para concluir esta breve mirada, ¿quiénes hoy llevan adelante las transformaciones en Bolivia?, ¿serán las organizaciones sociales o los sujetos emergentes con sus proyectos propios?, ¿dónde se encuentra el horizonte que nos unía a todos los sectores?, ¿será el Estado Plurinacional el proyecto de los sujetos políticos? ¿Quién define una estrategia para convertirla en políticas?.

La acción movilizadora de los sectores más empobrecidos se mantiene abierta, no se puede idealizar a los sujetos políticos porque también tienen su tiempo y sus logros que para unos responden a coyunturas pero queda en el seno la inflexión entre el Estado y la sociedad civil como un horizonte abierto: el desmontaje del aparato burocrático del Estado colonial que sirve de instrumento de opresión y explotación en contra de la población oprimida.

Bibliografía

- Argirakis Jordan, Helena
2011 La reconfiguración del campo político, del boletín de análisis y prospectiva política, Andamios, arenas políticas, Bolivia: PNUD, No. 6, julio.
- Bautista, Rafael
2010 ¿Qué significa el Estado Plurinacional?, Reflexiones urgentes, Bolivia: Rincón Ediciones.
- Hilton, Forrest; Patzi, Félix; Sinclair, Thomson
2003 Ya era otro tiempo este tiempo, Bolivia: Plural.
- Paniagua, Teresa
2008 Sociología del Ayllu, desde el conocimiento local de Ayata, Bolivia: Pachakuti/Abya yala.
- Untoja, Fernando
1992 Retorno al Ayllu I, Bolivia: MEJIA.
- Do Alto, Herve
2011 Un partido campesino en el poder. Una mirada sociológica del MAS boliviano, en Revista Nueva sociedad, No. 234, julio-agosto, pag.95-111.
- Schavelzon, Salvador
2012 El nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia. Etnografía de una Asamblea Constituyente, Bolivia: CLACSO, PLURAL, CEJIS, IWGIA.
- Salazar Carrión, Luis
s/f La racionalización de la Política (fotocopias).
- Smithtt, Carl
s/f El concepto de lo político. La famosa dupla amigo-enemigo (fotocopias)
- Roca, José Luis
2007 Fisonomía del regionalismo boliviano, la otra cara de la historia, EL PAIS, Santa Cruz de la Sierra – Bolivia.
- Zemelman, Hugo
2010 Pensar y Poder (inédito aun sin publicar).

NUEVOS REACOMODAMIENTOS EN EL PODER. CAMBIOS PARA ARRIBA Y NADA PARA ABAJO

Pablo Mamani Ramirez⁶.

Presentación

¿Hay cambios como se pregona en los casi ocho años del gobierno de Evo Morales y García Linera en Bolivia? Se puede sostener en principio que sí. Pero lo central de estos cambios es un nuevo reacomodamiento de las elites en el poder, mientras el resto de la sociedad vive varias continuidades históricas aunque ciertamente complejas. El primero es un hecho estructural en la historia del poder en Bolivia (con sus variaciones según cada tiempo histórico) y lo segundo también es estructural aunque ahora con cierta novedad. En este nuevo reacomodamiento existen cuatro o cinco actores centrales. Éstas son los agroindustriales, las transnacionales petroleras y mineras, la “nueva” casta señorial de origen criolla, y, una naciente elite de origen indígena. Aquí el reacomodamiento significa un cierto movimiento de posiciones pero nada significativos porque no se produjo un sisma real en el poder. En nuestro caso no se produjo cambios sustanciales, por el contrario, se ha reproducido el poder con mayor legitimidad. Tiene nuevas estrategias y a la vez viejas formas del hacer político. El hecho central en ello es que el poder se reprodujo en su forma de dominación, es decir, de forma sistemática por la vía simbólica y por la vía de la violencia física, hechos contrarios a la idea de transformarlo o destruirlo.

6 Pablo Mamani Ramirez es sociólogo aileño y aymara. Tiene maestría en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Ecuador. Es coordinador de la Revista Willka editada desde la ciudad de El Alto, autor de varios libros. Su último libro es: “Wiphalas y fusiles”; es Doctor por Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM-México.

¿Qué quiere decir cambios para arriba y continuidades para abajo? De lo anterior se colige que estos cambios existen en el espacio de las elites. No a nivel de la totalidad de la sociedad donde la pobreza extrema es una realidad. Hay un reacomodo en su forma diversa pero centralmente en lo económico y social. Las que se han reacomodado es la elite “moderada”, no las radicales, tales como el grupo de Branco Marinkovic y Rubén Costas (que tratan de re-articularse sin un proyecto ni un líder). Estos moderados han tenido la capacidad de acercarse al gobierno y desde ella mantener sus privilegios. Y las continuidades históricas, de su parte, se refiere en que no existe un cambio radical sino reformas que cada vez son más débiles dentro de un régimen de indigenismo multicultural. Esto es novedad porque no es un multiculturalismo criollo sino también campesino y mestizo que “revaloriza” la diferencia pero sin cambiar el sustrato del poder. Por ello en los últimos cuatro años se impuso las contra-reformas a las reformas de 2006 y 2009. Este es un hecho absolutamente claro porque contradice radicalmente el proyecto de un cambio estructural de la sociedad; mismo que se expresa como un fracaso similar a la revolución de 1952, ahora bajo el MAS (Movimiento Al Socialismo). Sin negar que existen reformas liberales, éste es un hecho categórico. Así asistimos a la continuidad histórica del poder bajo el rostro y discurso de lo indígena o campesino pero sin gobierno real de ello. En otras palabras, hay una reproducción del paradigma de poder de tipo vertical con vestimenta plurinacional. Aunque este último hace diferencia formalmente al momento histórico anterior, pero no en su sustrato.

El gasolinazo del diciembre de 2010 fue parte de este reacomodamiento en el poder de las transnacionales petroleras (como veremos más adelante) que junto al gobierno de Evo-García decidieron pasar la factura a la gente que la rechazó radicalmente porque era imposible subrogar las ganancias petroleras y porque no tenían cómo solventar sus gastos. La gente no tenía una reposición a sus ingresos económicos afectados. Aquí se produjo la primera implosión y una contradicción seminal del Proceso. En este hecho, el

Proceso de Cambio se develó como un engaño histórico como tantas otras. Entonces, este Proceso sirvió para hacer visible el nuevo reacomodamiento de las elites transnacionales, bolivianas y de origen campesino en el poder.

Aquí la novedad sin duda es la emergencia de una nueva elite de origen campesina o indígena pero sin embargo su condición real está subordinada a las otras elites que tienen mayor capacidad económica y conocimiento técnico de las cosas del Estado. Los mismos son: los cocaleros, los cooperativistas mineros (con asalariados mal pagados), la burocracia estatal de origen quechua y aymara, comerciantes aymara de diverso orden y pequeñas empresas familiares. Aunque esto no es propiamente producto de las políticas del régimen actual. Vienen de una larga acumulación social de su economía. Sin embargo su cantidad numérica en relación a las empresas extranjeras no les garantiza sino como minoría en términos económicos; entonces no tiene presencia en los espacios de la elite agroindustrial y petrolera para imponer sus intereses ni su visión (aunque algunos de estos grupos no tienen una visión clara del país).

Mientras esto ocurre en la estructura jerárquica en la sociedad subsisten grados de pobreza y de discriminación aunque aminorada. Los barrios o zonas periurbanos, los ayllus como comunidades campesinas, siguen viviendo casi como antes del 22 de enero de 2006 cuando Evo Morales y García Linera asumen el poder. Incluso hay gente que vive en condiciones infrahumanas como algunas personas de tercera edad en la Ceja de El Alto que se dedican a lustrar zapatos. Son estos hechos y otros que nos permiten hablar de las continuidades históricas. Ante esa realidad el único sector con validez moral que ha criticado duramente tal situación es el movimiento de los ayllus de los Andes y el movimiento indígena en la Amazonía. Estos finalmente se han insubordinado ante la continuidad del poder neocolonial. Desde este lugar mantienen el imaginario del indígena como el factor de auto-imaginación como el país mismo. “El país siempre nos fue ajeno y ahora no puede ser que esto continúe” se afirma.

¿Cómo entender los nuevos reacomodamientos en el poder cuando el discurso oficial es descolonizar el Estado y de las instituciones sociales? Y lo más importante ¿bajo qué mecanismos se produjo este reacomodamiento de las elites en el poder? Y ¿cómo se produce la emergencia de las nuevas elites de origen aymara y quechua? Y algo central ¿por qué el reacomodamiento en el poder de los grupos de poder es un límite seminal del Proceso de Cambio? Y ¿estos reacomodamientos son de carácter étnico y de clase?

Estas preguntas deben entenderse dentro de un extraordinario momento social y político que aún vive Bolivia. Los casi ocho años del gobierno del MAS no es uno más de los tantos otros gobiernos, sino éste es fruto de las profundas luchas sociales de distintos niveles y particularmente indias de los últimos 50 años. El MAS viene cargado por una lucha social y con la cuasi destrucción histórica del Estado colonial como no se había observado antes. Antes de 2000 y 2005 era imposible, por ejemplo, pensar en trastocar el orden colonial y del capitalismo criollo en Bolivia.

Somos conscientes que el tema es muy complejo pero también es rico para el estudio de la reproducción del poder. Entonces trataremos aquí los nuevos reacomodamiento en el poder, sus mecanismos y sus actores en un periodo de casi ocho años del régimen de “revolución democrática y cultural”.

Poder como dominación, entre otros

El poder como relación social la entendemos aquí entre tres grandes sistemas. Esto es: a) el poder propiamente como dominación, b) el poder comunitario definida en la horizontalidad y c) el poder unidual al que nosotros la llamamos el otro poder (el de Nosotros). No vamos hacer una revisión de estos tres grandes sistemas de poder sino sólo haremos referencia al poder como dominación. Aunque para esto será importante ver el contexto de los tres.

Se entiende por poder comunitario como una relación horizontal entre los diferentes actuantes del poder que están ubicados particularmente en lo local donde se toman

decisiones conjuntas y las asumen sus efectos de modo también conjunta. Su relación es horizontal porque todos asumen las decisiones y las acciones decididas se ejecutan del mismo modo. Es una relación de cara a cara como es la misma cotidianidad de la vida social. Actúan en un terreno conocido porque las reglas y normas morales son también compartidas. Aunque ésta tiene algunas paradojas. Su primera paradoja es que no tiene un alcance mayor o meso para convertirse en lo antitético al poder vertical. Este poder se observa en las comunidades campesinas, en ciertas juntas vecinales de los centros urbanos, así como en los sindicatos obreros. Su segunda paradoja es que éste se produce solamente en los momentos extraordinarios de la sociedad como son las movilizaciones y levantamientos sociales. Y luego éste se hace sociedad cotidiana. Sólo en momentos extraordinarios se hace presente o es visible. Aunque éste es la naturaleza de este tipo de poder. Esa también es el fundamento de su existencia.

De su parte el poder unidual, que quiere decir, dos poderes en uno, *pä ch'ama* (dos fuerzas) es un hecho que viene de la lógica diagonal donde un conjunto de actores toman decisiones de forma rotativa. Rotar es cambiar de autoridades según un tiempo cíclico de la vida social y político. En este caso rotar es el ejercicio del poder de modo territorial entre dos grandes sistema de poder. Esto es entre el poder de los de arriba y los el poder de los de abajo. En aymara es entre *aran* y *urin*. No hay que confundir entre la derecha e izquierda o como el caso norteamericano de los demócratas y republicanos. Aquí no tiene sentido la derecha y la izquierda. Estamos ante otra categorización del poder y otro sentido de la política. Es en este sentido que aquí descubrimos otro tipo de poder que no es ni vertical (liberal) ni horizontal (comunal), sino propiamente diagonal. La lógica y práctica de lo diagonal es parte de un sistema de vida social y de pensamiento que tiene una larga data en la historia de la lucha en los Andes. El turno o muyu (compartir un recorrido) es uno de ellos y la rotación. Lo diagonal es un sistema que transversaliza un conjunto de lógicas y acciones que no siempre tiene el sentido del Uno,

del yo universal, del absoluto, como tiene la lógica liberal del poder, sino es un poder compartido entre dos grandes partes del mundo y de la sociedad humana y natural. Es también entre el hombre y la mujer, entre orqu-uma, entre lo duro y lo blando. En cierto sentido las cosas casi siempre son pensadas como dos en el mundo de los ayllu. Porque de esos dos sale el tres, el cuatro y así infinitamente. Esto nada tiene que ver también con la dialéctica o la tercera vía de Giddens (Giddens, 2010). Lo unidual son dos grandes partes estructurantes de la sociedad, observable en los Andes. A éste lo hemos llamado el sistema de poder binario o poder compartido. Y la palabra compartir nunca es un hecho de Uno, o no puede venir del Uno, sino viene y es Dos. Sociológicamente sabemos que uno consigo mismo no produce acción social. Entre dos si se producen un movimiento. Y ese movimiento es sustancial para producir un hecho económico y político. En aymara esto es pã chãma, dos fuerzas. O jaqi, que es dos. Una sola persona por sí mismo no es jaqi, es ch'ulla improductivo. Y cuando la fuerza de dos adquiere fuerza ya no es necesario la fuerza (Mamani, 2004). De dos existen la cuatripartición y n sucesos no lineales sino sustancialmente complejos y cuadrículados. Posiblemente la wiphala es el símbolo que mejor expresa este hecho. La franja blanca diagonal es la representación de los dos lados estructurarte de la sociedad y es parte del pensamiento político aymara (Platt, 1988). En la actualidad esto es posible observar en la FEJUVE (Federación de juntas vecinales de El Alto) de El Alto (Mamani, 2013) y en el CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu) (Mamani, 2010) y en otras instancias de modo diverso.

En el caso de la FEJUVE (pese a la intromisión de los partidos políticos) existe un sistema de rotación en la Presidencia (de esta institución) cada dos años; esto es entre el sector Norte y el sector Sur. Ello significa que no es posible que el Norte ejerza el cargo por dos veces consecutivas como tampoco es posible que el Sur lo haga. En el movimiento de los ayllu-marka del CONAMAQ tiene

una relación aún más compleja porque la rotatividad del poder es entre diversos mundo de los Andes (16 naciones precoloniales) y a la vez es directa. Aquí hay un principio ético del poder (o universal) y un principio práctico de ella para que entre ambos se reconstruya permanentemente el poder. El poder no es un hecho dado sino es un hecho dándose. La misma se expresa entre los tata mallku y mama t'alla a través del Consejo de gobierno y el Consejo de Consejos y otros mecanismos de poder unidual. En otras palabras: son dos poderes en uno (ver Mamani, 2013, inédito).

Mientras que el poder como dominación es una relación vertical. Esto significa que es de arriba para abajo. Aquí el que tiene el poder hace que éste sea para su obediencia o control de esa relación desde y para el Uno y de allí en relación a los otros. Es decir, el que ejerce el poder hace en función de su propio sentido de dominio y de los privilegios adquiridos o no. O simplemente bajo la argucia de la racionalidad burocrática como expone claramente M. Weber (2002). Weber sostiene que el poder y la dominación es un sistema donde el actor A tiene la capacidad de influir quiera o no quiera al B aunque éste se resista. Y otra posibilidad de poder en éste no existe. La lógica y su práctica es lineal y hasta suena como mecánica que es un hecho contrario a la dinámica sociológica. Aunque por medio siempre existirá negociaciones pero el fin es la obediencia a ese Uno o al A. Así en esa relación, es imposible que el B pueda tener alguna posibilidad de mandar al A. No es posible la bidimensionalidad del poder. Prima la lógica de la unidimensional del poder. Dentro de este gran marco de estudio del poder de lo liberal, pues, para otros autores esto es aún más complejo. ¿Por qué? El poder funciona no desde la relación con el otro sino dentro de sí mismo y en relación a sí mismo. El poder está depositado en el B, en el actor obediente, porque allí el poder funciona sin que el A tenga que estar recordándolo o estar presente para que el B haga lo que el A quiere que haga (Lukes, 2007). Aquí la civilización del poder liberal ha triunfado porque éste está

en el sujeto dominado y es quien auto-ejerce el poder del A hacia sí mismo. Esto es muy parecido al que deja notar M. Foucault dada en la microfísica del poder. Aquí el poder está en todos lados y nosotros vivimos queramos o no en las redes del poder (Foucault, 1992).

Del primero, el lugar típico de ello es el Estado y sus sistemas de gobierno aunque también la sociedad es parte de ella. Esto es en sus tres sentidos. Uno es la forma liberal, dos la forma socialista y, tres, la forma autoritaria (dictadura militar o proletariado). En el sistema liberal esto es un hecho fáctico como al que aludimos arriba y hoy es normalizado. Es el liberalismo que se presenta como la democracia liberal. Es decir, aceptado e institucionalizado. En el socialismo o izquierda incluso se observa la misma en las revoluciones triunfantes vía armadas como la de Nicaragua y otros. Las revoluciones armadas triunfantes ciertamente tienen ventaja y ello luego se convierte en el poder de arriba-abajo igual que la de los liberales (aunque dentro de un nuevo contexto). Entonces por vía democrática liberal o vía armada se logra ascender desde abajo hacia el poder de arriba. Y ya estando allí se vuelve a ejercer el poder en la misma lógica de los derrotados incluso contra su propio pueblo. Esto lo denunció Rakovsky en 1928 (uno de los comandantes de Ucrania de la revolución rusa). Sostiene. “Pienso ahora en la posición social de un comunista que tiene a su disposición un automóvil, un buen apartamento, que disfruta de vacaciones regulares, y que recibe el salario máximo autorizado por el partido; esta posición difiere de la de un comunista que trabaja en las minas de carbón y recibe un salario de 50 a 60 rublos al mes. En lo que se refiere a los obreros y los empleados” (Rakovsky, 1928)⁷.

En Bolivia ocurrió esto en 1952 con el MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) y ahora con el MAS. Esto dado en la lógica del poder como dominación que es concentrar en un reducido grupo de expertos que no es más que la expropiación

7 Argumenta. “En un estado socialista, en que la acumulación capitalista está prohibida por los miembros del partido dirigente, esta diferenciación empieza por ser funcional, para adquirir después carácter social”.

del poder de la gente de diferentes modos y acciones. Hoy es ésta lógica la que se ha institucionalizado o normalizado. Y esto se reproduce independientemente de si el Presidente es indígena, obrero, o mujer. El substrato es la efectivización máxima del poder a través de diferentes formas: lo simbólico, físico y por la no-relación.

Así en este contexto se produce el nuevo reacomodamiento en el poder en Bolivia. Incluso se podría decir que es estructurarte porque se está dándose como si se tratara de un proceso de la propia lucha social. Ciertamente se presenta como la lucha social misma que sin embargo es un acontecimiento que devela el realismo de la política en su sentido descarado. Aquí presentamos las constataciones.

Reacomodarse en el poder

El 27 de mayo de 2007 se conoció que el Vicepresidente García plateo pactar el poder con la agroindustria de Santa Cruz en el contexto de la Asamblea Constituyente. Aquí el dato. Ante la pregunta de su entrevistador: “¿[l]a idea no es imponer una reforma?” García Linera: “No. Nuestro objetivo es pactarla. Hemos dado pasos importantes en este sentido y estamos dispuestos a dar otros. Lo que pasa es que hay que ver a distancia lo que está ocurriendo en Bolivia: una ampliación de élites, una ampliación de derechos y una redistribución de la riqueza. Esto, en Bolivia, es una revolución”⁸. Es decir, esto nos devela que desde el principio no se tenía como objetivo el trastocar el orden liberal y neocolonial del país. Sino pactarla. Ahí su realismo político.

Ahora en importante decir que estas elites están en función de gobierno y otros haciendo negocio económico y político incluso mejor que en tiempos de Gonzalo Sánchez de Lozada. Desde este lugar los banqueros, por ejemplo, los agroindustriales de Santa Cruz, las transnacionales mineras y petroleras, tienen mejores condiciones para exportar y

8 Bolivia: las élites comparten el poder, Redacción de Econoticiasbolivia.com http://www.constituyentesoberana.org/3/destacados/otrosdest/mayo2007/290507_1.html (04/06/13).

comerciar sus productos y explotar la mano de obra frente a su inicial miedo y rechazo al régimen del MAS. De su parte, las nuevas elites campesinas o indígenas también están en función de gobierno en términos políticos y otros están produciendo una economía mediana en mejores condiciones aunque sin mayor capacidad de decisión ni intervención en rubros como la petrolera y la minera; a excepción de las cooperativas mineras aunque no tiene las mejores condiciones tecnológicas ni laborales de sus trabajadores. En éste existe una elite que gana hasta 200 mil bolivianos al mes. A esto algunos lo llaman la ampliación de las elites en el poder.

Trasnacionales y elites bolivianas

En principio en Santa Cruz se produjo luchas intra-elites entre sí y contra el gobierno central. De ello ha sacado ventaja las elites moderadas al lograr negociar muy bien sus interés y hoy tienen logros económicos importantes junto a grupos de poder de Brasil y Argentina (los brasileños tienen mejores tierras junto a los argentinos en Santa Cruz como veremos más adelante). Algo parecido pasa en otras regiones de Bolivia. Lo que ocurre en las Expoferias de Santa Cruz es parte de ello. En efecto en la realización de estos eventos comerciales de 2011 y 2012, se produjo, grandes ganancias para dichos grupos. En la 36 feria Expoferia de 2011 han tenido un movimiento económico de 172.6 millones de dólares americanos en 10 días de esta actividad⁹. Y en 2012 éste se incrementó a 283.5 millones de dólares (llamado formalmente Expoferia 37-2012)¹⁰. Es decir, han aumentado sus ganancias líquidas entre una y otra en 110.9 millones en dólares. Dejar notar que en Santa no solo existe las Expoferia sino también hay ferias como Agropecrus que en 2012 movió 1.350. 500 dólares. Así existen otras ruedas de negocios.

Este hecho va acompañado por las acciones de un gobierno que incentiva a la “producción” y la explotación de

9 http://www.icex.es/icex/cda/controllerpag ICEX/0,6558,5518394_5519002_5630587_4507495,00.html (08/01/2012)

10 Expocruz 2012. 37 Feria internacional de Santa Cruz del 21 al 30 de septiembre.

la tierra y los bosques en favor de las elites agroindustriales y petroleras transnacionales. Uno de estos ejemplos es la aprobación de la Ley de Desmonte (No. 337) en 2013 que incluso fue entregado a los empresarios de Santa Cruz con gran publicidad. A través de esta Ley los agroindustriales han sido perdonados en el delito de actividad de deforestación del monte sin autorización previa. Es un perdonazo a la deforestación de aproximadamente de “5 millones de hectáreas en el país”¹¹.

Los beneficiados directos de ello han sido los empresarios sojeros, los productores de girasol, además de los ganaderos, aunque también los migrantes de los Andes (llamados formalmente los interculturales). Para hacer realidad ello los empresarios deben acogerse y asociarse para recibir incentivos económicos dado en un simple trámite admirativo. Esto sin contar que dichas elites reciben diésel subvencionado por el Estado plurinacional en 150 millones de dólares al año y la mitad va a Santa Cruz para la agroindustria.

En este proceso de reacomodamiento otro sector que gana bien es la banca. En efecto según el estudio de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) con datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), las utilidades del sistema bancario boliviano han crecido de 102 a 1.276 millones de bolivianos en diez años. Esto es entre 2003 y 2012. Existe un aumento de 1.174 millones de bolivianos entre uno y otro. El año de mayor crecimiento (desde 2004) fue el año 2012. Asimismo ha crecido la cartera de créditos en 208 por ciento que en números reales es de 17.658 a 54.326 millones de bolivianos. De su parte el patrimonio de los bancos aumentó en un 122 por ciento. Esto es de 3.615 de 2003 a 8.018 millones de bolivianos en 2012. Aunque el gobierno a través del Ministro de economía Luis Arce Catacora anuncia que la Ley de Bancos hará que las utilidades tengan una función social. “Ahora salen con que quieren capitalizar, ahora son pues los que vienen con sus pantaloncitos rotos, zurcidos,

¹¹ El gobierno aprobó un decreto supremo. Perdonazo al desmonte pone en riesgo a los bosques, 30/05/2011, <http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.laprensa.com.bo> (31/05/13).

sus máquinas también. Son pobrecitos los bancos, cuando han ganado muy bien todo este tiempo”¹². Y argumentó con clara precisión: “Ha sido en nuestro gobierno y bajo nuestro modelo económico que el sector financiero ha tenido esta rentabilidad y estas ganancias en las cifras, mucho más que en tiempos de los gobiernos neoliberales”¹³. Esto es entre 2006-2012. Es una confesión de parte.

Aquí se incluye a fondos financieros, mutuales y cooperativas. En esa relación, otro autor, Abraham Pérez, sostiene que la banca privada boliviana “es el sector que más ganancias ha tenido en los últimos años a nivel de América Latina sin que por esta razón haya cumplido con el sector productivo del país”¹⁴. Lo incoherente del hecho es que esto no es productivo sino es un sector usurero porque compra valores, compra bonos, realiza compra y venta de dólares y hace préstamos de corto plazo. También tiene una actividad de consumo de productos suntuarios y simplemente comerciales. Es decir, éste es un sector no propiamente productivo sino financiero que muchas veces es muy volátil como lo demostró las finanzas de la Unión Europea que tiene impacto en millones de españoles o árabes. Es el crecimiento del sector usurero y no propiamente un sector productivo.

De su parte en los últimos años mediante el negocio del gas las importaciones crecieron, esto particularmente de Brasil. Ésta representa casi 3.586 millones de dólares. El país tuvo mayor capacidad de importar pero esto para sectores de negocio relacionados con las elites bolivianas y algunas transnacionales. Aunque según el informe de INE (Instituto Nacional de Estadística) de 2012, las exportaciones también han sido superiores en 28,12 por ciento en relación a 2011. Estos significan dos cosas. “[Q]ue las compras de bienes

12 En esa relación uno de los medios de información título uno de sus artículos. “Los activos del sistema financiero crecieron 19,5%”. La banca ganó 1.460 millones de bolivianos en 2011, <http://www.bolpress.com/art.php?cod=2012022301> (30/05/13).

13 Gestión 2006-2012. Ganancias de los bancos crecen 312% en 6 años, domingo, febrero, http://www.erbol.com.bo/noticia/economia/17022013/ganancias_de_los_bancos_crecen_312_en_6_anos (17/02/13).

14 Ganancias de los bancos crecen 312% en 6 años, con fuente en Erbol. <http://www.boliviaentusmanos.com/noticias/bolivia/articulo62039.php> (11/06/13).

pasaron de 7.672 millones de dólares, en 2011, a 8.179 millones de dólares en 2012, mientras que las ventas subieron de más de la subida de precios de gas natural”.

Las transnacionales petroleras

En el negocio del gas y del petróleo según IBCE (Instituto Boliviano del Comercio Exterior), aunque hayan descendido levemente los precios del petróleo, existe un aumento considerable de los precios internacionales del gas. Esto es “...el precio del gas natural tuvo un incremento desde los meses de septiembre y octubre del presente año (2012)”¹⁵. Y al 19 de diciembre de 2012 el precio del gas tiene un precio internacional de dólares 3.79 por millón de BTU (British Thermal Unit) (IBCE, 2012). Significa que para septiembre de 2012 el precio era de 2.95 dólares por BTU y a noviembre subió a 3.79 dólares por Millón de BTU. Los mayores ingresos vienen de la venta de gas a Brasil y Argentina. Y esto bajo la intermediación del Estado donde el Estado no hace el negocio propiamente. Dejar notar también que se sigue vendiendo el gas y petróleo como materia prima. Es decir, sin el valor agregado y, por otro, se vende los hidrocarburos no separados de otros componentes de la que saca ventaja las transnacionales petroleras. Aquí existe un negocio redondo de estas empresas transnacionales y parte pequeña de Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos (YPFB).

A los elevados precios internacionales del gas ahora se lo llama el gran “megaciclo” de dichos precios. Muchos recursos naturales, pero fundamentales el gas y el petróleo mantendrá este megaciclo por un bien tiempo. BBC de Londres hace notar este incremento. Sostiene que hace diez años (en 1998) el precio del barril del petróleo era 10 dólares ahora en 2012 es 135 dólares americanos¹⁶. Esto significa que las transnacionales petroleras no trabajan a pérdida sino siguen ganando como antes y con mejores incentivos (como

15 Caen precios internacionales de los minerales y el petróleo. <http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/1120/noticias.php?id=78009> (30/03/13).

16 [http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_7423000/7423317.stm\(02/04/13\)](http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_7423000/7423317.stm(02/04/13))

veremos más adelante). Y ¿cuáles son los incentivos? Esto se inscribe en un nuevo sistema de “extractivismo progresista” (CEDLA, 2010). El gobierno a través del Decreto Supremo 1203¹⁷ incentiva a las transnacionales. Ésta fue anunciada por el Presidente de YPF, Carlos Villegas e 18 de abril 2012. Al respecto Villegas sostiene: “El gobierno nacional aprobó ayer el decreto 1203 que consiste en establecer un incentivo a las empresas que operan en Bolivia para lograr aumentar la producción de petróleo”. Esto puede parecer interesante pero en los hechos este le costará a Bolivia 50 millones de dólares más y en solamente un año¹⁸. Es un incentivo millonario “aunque la producción de crudo no se incrementa”. Además según CEDLA (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario)¹⁹, el gobierno de Evo Morales y García pagará 30 dólares adicionales por cada barril de petróleo producido. Y en esto hay que tomar en cuenta que el costo de producción barril es de 5,77 dólares americanos. Ahí está las ganancias petroleras²⁰. Así “ninguna compañía petrolera que opera en Bolivia estaba trabajando a pérdida, a pesar de que el Estado mantenía congelado en 27,11 dólares el precio del barril de petróleo, ya que los costos de producción de los hidrocarburos líquidos están muy debajo de esta cifra” (CEDLA, 2011). Los estudios muestran que el 60 por ciento de producción de petróleo y condensado tiene un costo de solo de 2.48 dólares²¹. Aquí lo político y lo paradójico. Ahora ésta se apoya de algunas de las mismas transnacionales que en Octubre 2003 ensangrentó El Alto. Las mismas son: Repsol-YPF, BG,

17 Ocurrió el jueves 19 de abril 2012.

18 <http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2012042408> (24/4/2012).

19 Carlos Arze y otros, Gasolinazo: subvención popular al Estado y a las petroleras. Análisis de la política económica, fiscal y petrolera, CEDLA, 2011.

20 <http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2012041916> (19/4/2012).

21 “El costo promedio de producción de un barril de petróleo y condensado en Petrobras Bolivia es de 2,48 dólares, en Vintage de 6,62 dólares, en Petrobras Energía de 9,08 dólares, en Chaco de 9,71, en British Gas de 10,04, en Andina de 10,57, en Repsol YPF de 11,45, en Pluspetrol de 11,68 y en Matpetrol de 17,99 dólares”. Además habría que decir que los “costos, gran parte de las empresas que entregan la producción de petróleo y condensado al Estado a un precio de 27,11 dólares obtienen una utilidad neta de 5,62 dólares por barril”.

Total (Gavaldá, 2013)²². En El Alto han muerto 67 vecinos y más de 400 heridos para impedir el contrato de exportación de gas del pozo Margarita a Estados Unidos.

En realidad hay que dejar notar que cuatro grandes empresas petroleras controlan la producción del petróleo y gas en Bolivia. Según Roberto Fernández, estos son: Petrobras, Total, Repsol y Brist petroleum que controlan el 80 por ciento de esta actividad. Y operan en los pozos más productivos. En esa relación el gobierno no ha podido romper totalmente con el poder petrolero en Bolivia. Dado que “la operación de los campos más ricos en hidrocarburos está a cargo de las transnacionales petroleras” (Fernández, 2012). Y esto se complica aún más porque hoy el gobierno boliviano ha ampliado en millones de has. la explotación de los hidrocarburos. En efecto, según CEDIB (2013) en “cinco años después, el gobierno ha ampliado esa superficie a más de 24.000.000 (24 millones) de hectáreas, equivalente al 22,55% de todo el territorio nacional (109.858.100,00 Hectáreas) una extensión inédita en la actividad extractivista del país”²³. Lo cual es muy serio y de magnitud imprevisible. Incluso en Presidente de YPFB, Carlos Villegas en septiembre, ha anunciado suspender la entrega de IDH a las regiones de por lo menos de cinco o cuatro años. La misma sería para incentivar la perforación de nuevos pozos petroleros.

Es en esa relación que el D.S. 2058 de Nacionalización “Héroes del Chaco” es simplemente una renovación de contratos. Es decir, no tiene relación, por ejemplo, con la nacionalización de 1936 y 1969. En 1936 si bien se hizo el pago a las Gulf Oil Company (por sus inversiones en activos e instalaciones) pero esta petrolera se fue del país. Hoy Petrobras, Total, Brits petroleum y Repsol gozan de gran privilegio en Bolivia. Según Fernández estas empresas incluso sacan gas “con alto contenido energético para enviar

22 Marc Gavaldà, Refrescando la memoria del vertido. La amnesia petrolera en Bolivia <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=117926> (30/05/13).

23 Ampliación de áreas hidrocarburíferas pone en riesgo sistema de áreas protegidas de Bolivia, CEDIB <http://www.cedib.org/documentos/ampliacion-de-areas-hidrocarburiferas-pone-en-riesgo-sistema-de-areas-protegidas-de-bolivia-cedib/> (03/06/13).

como materia prima barata a Brasil y Argentina, y así obtener pingües ganancias” (Fernández, 2012: 146). Aunque el YPFB controló un 80 por ciento de la producción hidrocarburífera por un año, entre mayo de 2006 a mayo de 2007. “Hemos visto que las operadoras extranjeras (Petrobras, Repsol, Total British) controlan cerca del 80 % de la producción de gas y petróleo, mientras que YPFB se limita a explotar el resto. También existe una asociación orgánica en la empresa Andina entre YPFB y Repsol, donde la empresa nacional controla el 51 % de las acciones y Repsol el resto” (Fernández, 2012: 161). Esto es contundente.

En ese tiempo YPFB controlaba el 50 por ciento más la adición de un 32 por ciento como fondo de arranque para la empresa estatal. Como se dijo, este 32 por ciento tenía vigencia transitoria de un año. Después de ese año, YPFB volvió al 50 por ciento definido en un 18 % regalías y 32% de IDH. Otro dato ya muy conocido pero que vale la pena reiterar es que Petrobras y Repsol están vinculados al interés del subimperio de Brasil y parte de Argentina. Así en los siete años se han consolidado la presencia petrolera transaccional en Bolivia.

Sin duda esto es “un reacomodo empresarial petrolero al interior del bloque de poder dominante actual, con una gran influencia en la toma de decisiones sobre la política energética” (Fernández, 2012:143). Y el gasolinazo de diciembre de 2010 ha sido parte de este reacomodamiento. Según CEDLA (2011), el gobierno trató con el D.S. 0748 de subvencionar a las petroleras transnacionales. En esa relación, también CEDLA deja notar que el 80 % de la producción del gas y petróleo está controlado por las transnacionales. Si mediante el Decreto de gasolinazo no se pudo, pero si se pudo finalmente mediante otro D.S. 1203 de abril de 2012 que es un Decreto de Incentivo a la producción petrolera. De este modo “se ha revitalizado la dominación del capitalismo extractivo depredador y enemigo del medio ambiente, manteniendo los moldes coloniales de la situación de dependencia y servidumbre del pueblo boliviano” (Fernández, 2012: 162). Mientras el Vicepresidente afirma en su libro el Oegengismo enfermedad infantil....que

el gobierno logró más bien importantes logros en el negocio del petróleo y de la economía del país (García, 2011).

Es dentro de este contexto que hay que analizar la carretera biooceánica que el gobierno pretende construir por el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS). De hecho según, el informe de Plataforma energética de CEDLA, el territorio de TIPNIS está repartido entre las grandes petroleras transnacionales. Esto es: “[e]l 9,8% del parque está destinado para la exploración y explotación de la transnacional brasileña Petrobras y la francesa Total. Otro 17,7%, en el centro del parque, es área hidrocarburífera bajo contrato con Petroandina, parte de la cual sería atravesada por la carretera que se pretende construir”²⁴. Esto tiene ligazón con lo anterior porque dicha carretera servirá para extraer petrolero y otros recursos naturales en este territorio. En el mes de junio de 2013 el gobierno anuncio a través del Vicepresidente que se ampliara territorios petroleros. Lo anterior favorecerá enormemente al proyecto geopolítico de Brasil y a la transnacional Petrobras (ver en este número el trabajo de Cossío García Ribeiro y Henrique T. Novaes). Así TIPNIS es parte del gran proyecto geoestratégico llamado en su momento IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana) y (ahora COSIPLAN) financiado por BNDES (Bancos Nacional de Desarrollo de Brasil).

Un contexto breve. Ahora, IIRSA es un megaproyecto que actualmente se llama COSIPLAN (Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planificación) que según varios autores como Raúl Zebiche, (2006: 5)²⁵ es un proyecto de vinculación y explotación de los recursos naturales de América del Sur orientada al mercado transnacional²⁶. Y a su vez Ana E. Ceceña y otros (2007), sostienen que IIRSA es para “... construir un nuevo

24 Casi un tercio del TIPNIS fue declarado por el gobierno como área petrolera.
<http://plataformaenergetica.org/content/3049> (La Paz, 23/09/11).- (27/03/13).

25 El mayor financiador de este mega proyecto es BID (Banco Interamericano de Desarrollo), CAF (Corporación Andina de Fomento), FONPLATA (Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca de Plata).

26 IIRSA nace en la reunión de Jefes de Estado de América del Sur reunida en Brasilia entre 31 de agosto y 1 de septiembre de 2000 convocado por el expresidente de Brasil, Henrique Cardoso.

paradigma para el desarrollo de la infraestructura regional, sustentado sobre los requerimientos de la demanda...” (Ceceña y otros, 2007:7, citado a FONPLATA, 2007). Éste tiene 10 Ejes²⁷. Según SENA-Fobomade, Brasil coordina COSIPLAN como proyecto “de la Unión de Naciones de América del Sur (Unasur), organismo que acaba de aprobar un nuevo Programa de Acción Estratégica que prioriza la ejecución de 31 proyectos de infraestructura en los próximos 10 años, con una inversión estimada de 16 mil millones de dólares” (SENA-Fobomade, Bolpress, 2012). Ya en el año 2006, Lorgio Orellana de CEDLA ya había visualizado que “el gobierno del MAS no es nacionalista ni revolucionario” (Orellana, 2006).

Aquí lo novedoso posiblemente es que estemos ante un nuevo giro del Norte (de Estados Unidos) hacia Asia. Esto es hacia China, Japón o India que se han convertido en el nuevo eje geopolítico del poder mundial. Esa es la lucha actual. El MAS se confronta con el país del Norte pero no contra el capitalismo extractivista asiático. Aunque en esa relación, Estados Unidos trata de mantener/aumentar su influencia ahora mediante la Alianza del Pacífico con países como Colombia, Chile, Perú y México. En esto según Efraín León Hernández (2010), EEUU es responsable de 22, 3 por ciento de consumo del petróleo del planeta. Aunque hoy ante este giro EEUU ya no tiene a Brasil como cabeza de la penetración sino a Colombia. Dado que en principio EEUU tenía como cabeza de re-penetración a Brasil mediante el Petrobras. Esto es parte de un intento de nuevo alineamiento entre Sur-Sur. El hecho es que “[l]a incursión de Petrobras en el Anillo Sudamericano de Hidrocarburos demuestra la capacidad de Brasil para proyectar su estrategia petrolera en toda la región amazónica” (Hernández, 2010:110). En un reciente libro, Brasil potencia, Raúl Zibechi (2012) describe de cómo Brasil ha ido construyendo un proyecto geoestratégico en base a la apropiación de los recursos naturales de la Amazonia y los

27 Los 10 ejes son: eje Amazónicas, Eje Capricornio, Eje hidrobía Paraná-Paraguay, Eje Mercosur Chile, Eje Andino, Eje Interoceánico central (Bolivia es el centro de interés), Eje Perú-Brasil-Bolivia, Eje del Sur, Eje Escudo Guayanés, Eje Andino Sur (Zibechi, 2006; Ceceña y otros, 2007).

Andes. De hecho hoy Brasil tiene una hegemonía sobre el resto de los países del Sur. En esa relación, la elite brasileña piensa convertir a este país en una potencia real, función que debe cumplir Petrobras y BNDES.

Terratenientes, tierra y agroindustria

Otra área de gran importancia estratégica para este reacomodamiento en el poder es la tierra. Aquí el gran regalo que hizo el gobierno es el 23 de octubre de 2008 mediante el Vicepresidente García Linera al haber aceptado la no retroactividad de la tenencia de la tierra en Bolivia. Misma que fue plasmada en el artículo 399 de la Nueva Constitución Política del Estado, aprobado por Referéndum en enero de 2009. Dicho artículo señala: “Los nuevos límites de la propiedad agraria zonificada se aplicarán a predios que se hayan adquirido con posterioridad a la vigencia de esta Constitución. A los efectos de la irretroactividad de la Ley, se reconocen y respetan los derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo a Ley”. Mucho más antes mediante la Ley de Reconducción Comunitaria (No. 3545) de diciembre de 2006, el MAS ya se había adelantado a este hecho que luego se convierte en la no retroactividad de la tenencia de la tierra. La Ley 3545 solo barnizó el tema bajo el argumento de Función Económico Social (FES), que teóricamente es diferente a la expropiación de la tierra por Justicia social (Feder, 1984). Aquí se debe hacer notar de que una gran diferencia teórica entre la FES y la expropiación de la tierra por justicia social. Este último quiere decir: no importa en que se cumpla o no la FES, sino lo que importa es la justicia social sobre la tierra. De este gobierno está muy lejos.

Ahora esto se ha profundizado. Pues el 22 de enero de 2012, el Presidente Morales anuncia en su informe al parlamento que se hará paralizar por cinco años la revisión de la FES (función económica social de la tierra). Aunque no tiene su aplicabilidad hoy. “Se paraliza por cinco años el proceso de verificación de la FES de todas las propiedades agrarias del

país, “salvo denuncias sustentadas”²⁸, dijo Morales al ofrecer informe de gestión 2011. Morales profundiza su afirmación: “esperamos que esta pausa sea para dar utilidad a la tenencia de la tierra de los empresarios, vamos a respetar pues es importante para fomentar la producción de alimentos”²⁹. La lógica es prestar mayor atención a “las propiedades privadas en fase de producción”. Con una coherencia innegable ahora el gobierno quiere auditar las TCOs porque se lo acusa de nuevos latifundios. Por ello no existe una política real de trastocar el orden de la tenencia de la tierra en Bolivia. Más bien existe una serie de contrasentidos entre el discurso y los hechos reales.

Así, si bien el gobierno hizo que devolvieran los terratenientes algunas tierras al Estado, pero lo central es que se mantiene grandes cantidades de tierra en manos de las oligarquías cruceñas y de brasileños y argentinos. En realidad no se hizo un real trastocamiento de la tenencia de la tierra en Bolivia. Para constatar ello existen varios datos que es necesario exponer. CEDLA (2012) sobre el tema es absolutamente claro. Sostiene que al poner límite a la superficie de la tierra no ayudó a trastocar el orden de la tenencia de la tierra. “Si sumamos esta superficie con los recortes totales y parciales realizados durante el proceso de saneamiento a TCO, se alcanzaría un total de 855.823 hectáreas de tierras revertidas a medianas y grandes propietarios, lo que significa el 1.5% del total de la superficie saneada y titulada a diciembre de 2010 y que alcanza a 55.003.501 hectáreas” (CEDLA, 2012). Aunque según el Vicepresidente de los 39 millones de hectáreas de tierras que tienen/tenían los grupos de poder ahora solo tendrían 4 millones. Esta afirmación la

28 El gobierno del MAS paraliza por cinco años la verificación de la FES de todas la propiedades agrarias

El INRA dotó 22,3 millones de hectáreas de Tierras Comunitarias de Origen en 15 años, Redacción Bolpress.

<http://www.bolpress.com/> (7/2/2012).

29 El presidente anunció la paralización de la función económica social (fes), domingo, 22 de enero de 2012,

http://ftierra.org/ft/index.php?option=com_content&view=article&id=8316:rair&catid=98:noticias&itemid=243 (06/06/13).

hizo ante los comunarios de Pucarani y Laja en marzo de 2013³⁰ donde existe un minifundio extremo³¹. El dato está referido entre 1950 y 2005. En ese tiempo los campesinos habrían recibido 321 mil títulos agrarios. Sin embargo los campesinos de La Paz piden 1.8 millones de hectáreas de tierras fiscales “porque...el surcofundio los afecta y hace que dejen sus tierras” (según Fernando Choque Ramos de Tupaj Katari). De su parte el CONAMAQ defiende el territorio de los ayllus. En este sentido no hay reforma agraria. Lo que existe es una falsa reforma agraria. Si bien hay distribución de las tierras pero éstas son tierras fiscales, por lo que no afectó a los grupos empresariales. “[E]s más bien la denominada “economía empresarial” beneficiada por las políticas agrarias y de tierras del gobierno del MAS la que va concentrando la producción en desmedro de la pequeña producción parcelaria campesina o de la “economía comunitaria” (CEDLA, 2012).

Éste último es contrario al de los agroindustriales del oriente que tienen excelentes ganancias económicas ya sea por sus propios medios y mediante el apoyo del Estado. Así no hubo reforma agraria sino la consolidación de previos grandes en favor de sus dueños. De hecho mediante el Estado han incrementado la frontera agrícola. Por ejemplo la producción de girasol subió de 2003 a 2012 en 29%³². Esto según IBCE. es: en 2012 la producción ha sido 280.000 has. y 287.020 toneladas en relación a 2011 que era 216.818 has. y 194.040 toneladas (IBCE, 2012). Un pequeño ejemplo para ello. “[L]a campaña agrícola 2012, la superficie cultivada de girasol aumentó en

30 El INRA revirtió de empresarios 35 MM de hectáreas de tierra, El Vicepresidente informó que durante las dos gestiones del gobierno de Evo Morales, en siete años, se entregaron 321 mil títulos agrarios que han favorecido principalmente a campesinos e indígenas, La Razón / C. Galindo/M. Chávez / La Paz de marzo de 2013.<http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.la-razon.com> (18/03/13).

31 Argumento además: “Hoy, en tiempos de Evo, los empresarios, que también tienen su derecho si producen alimentos, ya no tienen 39 millones, han pasado a cuatro millones de hectáreas...Los empresarios ya no son los que tienen muchas tierras, el presidente Evo (Morales) ha ido recortado y recortando. Antes la distribución era poquita, tierra para todos y mucha tierra para pocos”, <http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.la-razon.com> (18/03/13)

32 http://www.erbol.com.bo/noticia/economia/07022013/ibce_frontera_agricola_del_girasol_crecio_en_29, Jueves, Febrero 7, 2013, (07/02/13).

29 por ciento (92.980 hectáreas adicionales) en relación al 2011”³³. De hecho se produjo en 2012, 287 mil toneladas de girasol. El periódico El Deber de Santa Cruz hace todo un relato sobre este tema poniendo acento en que los migrantes andinos también deforestan bosques³⁴.

Para la coherencia gubernamental, el “INRA entrega cheques por expropiación de tierras en favor de pueblos guaraníes”³⁵, misma que ocurrió en Chuquisaca. “En ese contexto, el INRA entregó dos cheques a los titulares de los predios Sipoperenda y Yaguarenda, ubicados en el municipio San Pablo de Huacareta, provincia Hernando Siles, por un monto de 1.797.052 bolivianos”³⁶. El hecho se produjo en el municipio San Pablo de Huacareta, provincia Hernando Siles. Situación confirmada por Juanito Tapia director de INRA. Esta cantidad de dinero fue entregada por 8 mil hectáreas. ¿Un gobierno revolucionario debe pagar dinero a los históricos usurpadores de tierras? Es evidente que existe una importante dotación de territorios en favor de los pueblos indígena de aproximadamente 22 millones de has. de tierra. Dado que el INRA dotó 22,3 millones de hectáreas de Tierras Comunitarias de Origen en 15 años las que han beneficiado a 493 mil familias de las tierras altas y bajas³⁷. Se han saneado y titulado en los últimos 15 años 51,7 millones de tierras. Pero son tierras fiscales. Insistir que esto no es de los terratenientes y empresarios de la tierra.

Este es un modelo de Reforma Agraria asistida que propicia el Banco Mundial (2002). La misma tiene como misión garantizar un tipo de reforma donde el Estado se presta dinero para distribuir tierras a los desposeídos para

33 http://www.erbol.com.bo/noticia/economia/07022013/ibce_frontera_agricola_del_girasol_crecio_en_29, Jueves, Febrero 7, 2013 - 11:38, (07/02/13).

34 Henry Ugarde de El Deber titula su nota: Propiedad de la tierra. Campesinos y TCO, con mayor tenencia de tierra. <http://www.eldeber.com.bo/nota.php?id=130125221734> (10/06/13).

35 <http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.eldiario.net> (28/01/13)

36 Pueblo guaraní de Chuquisaca recibe tierras del INRA, 26 de Enero de 2013, <http://www.fmbolivia.com.bo/noticia106800-pueblo-guarani-de-chuquisaca-recibe-tierras-del-inra.html> (06/06/13).

37 <http://www.bolpress.com/> (7/2/2012).

evitar o aminorar los conflictos por tierra. O evitar una radical reforma agraria como es la toma violenta de las tierras de los terratenientes o de los agroindustriales. Así esto es un hecho aparentemente social pero tiene la finalidad de contener el desborde de la lucha por la tierra y para que no afecte a los intereses de los señores de las grandes tierras.

Hace diez años Carmen Dunia Sandoval sostenía que en siete años del gobierno de Banzer ha entregado 7 millones de has de tierra en Santa Cruz (Sandoval, 2003). La pregunta es: ¿ahora esas tierras hoy en manos de quienes está? ¿Esa tierra fue recuperada por el Estado? Así la “revolución agraria” del gobierno no tiene una política de distribución de tierras de los terratenientes a excepción la de Alto Parapetí en Santa Cruz y otros. Lo que existe es la distribución de tierras fiscales (tierras del Estado que algunos estaban siendo usurpados por terratenientes y tierras forestales) como se sostuvo arriba. Los terratenientes, los agroindustriales medianas y grandes empresas agropecuarias, siguen siendo dueño de muchas tierras. Entonces la política de tierras no tiene otro hecho que consolidar “el latifundio capitalista y el patrón de desarrollo agrario que estructuró el neoliberalismo”. Esto es en base a los agronegocios y la renta de la tierra (latifundista) y parte de la empresa agrícola³⁸.

Ahora aquí hay un detalle no menor para el tema de tierras. Pues las mejores tierras de Santa Cruz está en manos de brasileños, argentinos, colombianos y una parte de la elite local cruceña (Urioste, 2011). Urioste deja notar que este es un proceso que viene ocurriendo en distintos países llamados subdesarrollados porque las empresas de alimentos tienen la necesidad de hacer un gran negocio de alimentos ante la cada vez escases de alimentos en el mundo. Lo de Bolivia entonces es parte de esta corriente.

38 Deuda externa. BID prestó 35 millones de dólares a Bolivia para invertir en sanidad. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció el préstamo de 35 millones de dólares a Bolivia con el objetivo de mejorar los servicios de salud para las mujeres, los niños y la población indígena. La deuda en 2012 bajó a 160 millones de dólares. Y la deuda del país con Venezuela creció en 7.000% en seis años. Según Fernández Bolivia siempre ha sido el patio trasero del BM, FMI (Fernández, 2004).

En Santa Cruz pues existe empresarios brasileños que tienen las mejores tierras y están protegidos por sus gobiernos, particularmente los de Brasil y Argentina. “Hoy Santa Cruz está consolidada una élite agroindustrial brasileña con algunos niveles de poder político muy sutil y llama la atención su notable presencia económica y sus influencias en el plano sociopolítico local” (Urioste, 2011:53, cita Marques Gimenez 2010). Estos son productores de soya, ganado vacuno y propietarios de tiendas de insumos agrícolas. Este es un hecho absolutamente antitético al discurso del nacionalismo y la dignidad nacional. A partir de este hecho se puede entender de por qué el gobierno no hizo lo sustancial como es la de expropiar tierras de la oligarquía porque después de la masacre de El Porvenir del 11 de noviembre de 2008 la oligarquía cruceña y del oriente empezó a ser derrotado. No tenían moral, líderes, propuestas, no tenía derecho de ser demócratas porque habían cometido un asesinato premeditado antecedido por la violencia de la Unión Juvenil Cruceñista en contra de los migrantes andinos en Santa Cruz (los qullas) y en varias regiones del oriente. En realidad como nunca antes había una gran disponibilidad social y estatal para desmontar a los grupos de poder regional porque han sido derrotados política y cuasimilitarmente. Todas las condiciones históricas pero sin tener un real sentido de la revolución de la tierra y del territorio. ¿Ésta es una paradoja o una premeditación?

Transnacionales mineras y cooperativistas

En este rubro se mantiene la Ley del Código Minero de Gonzalo Sánchez de Lozada de 1997 (Ley No. 1777). Este es un sector en el que menos intervenciones hizo el gobierno sin conocer la nacionalización de Huanuni (octubre de 2006)³⁹ y “la compra de acciones...de la metalúrgica de estaño Vinto (febrero 2007)” (Rodríguez-Carmona y otros, 2013). Hoy se discute recién

39 Después de un enfrentamiento entre mineros cooperativistas y asalariados con un saldo de 16 muertos. Y en 2013 se denunció que el gobierno no invirtió en esta empresa nacionalizada.

un nuevo proyecto de Ley Minera pero que profundiza la actual situación de este sector a favor de los grandes mineros. ¿Dónde está entonces la nacionalización? En este rubro hay que decir que en realidad en Bolivia un pequeño grupo de transnacionales controlan la explotación minera. Estas son: Sumitomo con la subsidiaria San Cristobal en Potosí, Glencore con Sinchi Huayra (luego nacionalizado), Paramerican Silver que opera bajo el nombre de San Vicente, Coeur d'Alenes Mines Corporación de Manquiri (Rodríguez-Carmona y otros, 2013). La mayor transnacional es San Cristobal. Éste controla el 70% del total de la producción minera en Bolivia (hasta 2009). Y los cooperativistas según el interesante estudio de Rodríguez-Carmona y otros, tienen 635 cooperativas con 65.890 socios. En el rubro de exportaciones mineras, estos entre 2010 y 2011, fueron muy elevados, de \$us 2.405 millones que representa el 34% del total de exportaciones. En el primer semestre de 2011 las mismas han aumentado a 46% que en monto real es \$us 1.679 millones. Hecho que compite con las exportaciones del gas de \$us 1.753 millones (Rodríguez-Carmona y otros, 2013). Frente a ello el Estado (con estaño) y mediante la fundición de Vinto de cobre y bismuto no tiene mayor actividad de producción (Rodríguez-Carmona y otros, 2013 en base a fuentes del Ministerio de Minería y Metalurgia, Memoria institucional 2010), pese al aporte de los mineros de Huanuni.

Ahora la “superficie minera adjudicada a los cooperativistas creció de 47.153 hectáreas, registradas en 2006, a 375.073 hectáreas a mayo de 2013” (Viceministerio de Cooperativas Mineras). Lo cual indica de “un incremento de un 700% en lo que va de la administración del presidente Evo Morales”. El siguiente dato es importante a tomar en cuenta. “Hay más de 2,1 millones de hectáreas distribuidas entre los diferentes operadores mineros; la estatal Comibol tiene más de 328.801 hectáreas, las empresas privadas más de un millón de hectáreas, los operadores unipersonales más de 438 mil hectáreas y las cooperativas 375.073 hectáreas” (Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas

(Sergeotecmin)⁴⁰. De su parte PIEB mediante el investigador del área Emilio Madrid menciona según datos del Ministerio de Minería y Metalurgia (MMyM) “el 75,12 por ciento (%) de la producción minera está concentrada en manos de la minería mediana; el 22,95% en la minería chica y cooperativizada; y sólo el 1,93% -menos del 2%- bajo la tuición de la minería estatal. A la par del valor total de las exportaciones mineras, sólo el 8,9% es destinado al Estado, frente al 60,4% para las empresas medianas asociadas a las trasnacionales y el 30,7% para las cooperativas⁴¹.”

Las cuatro trasnacionales mineras dejan al país de \$us 100, solamente 9. Esto es peor que en la era de Simón I. Patiño⁴². “Respecto a los impuestos, el año pasado fueron exportados 3.400.000.000 dólares por conceptos de impuestos directos a la renta minera, es decir regalías como el impuesto a las utilidades de la empresa más la cuota adicional. Lo que pagan el conjunto de los operadores mineros, respecto a este valor de la exportación, apenas alcanza al 13 por ciento. De los 3.400.000.000 de dólares apenas recibió el Estado 437.000.000 dólares⁴³.”

En esto las trasnacionales tienen previsto como recurso estratégicos las Tierras raras⁴⁴. Según Dionisio Garzón, el Estado no está en condiciones de “entrar, por ahora, a la

40 Hace 8 años operaban 230 de estas sociedades, pero hoy son 1.600. Las cooperativas tienen 7 veces más áreas mineras que en 2006, datos citados del Viceministerio de Cooperativas y Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas por el periódico Pagina Siete.

<http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.paginasiete.bo> (06/06/13).

41 Política / Recursos Naturales. Según investigador, la hegemonía trasnacional sobre la minería podría ser reforzada con la nueva ley, http://www.pieb.com.bo/sipieb_notas.php?idn=7372 (17 02 13).

42 “4 trasnacionales controlan casi el 60% de la producción” sostiene CEDIB. Según Vladimir Díaz “[e]n la época de los barones del estaño, 1910-1952, el Estado recibía el 13,5% del total de las exportaciones de los minerales. En cambio, en los gobiernos de Evo Morales, 2006-2011, los bienes recibidos no superan, en promedio, el 10%, según afirma el investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia”.

<http://www.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483960133> (17/06/2012).

43 <http://www.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483960133> (17/06/2012).

44 La Razón / Dionisio J. Garzón M. 25 de enero de 2013,

<http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.la-razon.com> (25/01/13)

minería de lo que llaman ‘tierras raras’”. Según este autor, salen junto al estaño, plata, plomo y zinc del país, sin ser recuperados el valor de minerales de germanio, indio, cadmio, oro. Estos mineras son llamadas tierras raras y recurso estratégico según muchos analistas y estudiosos⁴⁵. Aunque los precios internacionales de los minerales hayan bajado⁴⁶ pero se mantiene el megaciclo de estos precios. En esa relación, las exportaciones crecieron en un 12% en el año 2012 en relación al 2011⁴⁷.

Así según CEDIB (2013) las contradicciones son contundentes. “Más aún, si éste es un Gobierno verdaderamente popular, antes que estar mirando si unos cuantos trabajadores tienen altos salarios ¿por qué primero no voltea la vista a los millonarios ingresos de las empresas extranjeras que operan en el país? ¿Por qué no se nacionalizan realmente las empresas transnacionales que controlan los sectores estratégicos del país, esto es, Petrobras y la japonesa Minera San Cristóbal (MSC)? MSC, la verdadera señora de la minería del país, exportó entre 2010 y 2012 US\$ 541 millones como utilidades netas a su casa matriz Sumitomo”⁴⁸.

45 sostiene: “una cosa son los “metales minoritarios” (MM) como germanio, indio y cadmio (que acompañan a las menas de zinc, plomo y plata); molibdeno, renio, telurio y selenio (en las minas de cobre); oro (en algunas minas de zinc y/o estaño); y otra muy diferente son los metales de los grupos denominados “platinoides” (PGM) y TR, cuyo ambiente geológico y de formación es completamente diferente. La recuperación de MM no es en sí un proceso que pueda dar lugar a una cadena de industrialización sino, como ocurre en los países que los producen, a un by-product (un producto adicional) de las fundiciones que aumenta su rentabilidad”. (ver: D. Garzón, Los dilemas de la minería, 2012).

46 “El zinc descendió en 22 por ciento, es decir que el valor de las exportaciones bajó en 207,38 millones de dólares, de 944,17 millones, registrados en el 2011, a 736,79 millones el año recién pasado.

Las ventas de estaño en 2012, bajaron en 11,68 millones de dólares, que corresponde a un descenso de 17 por ciento en relación con el comportamiento de 2011, cuando se facturó 68,46 millones de dólares.

El valor de exportación de la plata bajó en 97 millones de dólares, cotejando 2012, con un valor de 986 millones, y en 2011, cuando se reportaron 1.083 millones”. [http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.laprensa.com.bo \(28/01/13\)](http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.laprensa.com.bo (28/01/13)).

47 Bajaron las ventas de estaño y plata en mineral y metálicos. Exportaciones mineras crecieron en 12% en 2012, La Prensa, 28/01/2013.

[http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.laprensa.com.bo \(28/01/13\)](http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.laprensa.com.bo (28/01/13)).

48 [http://www.cedib.org/wp-content/uploads/2013/05/La-impostura-del-Gobierno-sobre-Huanuni1.pdf \(02/06/13\)](http://www.cedib.org/wp-content/uploads/2013/05/La-impostura-del-Gobierno-sobre-Huanuni1.pdf (02/06/13))

Ante ello existen muchas críticas al extractivismo minero que además no tiene logros reales; por el contrario se produce una gran contaminación de los ayllus que habitan en esos lugares. Según Eduardo Gudynas y Gerardo Honty de Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES) de Uruguay. Honty sostiene: “El extractivismo no es ninguna industria, porque no tiene valor agregado. Piedra picada, molida, mandada al extranjero no es industria. Un poroto de soya no es industria. Se le dice “industrias extractivas” para generar el imaginario de que es una industria que fabrica, que genera empleo y produce valor agregado. Eso no es cierto”⁴⁹. De su parte Gudynas afirma: “En los últimos años en América del Sur, por el alto precio de las materias primas, por la demanda sostenida de los países asiáticos en especial, entre otros factores, el extractivismo minero, el extractivismo petrolero y un tipo de extractivismo agrícola, basado en el monocultivo de soya, por ejemplo, ha proliferado en todo el continente. El volumen de producción ha aumentado, más ha aumentado la participación de los recursos naturales en el total que exporta la región. Son cifras altísimas en los países andinos y son altas en países del cono sur”⁵⁰. A su vez según Carlos Arce de CEDLA, “esta distribución (sólo) está favoreciendo a algunos sectores ligados, entre ellas de actividades extractivas... El caso más crítico es el de los mineros cooperativistas que también están aprovechando de un contexto internacional, pero en el conjunto de la población no se siente”. Esa es la realidad de la minería en la Bolivia plurinacional.

Elites de origen indígena en el poder

A su vez se observa la emergencia de grupos de poder de origen indígena. Aunque algunos de ellos no son producto de las políticas públicas del Estado. Vienen de

49 “Críticas al extractivismo minero en países de gobiernos progresistas. No hay diferencia con respecto a los anteriores gobiernos neoliberales”, <http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2012101603> (18/10/2012).

50 “Críticas al extractivismo minero en países de gobiernos progresistas. No hay diferencia con respecto a los anteriores gobiernos neoliberales”, <http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2012101603> (18/10/2012).

esfuerzo propio. Los mismos son los cocaleros de los Yungas de La Paz y Chapare que han mejorado sustancialmente sus ingresos económicos y sus condiciones de vida en relación a su reciente historia. Incluso se puede decir que sus ingresos se han triplicado a través de la ampliación del consumo interno de la hoja de coca y el narcotráfico. Los comerciantes aymara y quechua de diversos artículos también son parte de estas instituciones sociales. Uno de esto es la presencia de Walter Mamani Choque actual Presidente del popular equipo de fútbol San José de Oruro (Llanque y otros, 2011). Él no concuerda por su puesto con las ideas y políticas del gobierno de Evo Morales y García Linera. Tiene origen en el comercio internacional con la fronteras con Chile, más específicamente de Sabaya (Oruro). Otro personaje público es Fidel Surco, actual senador por el MAS, quien es propietario de la línea de flotas Totay que cubre los tramos de La Paz y los Yungas de La Paz. Se rumorea que Isaac Ávalos, ejecutivo de la CSUTCB es dueño de la frota de transporte Yungueña entre Santa Cruz y Beni, aunque no hemos podido constatar ese hecho.

En realidad según Fundempersa al mes de marzo de 2012 habían inscritos 57.201 empresas y a marzo de 2013 subió a 78.774 empresas que es un crecimiento de 38%. Para mayor claridad en 2002 había 9.940 empresas y para 2013 subió exponencialmente a 78.774 empresas (Fundempersa, 2013). Estos datos así expuestos son interesantes, pero estas nuevas empresa en su mayoría no están inscritas en aéreas de producción sino fundamentalmente en servicio. Y según los críticos liberales como D. Ayo eso no habla muy bien de la economía porque es un dinero que se mueve fuera de la producción. Y muchos de estas nuevas empresas están dirigidos por gente de las ciudades intermedias particularmente en cuanto se trata de actividades en las aéreas rurales. Aquí sin duda existe muchos y pequeños y medianos empresarios aymara o quechua.

Ahora otra área de importancia es el comercio donde existe un gran sector de comerciantes aymara que importan “productos desde China” y de otros lugares de Asia. Misma que viene desde 50 años atrás donde “se diversifica en el

pluriempleo”. Según una nota de PIEB esto está dado por una “oleadas migratorias y avanza de manera constante en copamiento paulatino no solo territorial y económico, sino seguramente político” (Cortez) (PIEB, 2013). Según estos investigadores sería interesante “investigar los lazos entre los importadores y otros sectores, como los cooperativistas, sectores minoritarios cocaleros, sojeros de tierras bajas del este, ‘que están tramando una historia de poder que transcurre ante nuestras narices y ante el mal humor de la clase media’”⁵¹.

Según IBCE en el transcurso de 10 años las empresas registrada han aumentado exponencialmente. Se habla de este tema desde 2006 y 2012. Así “nuevas élites surgen en Bolivia, nuevos grupos de poder”. Y éstas son definidas como “élites: aquellos grupos que tienen la capacidad de incidir sobre las políticas públicas, en este caso municipales. Estas nuevas élites son empresarios y cocaleros”. Según Diego Ayo “[t]enemos un montón de plata que está fluyendo en la economía, toda esta bonanza va a traer ganadores y perdedores. En este sentido empezamos a visualizar a grupos de poder que tienen mayor capacidad para ganar”⁵². De su parte Alison Spedding sostiene que “[e]lite es básicamente los que están a la cabeza de algo. Cuando dije grupos de élite pensaron que me refería a la zona sur o algo así. Pero se puede hablar de los que tienen poder económico, sin embargo coincido con Diego al decir que son aquellos que tienen bastante influencia y tienen cierta capacidad de imponer sus decisiones”⁵³. En una entrevista en Pukara Ayo sostuvo: “Por el contrario, lo que se observa es una verdadera revolución burguesa comandada por actores

51 Analizan la emergencia económica de sectores populares cuenta-propistas, con mano de obra familiar y control territorial de mercados.

http://www.pieb.com.bo/sipieb_nota.php?idn=8006 (29/04/13)

52 Empresarios locales y cocaleros. Revelan surgimiento de nuevas élites en Bolivia. domingo, 04/14/2013.

http://erbol.com.bo/noticia/social/14042013/revelan_surgimiento_de_nuevas_elites_en_Bolivia (14/04/13).

53 Empresarios locales y cocaleros. Revelan surgimiento de nuevas élites en Bolivia. domingo, 04/14/2013.

http://erbol.com.bo/noticia/social/14042013/revelan_surgimiento_de_nuevas_elites_en_Bolivia (14/04/13).

de raigambre indígena” (Pukara, 2013: 6).

Aunque elite aquí es entendido no en el sentido de una elite tradicional sino de grupos emergentes de base indígena. En ello caben los cooperativistas mineros que tienen una presencia política y económica y además tienen un ingreso aproximado mensual de 200 mil bolivianos. Aunque su lógica es una acumulación no en el sentido weberiano sino en otro sentido⁵⁴. Aquí los cooperativistas es otro sector que también gana bien.

A esto se suman los nuevos funcionarios públicos del Estado central y de sus diferentes niveles territoriales y políticos, quienes en diferencia a sus antecedentes, hoy tienen un ingreso promedio de 7 y 10 bolivianos al mes. También de otra parte aquí aparecen hombres de negocio de origen campesino como Óscar Calle actual Presidente reelegido para 2012 a 2013 de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) ligado a la gran empresa privada boliviana⁵⁵.

El Presidente Evo Morales en 2006 declaró tener un patrimonio neto de 112.000 dólares pero después de siete años su patrimonio subió a cerca de 389.000 dólares. Aunque esto al parecer no es real. Estos datos están consignados en la Contraloría General del Estado⁵⁶. El patrimonio del Presidente ha subido tres veces más. El mismo sostuvo (en un acto público) de promulgación de la Ley de Promoción y Desarrollo Artesanal, que tiene 500 ponchos tejidos artesanalmente, las cuales costarían alrededor de mil dólares. En esa relación no dejar de tener sentido el D.S. de 15 de marzo para que familiares del Presidente y Vicepresidente tengan pasajes y viáticos pagados por el Tesoro General del Estado (TGE) además de los pasaporte diplomático, misma

54 Esto debería ser parte de un gran debate en la intelectualidad aymara.

55 Calle en el momento de su posesión como Presidente de CNC dijo: “Nuestros mayores esfuerzos estarán destinados a continuar defendiendo los intereses legítimos de los empresarios privados dedicados al comercio, los servicios y el turismo, en ese entendido no declinaremos en nuestro afán de trabajar al lado de los emprendedores bolivianos y contribuir al desarrollo económico de nuestro país”, Nota de prensa de Camara Nacional de Comercio de Bolivia, La Paz, 24 de abril de 2012.

56 <http://cnnespanol.cnn.com/2012/11/12/evo-morales-justifica-el-crecimiento-de-su-patrimonio/12-noviembre-2012-24/01/13>.

que fue abrogada al ser criticado agriamente por la población. Incluso algunos sostuvieron que aquello era la fundación de la monarquía Morales-García.

Así la dinámica de los altos precios internacionales del gas, petróleo y minerales, hizo que “cooperativistas mineros, coccaleros, contrabandistas como los chutereros y los narcotraficantes fueron los más beneficiados por la “bonanza económica” durante la administración de Evo Morales”⁵⁷. De hecho el 6 de agosto, Evo Morales, sostuvo ‘que el resultado de la política económica aplicada por su gobierno es el mejoramiento financiero y sólo en los últimos cinco años más de un millón de bolivianos habrían ascendido a la clase media’. El presidente de la Asociación de Productores de Coca de La Paz (ADEPCOCA), Ernesto Cordero, confirma el hecho: “gracias a la coquita que hoy en día tenemos sobrevivimos. Estamos bien económicamente para que nos vamos a quejar, en los Yungas hay (los recursos) para mantener a la familia”⁵⁸. No deja de llamar la atención la nueva construcción de la casa lujosa del Canciller David Choquehuanca a la orilla del lago Tititaca. “[A] la luz del palacete que tiene Choquehuanca en la orillas del lago Titicaca, su condición de indígena no le impidió hacer fortuna en muy poco tiempo. Se trata sin duda de la casa más vistosa de la zona y de acuerdo a versiones de sus vecinos cuenta con una piscina y sauna, además de que su costo fácilmente sobrepasa el medio millón de dólares”⁵⁹. Es este la emergencia de una elite campesina e indígena⁶⁰. Algunos investigadores se han ocupado del tema. PIEB después de varios estudios hace conocer que éste tiene su realidad por lo que no se puede dejar de anotar. De modo particular entre empresarios locales y coccaleros.

57 Jubileo: narcos, coccaleros y chutereros son los nuevos ricos de Bolivia 09/08/2011 - 13:00:53, <http://www.hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=51596> (24/01/13).

58 Jubileo: narcos, coccaleros y chutereros son los nuevos ricos de Bolivia 09/08/2011 - 13:00:53, <http://www.hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=51596> (24/01/13).

59 Bolivia, Los Nuevos Ricos del MAS, <http://www.lahistoriaparalela.com.ar/2009/03/17/bolivia-los-nuevos-ricos-del-mas/> (24/01/13, Publicado el 17 de March, 2009).

60 Empresarios locales y coccaleros. Revelan surgimiento de nuevas élites en Bolivia. domingo, 04/14/2013. <http://erbol.com.bo/noticia/social/14042013/revelan-surgimiento-de-nuevas-elites-en-bolivia> (14/04/13). Final del formulario

Breves conclusiones

¿Por qué las revoluciones sociales y también las armadas terminan en lo mismo que la critican? Históricamente se impusieron después de las revoluciones las contrarrevoluciones. Es decir, se impusieron el unilateralismo basado en un pensamiento unidimensional del Estado moderno de tipo europeo o norteamericano y con distintos nombres. Y las que impulsan esto sostienen con cierto descaro o con algo de ingenuidad de que el Estado es la síntesis dialéctica de la sociedad. En otras palabras, el Estado sería la síntesis del interés general de la sociedad. Esto no es cierto como está demostrado por la historia. En el caso de Bolivia habría que preguntarse ¿ese es el horizonte del Estado plurinacional? Si es ese el horizonte del Estado plurinacional la historia de la lucha social es una utopía. Pero si el Estado plurinacional es otra forma de lo político y de la historia, ese puede aún ser el horizonte de lucha. Pero aquí el reacomodamiento en el poder como sistema de privilegios y riquezas económicas es una realidad que niega aquella posibilidad. Y justamente éste es el rol central de la contra-revolución en la revolución. Los datos expuestos develan este hecho.

Es más. Hoy en Bolivia hay una especie de neoligarquización del poder. Su fuerza moral inicial del gobierno por provenir de las luchas sociales se redujo al final a un reducidos grupos de poder; un hecho crónico en la histórica política de Bolivia porque en momentos como éste siempre se produjo la enajenación del poder social en favor de pequeños grupos. El Estado del 52 ha sido así. Hoy hay una articulación de las oligarquías con lógicas neoliberales entre pequeños grupos de poder financiero, transnacionales y grupos locales de poder. La oligarquía, el gobierno de los pocos y de los poderosos, es en detrimento de la mayoría. En ese sentido el poder de unos pocos sobre muchos anula la lucha de diversos sectores sociales indígenas y populares.

La neo-oligarquización del poder significa entonces que las relaciones de poder son relaciones sin diálogo por ejemplo con la pluralidad de los poderes sociales, lo cual es la imposición de la lógica unidimensional del poder vertical sobre otras formas de poder como la comunitaria del ayllu y comunidad campesina, y lo que nosotros hemos llamado el “otro poder”. Ésta neo-oligarquización del poder se expresa también y nuevamente sobre el orden jerárquico del factor “raza”. En Bolivia la “raza” es un gran factor del nuevo orden. Es por ello que hoy la política continúa haciéndose con nombres y apellidos de abolengo señorial: Quintana, Romero Bonifaz, García Linera, Arce, Llorenti, Groux, Ballivián, Navarro, Villegas, etc. Los Quispe, Condori, Apaza, Chuquimia o Mamani, el país mismo, no ocupan los cargos jerárquicos, sino sólo viceministerios o direcciones bajo el argumento de que no tienen aún habilidad política o técnica suficiente para cargos de relevancia estatal, un argumento historicista de “sala de espera”. Así la tesis de la descolonización del Estado desde el Estado es un engaño y es un auto suicidio para quienes lo apoyan.

De este modo se puede sostener que una cosa son los discursos y los proyectos históricos pero otros son los resultados sociológicos de aquello. Es decir, la economía plural es un discurso que produce la economía capitalista liberal de base social criollo y transnacional. Hoy esto tiene su contrasentido porque por ejemplo la empresa minera San Cristóbal se lleva las ganancias exquisitas y el gobierno se hace al que no ha visto. Allí ni las cooperativas son las verdaderas beneficiadas, menos los indígenas. Más al contrario las tierras de los ayllu son inundados por mineras y sus aguas contaminadas.

En síntesis, en los siete años del gobierno del MAS los que han ganado realmente son los grupos de poder como los agroindustriales de Santa Cruz, las transnacionales petroleras y mineras y un pequeño grupo de origen indígena (aunque están subordinados ante el gran capital) pese a que es “su” gobierno. Y esta realidad está siendo presentada

como el Proceso de Cambio y no como el reacomodamiento de las elites en el poder. Esa es su realidad y esa es una paradoja histórica.

Bibliografía

- Carlos Arze y otros,
2011, Gasolinazo: subvención popular al Estado y a las petroleras. Análisis de la política económica, fiscal y petrolera, La Paz: CEDLA,
- Birle, Peter; Hofmeister, Wilhelm; Maihold, Günther; Potthas, Barbara (editores),
2007, Elites en América Latina, Madrid: Iberoamericana-Vervuert.
- Ceceña, A. Esther y otros,
2007, Territorialidad de la dominación. Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), Buenos Aires: Observatorio Latinoamericano de Geopolítica.
- CEDLA
2012, Reconducción comunitaria de la reforma agraria y producción agrícola. Evaluación y perspectivas, Boletín de seguimiento a políticas públicas, segunda época, año ix, n° 19, La Paz.
- 2010 El nuevo extractivismo progresista. Tesis sobre un viejo problema bajo unas expresiones, Boletín de seguimiento a políticas de recursos naturales, año IV, No. 8. La Paz.
- Del Granado, Hugo y otros,
2010, Generación, distribución y uso de excedente de hidrocarburos en Bolivia, La Paz: PIEB-Embajada de los Países Bajos.
- EXPOCRUZ
2012. 37 Feria internacional de Santa Cruz del 21 al 30 de septiembre.
- Feder, Ernest,
1984, Violencia y despojo del campesino: latifundio y explotación capitalista, México. D.F.: Siglo XXI.
- Fundempresa
2013, Estadística del registro de comercio de Bolivia, marzo de 2013.
- Fernández, Roberto
2012a “El reacomodo del poder petrolero trasnacional en Bolivia” en Varios autores, La mascarada del poder, Cochabamba: textos rebeldes, pag. 143-162.
2012b “El camino hacia el endeudamiento de la economía boliviana” en Varios autores, La mascarada del poder, Cochabamba: Textos rebeldes, pag. 163-179.

- 2009 Gas, petróleo e imperialismo en Bolivia, Bolivia: CESU-PLURAL-IBP.
- 2004 FMI, Banco Mundial y estado neocolonial. Poder supranacional en Bolivia, Bolivia: PLURAL-CCS.
- Foucault, Michel,
1992 Microfísica del poder, Madrid: La Piqueta.
- García L. Álvaro
2011 El “oenegismo”, enfermedad infantil del derechismo (O cómo la “reconducción” del Proceso de Cambio es la restauración neoliberal), La Paz: Vicepresidencia de Bolivia.
- Gavaldà, Marc, Refrescando la memoria del vertido. La amnesia petrolera en Bolivia <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=117926> (30/05/13).
- Giddens, Anthony,
2010 La tercera vía. La renovación de la socialdemocracia, México D.F.: Tauros.
- Harvey, David,
2007, El nuevo imperialismo, Madrid: Akal.
- Hernández, Efraín L,
2010, “Entre imperios y nacionalismo. Geopolítica de los hidrocarburos amazónicos” en CELA, Revista Estudios Latinoamericanos, N. 25, enero-junio, México D.F. pag. 93-118.
- Horkheimer, Max,
2006, Estado autoritario, México. D.F.: Itaca.
- Jordán, Rolando y otros,
2010, Excedente y renta en la minería mediana. Determinantes del crecimiento minero 2000-2009, La Paz: PIEB-Embajada del reino de los Países bajos.
- Leonardo Tamburini,
2009, “La problemática de la tierra en Bolivia” ¿Se acabó con el latifundio? En Subversión, La etnicidad en Bolivia, año2, No. 2, Cochabamba, pag. 83-94.
- Llanque F. Ricardo y otros,
2011, Qamiris aymaras. Desplazamiento e inclusión de elites andinas en la ciudad de Oruro, La Paz: PIEB.
- Lukes, Steven,
2007 El poder. Un enfoque radical, Madrid: Siglo XXI.
- Machado, Horacio y otros,
2012, 15 mitos y realidades de la minería transnacional. Guía para desmontar el imaginario prominero, Quito: ABAYA YALA.

- Mamani Ramírez,
2013 “Todos somos presidentes”. El Otro poder (Bolivia: luchas sociales y el Estado), inédito.
- 2012-2013 “Estado Plurinacional: entre el nuevo proyecto y la factualidad neocolonial” en *Bolivian Studies Journal / Revista de Estudios Bolivianos*, <http://bsj.pitt.edu>, Vol. 19. pag. 132-158.
- 2010 Reconstitución y cartografía del poder del ayllu, consejo nacional de ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) en Fondo Indígena, Aportes al Estado plurinacional de Bolivia, La Paz: Fondo indígena, pag. 79- 170.
- 2004 El Rugir de las multitudes. La fuerzas de los levantamientos indígenas en Qullasuyu/Bolivia, La Paz: Yachaywasi-uywiyiri.
- IBCE (Instituto Boliviano de Comercio Exterior),
2012, Boletín electrónico Bisemanal No. 175, 19 de diciembre de 2012, Bolivia.
- 2013, Boletín Electrónico Bisemanal, No. 192, 7 de febrero de 2013, Bolivia.
- Orellana, A. Lorgio,
2006 El Gobierno del MAS no es nacionalista ni revolucionario. Un análisis del Plan Nacional de Desarrollo, La Paz: CEDLA.
- Rakovsky, Christian,
1928 Los peligros profesionales del poder, Astrakán, 6 de agosto de 1928.
- Platt, Tristan,
1988 “Pensamiento político aymara” en Xavier Albo (comp), Raíces de América. El mundo aymara, Madrid: UNESCO. Sociedad Quinto centenario (1492-1992), Alianza editorial, pag. 365-451.
- PIEB,
2013 Seis estudios de caso muestran diversas problemáticas agrarias de los pequeños productores del país, http://www.pieb.com.bo/sipieb_notas.php?idn=7888 (30/05/13).
- Pukara,
2013 ¿El empoderamiento de una burguesía indígena? El MAS y Evo Morales quisieron hacer una revolución socialista, con características pachamamistas. Lo que lograron fue dar impulso a la concreción de una nueva clase que cada vez toma más fuerza:

- una burguesía de raigambre indígena, año 7. No. 80, La Paz.
- Sandoval, Carmen D y otros,
2003, Santa Cruz. Economía y poder, 1952-1993, La Paz: Facultad de Humanidades-CEDURE-PIEB.
- Santos, Boaventura de Sousa,
2010, Refundación del Estado en América Latina. Perspectiva desde una epistemología del sur, La Paz: PLURAL-CESU.
- SENA-Fobomade, Bolpress, 16/2/2012).
- Soruco, Ximena y otros,
2008, Los barones del Oriente. El poder en Santa Cruz ayer y hoy, Santa Cruz: FUNDACIÓN TIERRA.
- Urioste, Miguel Fde C.,
2011 Concentración y extranjerización de la tierra en Bolivia, La Paz: fundación tierra.
- Van der Valk, Alba y otros,
2011, Colonialidad del poder en Caraparí. Estudio de la disputa por la tierra, relaciones de trabajo y autoridad, La paz: PIEB.
- Weber, Max,
2002 Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, Madrid: Fondo de Cultura Económica.
- Zibechi, Raúl,
2012, Brasil potencia. Entre la integración regional y un nuevo imperialismo, México D.F: Bajo tierra.
2006 "IIRSA: la integración a la medida de los Mercados", <http://www.ircamericas.org/esp/3314> (1/3/2012).
- Leyes
Gaceta oficial,
2013 Ley de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques, No. 337, 11 de enero de 2013.
2012 Incentivo a la producción de hidrocarburos, No. 1202, 18 de abril de 2012.
2006 Revolución agraria. Modificación de la Ley 1715. Reconducción de la reforma agraria, 28 de noviembre de 2006.
2006 Decreto supremo de nacionalización de hidrocarburos "Héroes del Chaco" No. 28701, 1 de mayo de 2006.

LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL MAS: ¿HACIA EL VIVIR BIEN O A LA CONSOLIDACIÓN DEL CAPITALISMO?

Carlos Arze Vargas⁶¹

La economía boliviana ha crecido en los últimos siete años a una tasa anual promedio de 4,7%, sustancialmente superior a la tasa de 2,6% de los siete años previos, de 1999 a 2005. Si consideramos que esa tasa de crecimiento fue superior a la tasa de crecimiento de la población –alrededor de 2,7%-, tenemos que también el PIB per cápita o ingreso por habitante habría crecido en un porcentaje importante a lo largo de este período.

El gobierno de Evo Morales ha presentado este indicador junto a otros -como el incremento de las reservas internacionales netas por encima de los 13.000 millones de dólares, el crecimiento récord de las exportaciones que han cruzado el umbral de los 11.000 millones de dólares o el incremento de los depósitos bancarios situados en cerca de 13.000 millones de dólares-, como muestras del éxito macroeconómico de su gestión. Más todavía, a partir de esos datos económicos ha señalado reiteradamente que las condiciones sociales han mejorado radicalmente: el índice de pobreza habría bajado de 61% a 45% entre los años 2005 y 2011.

Puestas las cosas de esa manera, se podría concluir afirmando que la gestión del gobierno de Evo Morales ha sido exitosa en los planos económico y social. Pero cabe preguntarse si estos indicadores reflejan la transformación económica y social prometida por el programa de gobierno y, en general, por el discurso del Movimiento al Socialismo

61 Economista. Investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, Cedula.

(MAS). Para responder a esa cuestión, debemos hacer un repaso sucinto de los objetivos explícitos del llamado Proceso de Cambio condensados en el objetivo del Buen Vivir.

El objetivo final del Buen Vivir

Al interior del MAS y del mismo gobierno existen diferentes concepciones o versiones de la noción de Vivir Bien, diferencias que se hacen patentes al momento de evaluar la naturaleza y aplicación de las políticas públicas, en especial de la política económica. De las diferentes posturas hechas públicas, consideramos que hay dos corrientes que destacan en el debate discursivo: una que enfatiza los aspectos más filosóficos de la propuesta⁶² y otra que desarrolla los aspectos prácticos de la gestión pública⁶³.

Para la primera corriente, el Buen Vivir constituiría un paradigma ancestral de los pueblos indígenas, basado en la noción de comunidad de todos los seres vivos, opuesta a la “noción occidental” antropocéntrica de desarrollo que, en la actualidad capitalista, absolutiza el valor monetario contra el equilibrio entre el hombre y la naturaleza (Huanacuni, 2010: 18). Ante el riesgo inminente de colapso de la civilización al que conduce la búsqueda de riqueza material promovida por el capitalismo, esta corriente postula el retorno a una forma de equilibrio entre el ser humano y todos los seres y elementos de la naturaleza (Bravo y Gonzáles, 2009: 1), basado en la recuperación de una conducta humana asentada en los valores “eternos” de los pueblos indígenas y resumidos en el “respeto a todo lo que existe” (Huanacuni, 2010: 39).

Por tanto, el objetivo no sería ya la búsqueda de bienestar material ilimitado, sino la vida en equilibrio y en armonía con la naturaleza. Empero, algunos de los teóricos de esta corriente afirman que el Vivir Bien no reniega del progreso material, sino que apunta a una modernidad “amigable con la naturaleza” que tendría ciertas coincidencias con el socialismo por su preocupación por

62 Esta corriente estaría liderada por el actual canciller David Choquehuanca.

63 Corriente encabezada por el Vicepresidente Álvaro García Linera.

las necesidades humanas, aunque su horizonte va más allá de la construcción de una sociedad igualitaria, pues se trata de construir “una nueva vida” (Bravo y Gonzáles, 2009: 1). En esta construcción del Vivir Bien, el papel del Estado consistiría en “distribuir y redistribuir los bienes para todos en el marco de una “economía comunitaria productiva” a través de la gestión comunitaria, a la que se subordinarían todas las políticas estatales (Huanacuni, 2010: 40).

La segunda corriente propugna como objetivo final la constitución del Socialismo Comunitario: un nuevo tipo de sociedad basada en la expansión de las formas de vida de la comunidad indígena y en sus valores universalistas. Entre la actualidad capitalista y ese nuevo estadio de la sociedad, mediaría un largo período de transición, que consistiría en el desarrollo económico a través de la industrialización que incrementaría el valor agregado de los recursos naturales y crearía una mayor capacidad productiva nacional. Con todo, la nacionalización y la industrialización no consistirían en la reposición del capitalismo de Estado, pues no buscarían la acumulación privada, sino la redistribución social; priorizarían “el valor de uso y la necesidad por encima del valor de cambio” (García Linera, 2011b: 66).

La gestión gubernamental del MAS sería, precisamente, esa etapa de transición, caracterizada por la vigencia de la Economía Plural -donde coexisten las diferentes formas organizativas de economía: comunitaria, estatal, privada y social-cooperativa-, que se encaminaría al Socialismo Comunitario a través de las transformaciones propiciadas por un modelo económico social, comunitario y productivo, basado en la soberanía de la propiedad y la industrialización de los recursos naturales para su exportación o consumo interno (MEFP, 2006: 10). La política económica consistiría en la superación del modelo primario exportador, a través de “corregir las fallas del mercado” -que provocan desigualdad social y dominio monopólico de las transnacionales- mediante la redistribución de los excedentes de los sectores primarios entre todos los agentes económicos bolivianos y, especialmente “entre aquellos sectores excluidos”, guiándolos hacia la agricultura y la industria (Arce 2011: 7).

Como puede verse, estas nociones resultan contradictorias en relación a los caminos divergentes que tomarían para realizar el Buen Vivir, pues mientras la primera enfatiza el abandono o, al menos, la indiferencia por las metas materiales de bienestar, la segunda corriente proclama la industrialización como la vía de satisfacción de las necesidades sociales y la propia construcción del Buen Vivir⁶⁴. Sin embargo, en términos del objetivo perseguido ambas postulan la superación del capitalismo, con su lógica de lucro y acumulación, y su sustitución por una sociedad que constituiría una especie de prolongación de la naturaleza (García Linera, 2011b: 69).

En el curso de la gestión del MAS ha sido segunda corriente la que asumió la dirección del diseño y la aplicación de las políticas económicas, dejando para la primera el espacio discursivo con el propósito de atraer el apoyo de las organizaciones campesinas e indígenas. Por ello, en adelante intentaremos una evaluación de los resultados económicos alcanzados por la política económica del gobierno de Evo Morales, desde la perspectiva del discurso oficial de superación del capitalismo y, en particular, de la configuración del capitalismo atrasado boliviano, contenida principalmente en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) elaborado por un equipo ligado a dicha corriente interna (MEFP, 2006).

Cambios en el patrón primario exportador

La característica esencial de la estructura económica del país es, y ha sido a lo largo de la historia, su naturaleza primaria exportadora, determinada por la división internacional del trabajo impuesto por el capitalismo maduro hace un par de siglos atrás. El PND elaborado por el gobierno destaca también ese rasgo, del que hace derivar todas las demás características del desarrollo económico del país, planteándose superarlo

64 En la segunda noción, es innegable la impronta de la noción de “capitalismo andino amazónico” que el Vicepresidente García Linera había proclamado a inicios de la gestión de gobierno, pero que fue abandonada porque incomodaba el discurso oficial de respecto de la Madre Tierra.

en base a la captura estatal del excedente producido en los sectores extractivos y su redistribución al resto de la economía. Ello quiere decir que opta por la diversificación productiva y, especialmente, por el desarrollo de las ramas de actividad generadoras de empleo e ingresos para la población, aunque siempre introduciendo la noción del Buen Vivir para enfatizar que la perspectiva no es la acumulación de valor, sino la satisfacción de las necesidades humanas, con un sentido austero y responsable ambientalmente.

A contrapelo de esos propósitos, el crecimiento del producto nacional en la última década estuvo marcado por el comportamiento de las industrias extractivas: en el quinquenio 2001-2005, fue el incremento de la producción de hidrocarburos (en particular el gas natural), con una tasa anual promedio de 10%, el que dio cuenta del crecimiento; en el período 2006-2009 ese papel le correspondió a la actividad minera, que alcanzó una tasa de más del 20%. De ese modo, las ramas extractivas vieron crecer su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) desde un 10% hasta poco más del 12%. Esto significa que los sectores que determinaron la dinámica de la economía nacional a lo largo de la última década fueron los tradicionales sectores extractivos, lo que tuvo su contrapartida en la caída de la incidencia o importancia relativa del comportamiento de la agricultura sobre la tasa de crecimiento del PIB, que descendió de 20% a inicios de la década a sólo 8% a finales de la misma, dando la primera alerta sobre los riesgos potenciales para la provisión de alimentos y materias primas para la producción nacional.

Esa situación -que resulta una evidencia de que el mayor crecimiento económico por sí mismo no significa la superación del atraso sino que puede constituir la perpetuación de ese patrón de desarrollo- es permanentemente justificada por las autoridades de gobierno que sostienen que, al ser la actual crisis del capitalismo mundial un fenómeno derivado de la crisis energética y la crisis alimentaria, la elevada demanda de materias primas se convierte en la “oportunidad” para el país de convertirse en gran productor de energía y alimentos;

más aún, la producción masiva de energía y alimentos sería el obligado inicio del “tránsito entre el sistema capitalista y una sociedad socialista” (Arce, 2011: 4). La continuidad de la explotación capitalista de los recursos naturales, su profundización, aparecería como insondable de la propia revolución: en palabras del Vicepresidente, “dejar de ser una ‘economía primario exportadora’, garantizar la ‘seguridad alimentaria’, no se hace con buenas intenciones, requiere millones de dólares de inversiones en distintas áreas de la economía del país” (García Linera, 2011a: 96).

Además, la agudización de la orientación primario-exportadora de la economía se refleja en la creciente importancia de la demanda externa en la estructura del PIB y en la composición de las exportaciones.

Mientras que en los años noventa las exportaciones representaron el 24,5%, durante la gestión del MAS alcanzaron el 34%; contradictoriamente, el consumo bajó en los mismos períodos del 86% al 82% del PIB y la inversión cayó del 17% al 16%. Esto quiere decir que la demanda interna sufrió una reducción relativa, que contrasta con la importancia creciente de la demanda externa, lo que revela su alto grado de vulnerabilidad en un contexto internacional signado por la crisis económica. Esta circunstancia contradice la afirmación gubernamental de que el crecimiento durante su gestión se habría debido al crecimiento de la demanda interna y principalmente del consumo de las familias, gracias a sus políticas redistributivas.

Aunque es cierto que el consumo mostró tasas anuales de crecimiento mayores a las del pasado, se trató en realidad de recuperaciones coyunturales que no modificaron la importancia de las exportaciones en la determinación del PIB; además, a menudo se tiende a desconocer que la profundización de la especialización en la producción para la exportación, trae como consecuencia para un país el descuido de la producción para el consumo interno, reforzando su rol de proveedor de materias primas e importador de manufacturas. Por ello, pese al aumento inusitado de las exportaciones, las importaciones, que cada vez son más diversas e incluyen

bienes básicos como los alimentos agrícolas, se tornan más inflexibles a la baja, relativizando el éxito de la política exportadora⁶⁵.

En el mismo sentido, la composición de las exportaciones, muestra que el carácter primario exportador de la economía nacional se ha agudizado durante el primer período de gobierno del MAS: las exportaciones de hidrocarburos y minerales en el período 2001-2005 constituía el 47,2% de las exportaciones nacionales, en cambio, en el quinquenio siguiente la suma de la exportación de esos sectores llegó al 69,6%. Es remarcable, además, que ese carácter tradicional de nuestras exportaciones no fue afectado favorablemente por los nuevos acuerdos económicos internacionales como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que proclaman un nuevo tipo de integración basada en las necesidades de los pueblos y no en el frío cálculo del mercado: i) en términos geográficos, aunque se verifica la reducción del comercio con EEUU, el efecto no fue el incremento del comercio con los países de la región, sino con otros países capitalistas del Asia y Europa; ii) en relación con el volumen, el comercio con el ALBA permanece en niveles irrelevantes (aproximadamente un 5%), la oferta boliviana continúa concentrada en pocos productos primarios —soya y sus derivados, y girasol y sus derivados— y sólo se aprecia su mayor participación en el valor de las importaciones de combustibles de Venezuela.

Así, demostrada la permanencia de los rasgos del patrón primario exportador, la constatación del cambio que se estaría gestando con la nueva política económica deberíamos buscarla en el grado de industrialización que ella promueve, una industrialización que, además, debería diferir de la industrialización capitalista por la priorización del valor de uso, de las necesidades de la población, en franca oposición a la búsqueda de lucro o ganancia.

65 Comparando el período 2006-2009 con el quinquenio anterior, la propensión a importar aumentó en 25%; es decir que se importa una cuarta parte más que antes por cada dólar que se obtiene por exportaciones.

Insipencia de la industrialización “anti-capitalista”

El grado de industrialización del país, reflejado en la participación de la industria manufacturera en el PIB, ha sido siempre insignificante comparado con el de otros países de la región. Como en el pasado, esa participación en las últimas tres décadas se ha mantenido alrededor del 17%. Además, la industria boliviana-esencialmente manufacturera-se caracteriza por su bajo nivel transformativo, por la preeminencia de rubros básicos como el de alimentos y el de bebidas y tabaco que, durante los últimos 30 años, representaron entre el 40% y el 50% del producto industrial. En el quinquenio 2006-2010 esa situación no mejoró, sino que, debido a la mencionada priorización de los sectores extractivos, se agudizó. Esos rubros básicos sobrepasaron el 50% y fueron los únicos que demostraron cierto dinamismo junto a la producción de cemento, que constituye un rubro muy sensible a las coyunturas económicas y que tampoco revela un grado mayor de sofisticación tecnológica. Contrariamente, rubros como los textiles y prendas de vestir que en el pasado inmediato dieron cuenta de una mejoría importante en el comercio internacional del país, sufrieron una caída del 13% en su participación; asimismo, otras industrias como las de fabricación de maquinaria, productos metálicos básicos y diversos descendieron un 8%. Por si lo anterior fuera poco, el crecimiento de las unidades económicas manufactureras ocurrió -siguiendo una tendencia iniciada en la década neoliberal de los ochenta- mayoritariamente en el denominado sector informal.

Esta tendencia en el comportamiento de la industria no fue afectada radicalmente por las acciones gubernamentales, que se enfocaron en la creación de una serie de empresas manufactureras orientadas a la producción de bienes de consumo básico y a la implementación de grandes proyectos de industrialización en los sectores de hidrocarburos y minería.

La implementación de los proyectos de industrialización mostró, en general, considerable retraso y estuvo rodeada

de graves problemas de ineficiencia y corrupción⁶⁶, falta de capacidad técnica en el diseño y los cálculos económicos⁶⁷, marcada ineficiencia en la implementación de las actividades planificadas, improvisación y sometimiento a la presión corporativa de organizaciones sociales o a cálculos electorales del partido de gobierno⁶⁸. Muchos de éstos no tenían financiamiento estatal y debieron recurrir a la donación o el crédito privado interno o externo. Así, de nueve empresas manufactureras proyectadas desde 2007, solo tres estuvieron en operación en 2012, con el agravante de que se trata de plantas de reducida magnitud en términos de inversión, volumen de producción, generación de ingresos públicos y creación de empleos.

Los magros resultados alcanzados obligaron a las autoridades a salir en defensa de su estrategia, atemperando su discurso y relativizando la importancia de la creación de empresas estatales. El Vicepresidente justificó su limitado impacto afirmando que, en realidad, el objetivo gubernamental al crear esas pequeñas fábricas de “carácter artesanal” era sólo ayudar a los productores campesinos y aclaró que no era su intención sustituir a las empresas privadas más eficientes en un ámbito reservado a ellas, pues el Estado concentraría su participación en los sectores extractivos estratégicos que permiten obtener rentas (García Linera, 2011: 45).

En esto consistiría, entonces, la idea de transmontar la lógica utilitarista del capitalismo, de la liberación del dominio de la ley del valor: transformar los productos campesinos en productos industriales básicos orientados a su propio consumo, al margen o sin importar su valor monetario ni los

66 Caso de la fábrica Papelbol en el que se implicó a una autoridad de primer rango (ABI, 2012)

67 El caso más bullado fue el de la fábrica de azúcar de Bermejo, suspendida después de tres años al comprobarse que el proyecto no descansaba en estudios profesionales sino en datos proporcionados por los propios productores campesinos que demandaban la construcción de la planta (*Cambio*, 2012: 1).

68 La planta procesadora de cítricos de Caranavi, promesa del MAS para las elecciones de 2010, fue disputada posteriormente por dos provincias aledañas a las que se les hizo la misma oferta, lo que derivó en un conflicto que tuvo como saldo la muerte de dos personas y una treintena de heridos. La solución gubernamental fue la construcción de las dos plantas, sin respaldo técnico ni económico (*La Razón*, 2010: 1).

costos de su producción, entretanto la inversión estatal se ocupe de generar excedentes en las tradicionales esferas del extractivismo.

Tampoco la industrialización de los recursos naturales no renovables, brilló por sus resultados. La realización de los mega-proyectos tropezó, como sucediera con las pequeñas fábricas de bienes de consumo, con la incoherencia, con errores en la implementación y con la corrupción⁶⁹.

En el ámbito de los hidrocarburos, la incoherencia en la formulación de la política y las discrepancias en la asignación de atribuciones a las instituciones encargadas del proceso ocasionaron la recurrente modificación de los planes y acabaron paralizando las acciones prácticas. Esos cambios también se reflejaron en el manejo financiero, que acentuó la precariedad derivada de la insuficiencia de los recursos públicos: las diferentes instituciones estatales incorporaron una serie de proyectos cuya responsabilidad sigue en disputa y la debilidad financiera de YPFB, reflejada en su Plan de Inversiones 2009-2015 que planteaba un total de inversiones de \$US 7.561 millones, de los cuales el 52% carecían de financiamiento (YPFB 2009: 227), obligó al Gobierno a recurrir a las Reservas Internacionales, disponiendo créditos por encima de los \$US 1.000 millones.

En las evaluaciones oficiales, el retraso en la implementación de los proyectos intentó ser atenuado con la puesta en marcha de pequeñas empresas, como las plantas de fabricación de accesorios que utiliza insumos importados y no constituyen estrictamente industrialización. Además, el retraso en la implementación de los proyectos ha incrementado las amenazas sobre la viabilidad de los mismos: por ejemplo, el desarrollo de industrias de urea en Brasil con gas boliviano -planta de Tres Lagos, que producirá desde 2014-afecta la posibilidad de que ese país se convierta en el principal mercado para los fertilizantes producidos en Bolivia.

69 El más importante fue el caso Catler, la estafa en la construcción de la planta de separación de líquidos de Río Grande por parte del presidente de YPFB, Santos Ramírez, condenado a 12 años de cárcel en enero de 2012.

En el caso del sector minero, la industrialización también se desarrolló en el marco de la improvisación, pues la elaboración del Plan de Desarrollo Minero Metalúrgico no había finalizado hasta fines de 2011, es decir, después del primer período de gobierno del MAS. Por ello, los proyectos con menor cumplimiento son precisamente los más grandes e importantes, en términos de volumen de la inversión y de la complejidad de los procesos de transformación industrial. De los siete proyectos identificados por el Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM), dos entraron en funcionamiento en los plazos previstos (planta de Corocoro y fábrica de ácido sulfúrico) y dos se hallan en la fase final de construcción (horno Ausmelt en Vinto y rehabilitación de Karachipampa), mientras que los restantes se encuentran en diferentes estadios de cumplimiento de lo previsto. En otros casos, como el de la fábrica de ácido sulfúrico y de la fundición de Karachipampa, se trata, en realidad, de su rehabilitación y no de nuevas construcciones. En el caso de la industrialización del litio del Salar de Uyuni -presentada como el paradigma del “salto industrial” de Bolivia-, el retraso se debe principalmente a la previsión errónea sobre la duración del proceso de investigación del método de obtención de carbonato de litio como paso previo para la obtención de litio metálico y la fabricación de baterías de ión-litio; esta fase, que culmina con la producción piloto de carbonato, lleva un retraso de dos años aproximadamente. Esto ha puesto en tela de juicio la capacidad estatal para desarrollar la producción industrial de carbonato de litio en condiciones rentables y ha introducido una gran incertidumbre sobre las posibilidades del país para intervenir en el creciente mercado de litio (Zuleta 2011: 1).

Finalmente, el proyecto siderúrgico del Mutún, que representaba la mayor inversión extranjera (\$US 2.100 millones en siete años), fue suspendido, rescindiéndose el contrato con la empresa Jindal Steel & Power. Las circunstancias especiales que rodearon el desarrollo de este proyecto desde su inicio, tales como el incumplimiento de inversiones por Jindal y la incapacidad de YPFB para garantizar el flujo necesario de gas natural, conducen a pensar que el proyecto estuvo desde un

principio determinado por razones políticas del gobierno del MAS, que enfrentaba en 2006 la oposición abierta de las élites cruceñas, y no a una decisión planificada.

De todo lo anterior, se deduce que la industrialización no fue el norte de las acciones gubernamentales y que concluyó relegada por el objetivo primordial de incrementar la recaudación fiscal, reeditando la experiencia neoliberal de acelerada monetización de las reservas de hidrocarburos y de minerales a través de la exportación de materia prima. Más aun, al constituirse en un experimento limitado, no orientado a la integración vertical de los sectores productivos -desde la producción primaria hasta la producción de bienes de capital- y sometido, en gran parte, a las decisiones de la inversión privada, no constituyó una alternativa a la industrialización capitalista, constituyendo, más bien, un ejemplo de la hegemonía del mercado en la política económica.

Nacionalización sin control estatal

Es frecuente en la literatura económica crítica, asumir que la nacionalización de empresas privadas constituye un sinónimo de anti-capitalismo, más aún si las mismas son las más importantes de una economía. Apoyado en ese equívoco común, el gobierno ha proclamado que la principal prueba de que su política busca revertir ese sistema económico es la nacionalización de los hidrocarburos a partir de 2006 y de otras empresas, posteriormente. Una mirada un poco más profunda, sin embargo, revela que la nacionalización no es contradictoria con el desarrollo de los intereses capitalistas, es decir, de sus relaciones de producción y distribución dominantes.

La nacionalización de los hidrocarburos, que incluyó la recuperación de las empresas privatizadas por los gobiernos neoliberales (dos empresas productoras, una empresa de transportes, dos refinerías y una empresa de almacenamiento) recurrió a la compra de acciones, en unos casos de la totalidad de las que permanecían en manos privadas y en otros del número suficiente para posibilitar el control del 50%

+ 1 del paquete accionario. La única expropiación ejecutada, consistió en la transferencia de las acciones que formalmente pertenecían a los ciudadanos bolivianos y eran administradas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), a manos del Estado.

No obstante, ese proceso que había sido iniciado en 2005 con la aprobación de la Ley de Hidrocarburos 3058 sólo transfirió al Estado una parte minoritaria de los activos que operaban en el sector y declaró como propiedad del pueblo boliviano las reservas conocidas y las por conocer, por lo que el desarrollo de la producción y la posibilidad de incrementar las reservas comerciales continuó bajo decisión de los inversionistas privados que, además, siguieron fungiendo como operadores de los campos de producción.

Los nuevos contratos con las empresas extranjeras no sólo garantizaron su permanencia en el país, sino que reconocieron “de buena fe” los montos de inversión declarados por las mismas, haciendo que la participación de YPFB en las utilidades netas de cada campo resultara menor. Por ello, el principal efecto de la medida resultó ser la ampliación relativa de la tributación dispuesta por la ley en 2005, a partir de la inclusión de una participación variable en favor de YPFB, de las utilidades netas de las empresas operadoras. De esa manera, al 50% de tributos determinados por la ley de hidrocarburos (32% de IDH y 18% de regalías), se sumó a partir de 2008 un 12,5%, en calidad de utilidades variables para la empresa estatal.

Ahora bien, pese a que el nuevo régimen tributario constituyó un avance trascendental en términos de apropiación estatal del excedente petrolero, de modo que se convirtió en la principal fuente de ingresos fiscales, la afectación a las empresas transnacionales no resultó ser fatal ni mucho menos. Gracias al aumento de las exportaciones -debido principalmente al nuevo contrato con la República Argentina: hasta 27 millones de metros cúbicos diarios y un precio mayor al del contrato con el Brasil-, los ingresos monetarios controlados por las empresas transnacionales después de pagar los tributos, se elevaron en términos absolutos

en referencia al pasado régimen. En efecto, las petroleras extranjeras que en 2004, sobre un valor de producción hidrocarburífera de \$US 1.172 millones controlaron el 75% del valor bruto de la producción equivalente a 879 millones, en 2010, sobre un valor de 3.053 millones llegaron a controlar el 35% equivalente a \$US 1.068 millones; en ausencia de incrementos sustanciales en los costos de producción, esta situación necesariamente se tradujo en ganancias mayores. Así se explica por qué las transnacionales no abandonaron el país después de la nacionalización.

Peor todavía, contradiciendo el discurso oficial de la soberanía estatal sobre los recursos naturales, la preeminencia de las empresas transnacionales en el control de la producción de hidrocarburos sigue siendo destacable, pues más del 80% continúa en sus manos, mientras YPFB sólo participa en la producción del restante 17,8%. En el caso de las áreas petroleras de exploración, a pesar de la presencia dominante de YPFB, en 2010 sobre una superficie de 13,5 millones de hectáreas, las empresas controlaban el 15%, participación que en los años posteriores se fue ampliando merced a una serie de nuevos contratos suscritos con el Estado; en el caso de las áreas de explotación en curso, la “nacionalización” respetó íntegramente los derechos de las empresas extranjeras adjudicadas mediante la privatización de los años noventa, lo que les permite mantener el control efectivo de las reservas probadas de hidrocarburos.

La consecuente ausencia de control real y efectivo del Estado sobre la inversión y la producción hidrocarburífera en los campos que se deriva de esa situación, ha provocado el incremento de su poder, al punto de que pueden contener el crecimiento de la producción si así lo exigen sus cálculos de rentabilidad y afectando la economía popular. Prueba de ello fue la situación de estancamiento de la producción gasífera y, especialmente, la caída de la producción de petróleo que orilló al gobierno a decretar el “gasolinazo” de diciembre de 2010, con el propósito de otorgar un incentivo monetario que indujese a los operadores privados a incrementar la extracción de petróleo crudo para la elaboración de combustibles de

consumo interno. No obstante el fracaso de esa medida, el gobierno aprobó un incentivo similar en 2012, consistente en un sobreprecio de 30 dólares por barril de petróleo, que deberá ser pagado con parte de la misma renta que obtiene por la nacionalización⁷⁰.

Así, desde una perspectiva más general, la nacionalización no significó, como en experiencias anteriores llevadas a cabo por gobiernos burgueses de corte nacionalista, la recuperación del monopolio estatal sobre la producción de los hidrocarburos y el control efectivo de la inversión sectorial, que permiten el control real del abastecimiento del mercado interno y la realización de los planes de desarrollo económico.

En el caso de la minería, la nacionalización, bajo esa versión limitada que le imprimió el MAS, estuvo ausente, motivo por el cual la participación estatal continúa siendo menos relevante que en el sector de hidrocarburos. La presencia de las empresas privadas extranjeras, agrupadas en la denominada “minería mediana y grande”, fue y sigue siendo dominante en la producción de minerales, tanto en términos de valor como de volumen, mientras que la presencia del Estado a través de Comibol se limita a la producción de estaño por la empresa minera Huanuni y a la producción de cobre por la empresa minera Corocoro. En la evolución reciente de la minería destaca la irrupción de la empresa minera San Cristóbal (MSC) que ha pasado a tener una posición dominante desde 2009, año en que controlaba el 69% de la producción de zinc, el 84% del plomo y el 46% de la plata, minerales que representaron el 96% de la producción minera del país ese año, lo que denota un proceso típico del capitalismo: la concentración de la producción y la acumulación en pocas manos.

Por tanto, las reformas se limitaron a la modificación parcial del régimen tributario para las empresas productoras, mediante la incorporación de un impuesto adicional del 12,5% sobre las utilidades extraordinarias de las empresas

70 Medida dispuesta mediante Decreto Supremo 1202 de abril de 2012.

favorecidas por la elevación sostenida de las cotizaciones internacionales. De esa manera, las recaudaciones tributarias mineras aunque se duplicaron en el segundo quinquenio de la década pasada, en el primer período de gobierno del MAS apenas llegaron a un promedio anual de 7% sobre el valor de la producción, aporte que, como hemos visto, resulta sustancialmente inferior al del sector hidrocarburífero.

No obstante de todo lo anterior, el hecho más importante derivado de la política gubernamental en el sector minero, tiene que ver con el proceso de acelerada privatización de las reservas fiscales, a través de su concesión en favor de las cooperativas. Esa acción ha sido, además, acompañada de una serie de medidas que favorecen su acumulación de capitales -otorgación de créditos baratos, establecimiento de agencias estatales de comercialización, exención de tributos, entrega gratuita de equipos y maquinaria, entre otras-, permitiendo que muchas de esas entidades “sociales” se hayan convertido en verdaderas empresas privadas, que reproducen las formas más aberrantes de extractivismo y de explotación laboral.

En resumen, las políticas del MAS en la minería no están orientadas hacia la nacionalización ni a la estatización, sino al fortalecimiento de la inversión privada extranjera y al fomento de pequeños y medianos productores con capacidad de acumular (cooperativas), lo que hace impracticable el objetivo gubernamental de control estatal de la cadena productiva. Esa orientación coincide plenamente con los criterios presentes dentro del gobierno que postulan que el “núcleo dirigente” del Estado en el proceso de cambio debería asentarse en los sectores informales y en los gérmenes de un nuevo tipo de burguesía nacional (García Linera, 2009: 13).

Otra medida que tiene una importancia trascendental para revertir la estructura económica y social es, sin duda, la reforma agraria. El gobierno del MAS, modificando parcialmente la Ley INRA, promovió una política que tuvo en la titulación colectiva de la tierra su principal distintivo, pero no dispuso un ataque frontal al latifundio, escudado en su concepción de que el latifundio es sinónimo de “tierra improductiva” y no de concentración de la propiedad.

Por tanto, no se propuso afectar las grandes propiedades territoriales en manos de empresas privadas, sino únicamente aquellas que permanecieran ociosas, principio que fue ratificado en la nueva CPE al limitar a 5.000 hectáreas la propiedad “individual” de la tierra y sólo para las concesiones posteriores al año 2009, legitimando de hecho todos los derechos previos de los latifundistas.

El saneamiento territorial hasta 2010 alcanzó al 50% de la tierra disponible, porcentaje del cual un 28,3% corresponde a tierras fiscales y reservas naturales, 39,5% a Territorios Indígenas Originario Campesinos (TIOC), 17% a tierras de propiedad campesina individual, 6,6% a propiedades privadas individuales y empresariales, y 8,6% de tierras fiscales disponibles para su distribución. Ahora bien, el proceso de saneamiento no afectó a propietarios privados, sino que consistió principalmente en la distribución de tierras de vocación forestal y tierras fiscales agrícolas (50%), mientras que la afectación a la propiedad por incumplimiento de la FES, que puede considerarse reversión a propietarios privados, sólo alcanzó al 27% de los 2,9 millones de hectáreas redistribuidas hasta el año 2010 (Cedla, 2012: 7).

Esa forma limitada y distorsionada de reforma agraria acabó desembocado en una permanente situación de pugnas y enfrentamientos por la posesión de tierras, que ha derivado en una creciente presión por parte de campesinos de tierras altas, afectados por el minifundio, y de todo tipo de productores sobre los territorios incultos de los parques nacionales y los TIOC. Es más, el mismo gobierno, a través de acciones de incentivo al agronegocio o como sustento de su discurso de soberanía alimentaria, está impulsando la extensión de la frontera agrícola, ocasionando incidentes que vulneran derecho de pueblos indígenas, como en el caso del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Securé (TIPNIS).

Consecuentemente, el ámbito productivo agropecuario, pese a las numerosas estrategias y planes que apuntan a la priorización de la producción ecológica y el desarrollo rural integral y sustentable, que privilegiaría el fortalecimiento de

las capacidades de las “comunidades indígenas, campesinas, agroextractivistas, colonos y otros pequeños productores rurales, (MEFP, 2006: 137), como formas de alcanzar la soberanía alimentaria, fue afectado negativamente por la limitada reforma de la estructura de tenencia de la tierra, pues no eliminó la presencia de grandes propietarios privados -muchos de ellos extranjeros- de tierras destinadas a productos agroindustriales. Reflejo de ello es el hecho de que en la producción de los principales productos alimenticios -agrícolas y cárnicos-, el dominio empresarial se ha hecho más fuerte. Así, la producción de caña de azúcar, soya, sorgo, girasol y cebada, a cargo de productores capitalistas y orientados hacia la exportación, creció del 79% en 2005/2006 hasta el 82% en 2008/2009, mientras que los productos no-industriales -principalmente tubérculos, frutales, hortalizas y forraje- a cargo de productores campesinos, cayeron en el mismo período del 21% al 18% (Ormachea, 2010: 7).

Se puede colegir, entonces, que las políticas gubernamentales de fomento a la producción campesina-indígena de alimentos, en conjunto con la reforma agraria “comunitaria”, no revirtieron sino que consolidaron el predominio de las unidades productivas capitalistas y el agronegocio de exportación, relegando la posibilidad de alcanzar la soberanía alimentaria. El corolario de esa situación, fue el incremento de las importaciones anuales de alimentos en el período 2006-2009 -a través de la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) y de Insumos Bolivia-, como la principal respuesta gubernamental a la insuficiencia de la oferta interna.

El corolario: la economía plural bajo hegemonía capitalista

El resultado de las transformaciones operadas en la estructura económica a partir de la implementación de las políticas gubernamentales, puede ser evaluado observando la participación en la formación del PIB, de los diferentes sectores institucionales: público, privado y social-comunitario, que refleja la prevalencia de los diferentes

modos de producción, su participación en la generación de riqueza y, en consecuencia, la apropiación social de la misma. En contraste con datos oficiales que calculan el crecimiento de la participación estatal en el PIB en el período 2005-2010, de 20% a 34% (MC, 2012 y García Linera, 2011a), un ejercicio nuestro elaborado a partir de los parámetros de la metodología insumo-producto utilizada por el INE para calcular las cuentas nacionales, determina que esa participación creció de 13,9% a 19,9% en el mismo período. La estructura del PIB, en consecuencia, estaría dominada por la presencia de la producción realizada por empresas de propiedad privada en un 71,2% (capitales bolivianos en un 53% y extranjeros en 18,6%), mientras que la producción a cargo del sector comunitario sólo sería de 6,3% y el cooperativo de 2,6%.

El ejercicio destaca, además del incremento de la participación estatal, la reducción del 3% de la participación privada extranjera, así como la disminución en la participación de la producción comunitaria y un crecimiento muy leve de la participación de la producción cooperativa. Esta evolución puede explicarse principalmente por el limitado alcance del denominado proceso de nacionalización que se circunscribió a la recuperación de las acciones mayoritarias en algunas empresas privatizadas en la década de 1990, que no implicó la expropiación de empresas privadas y que tampoco significó la reposición del monopolio del Estado en los sectores claves de la economía, por lo que su poder de radiación hacia otras esferas fue reducido, provocando que muchas de las empresas privadas extranjeras y nacionales continúen participando hegemónicamente en varias ramas de actividad.

Subvenciones, transferencias y políticas sociales redistributivas

Pero si las políticas de nacionalización no implicaron una modificación de la estructura económica a partir de la transferencia del excedente económico recuperado por el Estado, ¿habrán provocado una redistribución de la riqueza

que supere las consecuencias sociales de la economía capitalista en el período neoliberal?

El modelo económico parte de la idea de que la aplicación de políticas redistributivas podrían no sólo mejorar las condiciones de vida de la población, sino coadyuvar en la superación del patrón de desarrollo orientado hacia el exterior, mediante el fortalecimiento del mercado interno. En ese sentido, dispone de políticas que incluyen subvenciones, transferencias condicionadas y financiamiento de servicios públicos.

El Estado boliviano subvenciona la compra de combustibles en el mercado interno desde hace varios años debido a la insuficiencia de la oferta nacional de diesel oil y de gasolina. Esta subvención alcanza aproximadamente al 2% del PIB y a alrededor del 4% del gasto fiscal. Empero, se debe destacar que el volumen de los recursos destinados a la subvención de combustibles no guarda relación con el tamaño del incremento del gasto fiscal corriente en otras partidas, como las de remuneraciones para personal burocrático y los gastos corrientes de funcionamiento de las oficinas gubernamentales.

Por otra parte, las transferencias unilaterales consisten en bonos o subsidios como el Bono Juancito Pinto, destinado a niños en edad escolar, el Bono Juana Azurduy, para mujeres gestantes y la Renta Dignidad, dirigida a las personas de la tercera edad que da continuidad a una política iniciada en 1996 con el Bonosol. Estas transferencias para grupos sociales vulnerables tienen un costo equivalentes al 1,6% del PIB y al 3,6% de los egresos del Sector Público No Financiero (SPNF). Tenemos, entonces, que el gobierno financia subvenciones y subsidios por un monto anual aproximado de 640 millones de dólares, equivalentes al 3,6% del PIB o 7,6% de los egresos fiscales, que son una parte muy pequeña de la renta proveniente de la explotación de recursos naturales no renovables que, en el año 2010 llegaba a aproximadamente 2.400 millones de dólares.

Por eso, no se puede deducir, como hace el gobierno, que estos gastos en subsidios y transferencias habrían

mejorado radicalmente los ingresos de los hogares y reanimado su consumo, llegando a incidir de manera determinante en el crecimiento del PIB. Esto es más evidente, si comparamos el monto de esos gastos con los montos correspondientes a otros ingresos de las familias. En efecto, una fuente de ingresos más importante para muchos hogares bolivianos son las remesas provenientes del exterior, que llegaron a constituir hasta un 7,8% del PIB en el año 2007 y poco más del 14% de los egresos realizados por el SPNE, como promedio para los últimos cinco años. Resumiendo, la diferencia entre las remesas recibidas por los hogares bolivianos y los recursos destinados a financiar los bonos y la subvención de combustibles resulta evidente: en 2010, las primeras equivalían al 11,2% de los egresos fiscales y los segundos sólo al 7,6%.

Respecto a los principales servicios de salud, la información oficial refiere que el gobierno nacional ha priorizado, durante la última década, la atención primaria en salud, mientras que la atención en los otros dos niveles de mayor especialización ha estado a cargo de la seguridad social y del sector privado (empresas, organizaciones no gubernamentales e Iglesia católica, fundamentalmente), lo que da continuidad a un proceso paulatino de privatización de la salud iniciada hace varias décadas en el país. Con todo, las acciones del Estado para revertir la mala cobertura del sistema de salud habrían permitido en la última década mejorar la infraestructura para atención primaria, cambiando la relación del número de personas por unidad de infraestructura.

En el caso de la educación, la información oficial permite conocer que en el primer período de gobierno del MAS, el grado de instrucción general de la población joven y adulta habría aumentado: la población de 19 años y más de edad con instrucción secundaria del 26,6% al 28,6% y con educación superior del 21,6 al 23,8%; el porcentaje de personas mayores con educación primaria habrían caído del 39,4% al 36%, lo que mostraría una mejoría en la promoción de las personas hacia mayores niveles de instrucción. Sin embargo,

en contradicción con la mejora en el nivel de instrucción de la población joven y adulta, la situación de acceso a la educación de niños y adolescentes a la educación pública, reflejada tanto en la tasa neta de matriculación (población escolar que se matricula en los niveles que corresponden a su edad) en establecimientos estatales, habría caído en esos años, de 68% a 62%, debido principalmente a la caída en la cobertura neta del sector primario de 85% a 79%.

Probablemente, los resultados modestos y ambiguos en estos dos ámbitos de los servicios públicos tengan que ver con el insuficiente incremento del financiamiento público en relación con la magnitud de las necesidades. A pesar de las expectativas de la población en el incremento extraordinario de los recursos fiscales como efecto del aumento de la renta fiscal, ello no ha ocurrido en la medida de las necesidades: el gasto de la administración central en ambos servicios en 2010 habría representado un 17% del gasto del SPNE, menor en relación al 22% que representaba en 2005 (MEFP, 2013).

Esa situación tiene que ver, ciertamente, con la orientación rentista de la gestión gubernamental y con las prioridades que ha asumido la política fiscal, que atendió principalmente las necesidades políticas de consolidación del régimen y no a las necesidades sociales. Los datos correspondientes a los gastos corrientes y de inversión del sector público revelan que los primeros han ido creciendo proporcionalmente más que el gasto en bienes de capital, lo que se traduce en la pérdida de oportunidades en el futuro para que el fisco obtenga mayores recursos genuinos del incremento de la actividad productiva. En ese incremento, los ítems más importantes corresponden a remuneraciones y compra de bienes y servicios, lo que revela el crecimiento inusitado del aparato burocrático. Además, el comportamiento de ciertos rubros de gasto corriente estuvo en algunos años fuertemente influido por la agenda político-electoral del Gobierno. Así, mientras la relación entre gasto corriente y gasto de inversión en 2005 era de 70/30, en el año 2010 se deterioró hasta un 76/24.

La explotación de la fuerza de trabajo como fuente de riqueza

El corolario de la evolución económica descrita líneas arriba, es la situación de las condiciones de trabajo y de ingresos de la fuerza de trabajo que posibilitaron el actual ciclo de auge de la economía nacional.

El primer aspecto de esa situación laboral, es la reducción de la tasa de desempleo abierto, explicada por varios factores concurrentes. Por un lado, una fracción creciente de la población en edad de trabajar ha ingresado al mercado laboral, debido a que la dinámica de la economía está otorgando mayores oportunidades a la fuerza de trabajo y porque las condiciones de ingresos de los hogares, deprimidas al extremo en el pasado inmediato, están empujando a más miembros del mismo, principalmente mujeres, a la búsqueda de fuentes adicionales de ingreso. Como consecuencia de ello, el desempleo se redujo de manera sostenida entre 2005 y 2010: de 8,1% a 5,7% de la Población Económicamente Activa (PEA).

Por su parte, el incremento del empleo que explica esa reducción sostenida del paro, muestra algunas características relevantes: i) el incremento de la participación del sector informal (superando el 63% del empleo urbano), con la consecuente caída del empleo formal, ii) el aumento del empleo estatal y la caída de la participación del sector empresarial en casi seis puntos porcentuales. Las implicaciones del crecimiento del sector informal son preocupantes, pues significan una agudización de la precarización de las condiciones laborales, debido a la ausencia de regulación y de beneficios sociales que en él prevalecen.

Como consecuencia de esa evolución del empleo y por la orientación de las políticas económicas gubernamentales, en especial, la política salarial, los ingresos de los trabajadores sufrieron un deterioro importante. Si bien el comportamiento positivo de la economía, reflejado en el crecimiento sostenido del PIB a tasas cercanas al 4%, permitió la reanimación y el crecimiento de algunas ramas de actividad económica y el

incremento del ingreso medio nominal en aproximadamente 53% durante el período 2005-2009, el ingreso real -ingreso deflactado por el incremento de precios-, sólo creció en un 1,7%. Esa evolución de los salarios tiene que ver con la pérdida de su poder adquisitivo debido a la reanimación de eventos inflacionarios en varios años del período y debido a que la política salarial del Gobierno continuó con el principio establecido en anteriores regímenes, de sujetar el incremento salarial a la tasa inflacionaria del pasado año, por lo que dispuso casi todos los años incrementos levemente superiores a la inflación pasada. Además, el incremento anual sólo fue dispuesto para una parte de los dependientes del Estado y como referente de negociación en el caso de los trabajadores privados.

Pero como el movimiento de los salarios reales sólo nos revela su mejora o desmejora relativa, para comprender la importancia de su evolución en términos de poder adquisitivo es necesario contrastar el salario con un valor normativo, es decir, con el valor monetario de una Canasta Alimentaria que reúna el conjunto de bienes y servicios necesarios para cubrir los requerimientos mínimos de reposición de la fuerza de trabajo. En ese sentido, si comparamos el salario promedio de los obreros del sector privado a nivel nacional, con el valor de esa canasta, observamos que dicho salario no alcanzó a cubrir el costo de la canasta alimentaria en ningún año de la última década. Además, esa brecha se habría ampliado durante la gestión gubernamental del MAS: mientras en 2004 el salario promedio constituía más del 99% de la canasta, en 2010 el salario promedio representaba apenas el 74% del valor de la canasta. Este fenómeno de insuficiencia del salario para subvenir las necesidades básicas de la familia de los trabajadores, alcanzaría a más del 65% de los ocupados en el país en 2008.

Para comprender la dimensión de la presión que las políticas económicas están imprimiendo sobre las condiciones de consumo productivo y de reproducción social de la fuerza de trabajo, debido a la ausencia de redistribución de la propiedad de los medios de producción

y por efecto de las políticas públicas orientadas a facilitar la acumulación capitalista, recurrimos al concepto de pauperización de la fuerza de trabajo, que expresa la tendencia -en el desarrollo de la acumulación capitalista- a la reducción relativa de las remuneraciones en el producto social. Para ello, observamos el comportamiento de la participación del salario -denominada también salario relativo- al interior del valor del producto o ingreso nacional, es decir, la evolución de la relación entre el valor destinado a las remuneraciones, el valor del excedente apropiado por los capitalistas y los impuestos netos para el Estado que nos proporcionan las cuentas nacionales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, vemos que al interior de la estructura de la Cuenta de Producto y Gastos Internos, el ítem de Remuneraciones habría caído de manera sostenida durante el primer período de gobierno del MAS de 30% a 25%; contrariamente, tanto el excedente de explotación que va a manos de los capitalistas, como los impuestos -que son otra forma que adopta la plusvalía generada por el trabajo- habrían aumentado absorbiendo esa disminución relativa de las remuneraciones, el primero de 51,8% a 55,5% y los segundos de 17,4% a 24,5%.

Finalmente, la comparación de la evolución del salario real (poder adquisitivo del salario) con la evolución del producto (PIB) también es adecuada para observar el comportamiento del salario relativo. Utilizando las tasas anuales de la inflación y las tasas anuales de incremento salarial dispuestas por el gobierno, vemos que la variación acumulada del salario real (9,11%) ha sido mucho menor que la variación acumulada del producto (27,49%) durante el último quinquenio correspondiente, paradójicamente, al período del gobierno del MAS. Esto quiere decir que la reducción del salario en proporción al incremento del producto elaborado por el trabajador, se explica por un incremento de la explotación laboral. En otras palabras, los trabajadores -cuyo salario, hemos visto que es insuficiente incluso para garantizar su reproducción física- han elevado la producción anual a costa de una mayor intensidad en el

trabajo -productividad- o de un incremento en la duración de sus jornadas de trabajo.

Conclusiones

La aplicación del Nuevo Modelo Económico Social, Comunitario y Productivo por parte del gobierno de Evo Morales ha producido resultados que no parecen avanzar hacia los objetivos que el discurso oficial postuló como situaciones intermedias en la construcción del Vivir Bien. Este incumplimiento de las previsiones gubernamentales -en el sentido de que sus políticas conducirían a la superación no sólo del patrón de acumulación primario exportador, sino del capitalismo-, no tiene que ver únicamente con los problemas derivados de la ineficiente gestión pública, sino que parte de las contradicciones evidentes entre la expansión de la economía capitalista y la noción del Vivir Bien que, discursivamente, asume una postura escéptica respecto a las virtudes de la expansión de la producción y el consumo para satisfacer las necesidades de la sociedad y, principalmente, para promover un desarrollo social en equilibrio con la naturaleza.

Como es inverosímil que los gobernantes no hayan sido conscientes de esa contradicción, sólo podemos concluir que la incorporación de la noción del Vivir Bien en el discurso y los planes gubernamentales tuvo únicamente un propósito político electoral y que, también, perseguía el apoyo y la anuencia de un auditorio intelectual de “izquierda” en el exterior del país.

La información económica descrita a lo largo de este trabajo destaca que las políticas económicas gubernamentales han dado continuidad a las políticas de los gobiernos que le antecedieron, pues se han inspirado en los principios liberales de competitividad y apertura externa para fomentar la generación de rentas que financien ampliamente el presupuesto fiscal. De esa manera, no sólo que han operado en favor de la permanencia del patrón primario exportador, sino que han facilitado la difusión de las relaciones capitalistas

en los distintos ámbitos de la economía, situación que se resume en el predominio de los sectores empresariales en la generación del PIB. Las medidas destinadas a la redistribución del excedente, a través de la inversión pública o las transferencias a actores económicos internos, han procedido en el mismo sentido, pues han acabado promoviendo nuevas fracciones incipientes de capitalistas.

En ausencia de cambios importantes en la estructura económica, es decir en las relaciones sociales de producción, el crecimiento económico ha derivado en un proceso acrecentado de acumulación capitalista asentado, como siempre, en la depresión de los salarios, la precarización de las condiciones laborales, y en la afectación de los derechos de pueblos y comunidades indígenas. La ausencia de políticas dirigidas a la revolución de la productividad en el agro ha reforzado el carácter rentista de la economía y del mismo Estado, en la medida en que ha imposibilitado la ampliación y diversificación del aparato productivo, incentivando, por el contrario, el incremento de las importaciones y la permanencia de la especialización productiva en sectores primarios para la exportación. Asimismo, los datos relativos al empleo revelan la agudización de la distorsión de la economía nacional, consistente en el predominio de las actividades denominadas “informales”.

La revisión del desempeño de las políticas inspiradas en el Socialismo Comunitario que desconoce que las contradicciones del capitalismo surgen de su propia naturaleza -es decir de su carácter de modo de producción basado en la explotación del trabajo ajeno-, revela que éstas, al promover la acentuación del extractivismo y al confiar el protagonismo de esa tarea al capital transnacional, son incapaces de superarlo y, más bien, lo estimulan. De ese modo, las acciones estatales, limitadas a superar “las fallas del mercado”, resultaron funcionales a la permanencia del patrón de acumulación primario-exportador. Más aún, los resultados prueban la imposibilidad del desarrollo armónico de la denominada Economía Plural, basada en la convivencia de los distintos modos de producción.

Pero la evaluación también permite reconsiderar la percepción equivocada de que la mayor presencia estatal en la economía, así sea con la nacionalización de muchas industrias, promueve la difusión paulatina del socialismo. Por el contrario, el estatismo capitalista puede conducir a una mayor explotación de los trabajadores y a la precarización de sus condiciones de vida.

En definitiva, estos resultados no nos acercan a ese estadio denominado del Vivir Bien donde la convivencia social y de los seres humanos con la naturaleza discurre armoniosa y pacíficamente, sino que configuran una sociedad capitalista atrasada, donde el predominio del capital extranjero convive con la producción mercantil subordinada de los pequeños productores y ambos se asientan en la explotación de la fuerza de trabajo asalariada. Por lo mismo, el promotor de esa sociedad, el Estado, dista también mucho de ser el “Estado integral” -en que desaparece la diferencia entre aparato político clasista y sociedad civil- y muestra los rasgos menos sublimes de un Estado de clase que promueve y defiende la acumulación capitalista.

Bibliografía

- ABI
2012 “Tribunal de Cochabamba niega Amparo Constitucional a brasileña D’Andrea en contra de Papelbol” [en línea]. La Paz: Agencia Boliviana de Información, 2012. < <http://www3.abi.bo/nucleo/noticias.php?i=2&j=20120628212727>> [Consulta: 1 de julio, 2012]
- Arce Catacora, Alberto
2011 El Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo, La Paz: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
- BCB
2012 “Memoria 2011. Banco Central de Bolivia” [en línea]. La Paz: Banco Central de Bolivia, 2012.<<http://www.bcb.gob.bo/webdocs/publicaciones/memorias/memoria2011/capitulo%203.pdf>> [Consulta: 5 de junio 2012]
- Bravo, Patricia y Gonzáles, Cris
2009 “El socialismo comunitario refundará Bolivia. Habla el canciller boliviano David Choquehuanca” [en línea]. Rebelión, 2009. < <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=82600>> [Consulta: 25 de agosto, 2012]
- CEDLA
2012 Boletín Control Ciudadano N° 19, La Paz: Cedla.
- Cambio
2012 “Estudio revela que no es viable instalar Azucarbol en Bermejo”. Periódico Cambio, Sección Economía, p.1, Bolivia, 7 de septiembre, 2012.
- García Linera, Álvaro
2009 El papel del Estado en el Modelo Nacional Productivo, La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional.
- García Linera, Álvaro
2011a Las empresas del Estado. Patrimonio colectivo del pueblo boliviano, La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional.
- García Linera, Álvaro
2011b Las tensiones creativas de la revolución. La quinta fase del Proceso de Cambio, La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional.

- Huanacuni Mamani, Fernando
2010 Buen Vivir / Vivir Bien: Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas, Lima: CAOI.
- INE
2011 Anuario Estadístico 2010, La Paz: Instituto Nacional de Estadísticas.
- INRA
2010 Informe de Rendición de cuentas, Santa Cruz: Instituto Nacional de Reforma Agraria.
- INRA
2010 Informe de Gestión 2010. Logros y resultados, La Paz: INRA-Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional.
- INRA
2012 Boletín Somos Tierra N° 2, La Paz: INRA.
- La Razón
2010 “Productores se disputan la sede de una planta procesadora de cítricos”. Diario La Razón, Sección Ciudades, p.1, Bolivia, 29 de abril, 2010.
- MDRAyMA
2007 Revolución Rural, Agraria y Forestal, La Paz: Ministerio de Desarrollo Rural Agua y Medio Ambiente.
- MDRAyMA
2008 Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria, La Paz: Ministerio de Desarrollo Rural Agua y Medio Ambiente.
- MEFP
2006 Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para Vivir Bien, La Paz: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
- MEFP
2013 Memoria de la Economía Boliviana 2012, La Paz: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
- MHE
2009 Estrategia Boliviana de Hidrocarburos, La Paz: Ministerio de Hidrocarburos y Energía.
- MMM
2010 Memoria Anual 2006-2009, La Paz: Ministerio de Minería y Metalurgia.

Cambio

2012 Segundo año del Estado Plurinacional. Informe del Presidente Evo Morales ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, La Paz: Ministerio de Comunicación.

Ormachea, Enrique

2010 Soberanía alimentaria en Bolivia entre el discurso y la realidad, La Paz: Cedla.

UDAPE

2010 “Dossier de Estadísticas Sociales y Económicas” [en línea]. La Paz: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas, 2010. <http://www.udape.gob.bo/portales_html/dossierweb2011/htms/CAP07/c070209.xls> [Consulta: 31 de agosto, 2012]

YPFB Corporación

2009 Plan de Inversiones 2009-2015, La Paz: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos-Corporación.

Zuleta, Juan Carlos

2012 “La verdad sobre la industrialización del litio, cuestionada” [en línea]. La Paz: HidrocarburosBolivia.com, 2011. < <http://www.hidrocarburosbolivia.com/nuestro-contenido/noticias/39661-la-verdad-sobre-la-industrializacion-del-litio-cuestionada.html>.> [Consulta: 15 de mayo, 2012].

LA TRANSNACIONAL PETROBRAS Y
METAMORFOSIS DE SU ESTRUCTURA
SOCIETARIA:
EL “PETRÓLEO ES NUESTRO”

Cassio Garcia Ribeiro⁷¹
Henrique T. Novaes⁷²

Introducción

Los combustibles fósiles tuvieron un papel destacado en el proceso de industrialización de la economía brasileña. Frente a esto, y teniendo en cuenta la dirección estatal que caracterizó el proceso de Industrialización por Substitución de Importaciones (ISI), el gobierno brasileño pasó a intervenir cada vez más en la industria petrolera doméstica, con el objetivo de garantizar el abastecimiento necesario al proceso de industrialización en marcha. La culminación del papel del Estado con el sector petrolero brasileño fue la creación de Petrobras.

Petrobras es la más grande empresa estatal brasileña, “y también la más polémica e involucrada en mitos de todo orden” (Macedo y Silva, 1985:1). Las polémicas en torno a la empresa, tanto antes, como después de su creación opuso a dos grupos: uno que defendía la participación del capital extranjero en el sector petrolero brasileño, y el otro, que abogaba en favor del monopolio estatal. El resultado de este enfrentamiento fue una solución de “término medio”, con la creación de una sociedad de economía mixta a partir de la Ley N° 2004/53, la cual pasaría a monopolizar prácticamente

71 Docente da Unesp-Franca (Estado de São Paulo). cassio.garcia@gmail.com

72 Docente da Unesp-Marília (Estado de São Paulo). hetanov@yahoo.com.br

todos los segmentos de la industria petrolera brasileña hasta la creación de la “Ley del Petróleo” (1997), misma que contó con la participación del capital privado desde su constitución. Durante el período en el cual entró en vigor la política de ISI en Brasil, las reformas de equipos y servicios realizados por Petrobras, fueron pieza importante de esta política, al fomentar el desarrollo de la industria de bienes de capital del país. Además de convertir con el proyecto de desarrollo del gobierno brasileño, esta estrategia se justificaba en virtud del impacto negativo en la balanza comercial causada por la operadora nacional. Liquidada el problema después de los dos choques del petróleo. Vale destacar que este escenario también impulsó a la empresa a asumir una postura de vanguardia tecnológica en el área de exploración y producción de petróleo en aguas profundas, donde se concentran las reservas de hidrocarburos brasileños.

A lo largo de los años ochenta y noventa, Brasil inicia un proceso de contrarreforma y redefinición del papel del Estado en la economía, vinculado a la agenda neoliberal. Este proceso engendró, en la práctica, el alejamiento del Estado de las actividades productivas, especialmente de aquellos sectores de la infraestructura, en las cuales actuaba de forma directa. Las reformas introducidas a partir de entonces crearon las condiciones generales de reproducción del capital financiero.

Siguiendo las directrices del recetario neoliberal, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (FHC) promueve amplias reformas en el aparato estatal, como la apertura económica, la privatización de algunos sectores y la introducción de presiones competitivas en la economía brasileña. Al interior de las reformas neoliberales, el Estado pasa a intervenir: a) como regulador de los sectores industrial y de servicios, a través de la creación de las agencias reguladoras, en muchos casos son controladas directamente por el capital; b) en la creación de las condiciones generales de producción y reproducción del capital transnacional, en especial del capital financiero y a través de grandes privatizaciones; y c) en la creación de las condiciones generales de mercantilización total de la vida

y consecuentemente en la destrucción de la tímida y cara pública del Estado brasileño que surgió en los años treinta para cuidar la “cuestión social”.

La emergencia de ese nuevo consenso mundial inspiró la revisión de las políticas para el sector de energía en Brasil, a partir de la década de los noventa. Específicamente en el caso de la industria de petróleo y gas natural, el gobierno brasileño creó un nuevo conjunto de reglas cuya finalidad era “disminuir el centralismo estatal” subyacente a la ley N° 2004/1953, estimulando la entrada de corporaciones internacionales. Al mismo tiempo, la ideología neoliberal en boga en aquel momento apuntaba a la necesidad de eliminar el sesgo “paternal” de la política de compras de Petrobras y la “ineficiencia que marcaba las empresas bajo control del Estado”.

Frente a este contexto, marcado por el apremio de revisar el patrón de intervención del Estado en la economía, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso creó la llamada “Ley del Petróleo” (N° 9478/1997), marco decisivo en la historia de la privatización y quiebra del monopolio del petróleo brasileño. Además de la quiebra del monopolio de Petrobras, el nuevo marco regulador previó la creación de la Agencia Nacional del Petróleo (ANP) y del Consejo Nacional de Política Energética (CNPE), en el año de 1997. Cabe observar que la participación del capital privado (nacional y extranjero) en el control de la empresa también aumentó, de manera significativa, a partir del gobierno de Fernando Henrique Cardoso.

Con el inicio del gobierno de Lula (2003), importantes cambios ocurren en el sector petrolero brasileño. A partir de este gobierno las adquisiciones de Petrobras volvieron a ser utilizadas como instrumento para el desarrollo de la industria local y para la generación de empleos en el país. Asimismo, por no estar de acuerdo con la disminución de la participación del Estado brasileño en la composición del capital de Petrobras, Lula buscó (por medio de la compra de acciones de la empresa) reforzar la participación del gobierno del país en la estructura societaria de la compañía de petróleo de Brasil.

Pese a este esfuerzo del gobierno de Lula, pretendemos aquí mostrar al lector que Petrobras fue cambiando a lo largo de los años, pero, sobre todo después del gobierno de Cardoso, en un perfil “anfibia”: mitad Estado, mitad mercado. Por lo tanto, aunque haya ocurrido durante el gobierno de Lula una tentativa para revertir este fenómeno, se puede afirmar que la mayor presencia de accionistas privados en la composición del capital de Petrobras a partir del gobierno de Fernando Henrique Cardoso hizo que la empresa asumiera, invariablemente, un carácter “anfibia”. Por lo tanto, la finalidad de este trabajo es desmitificar la creencia en boga en otros países latinoamericanos de que Petrobras es una empresa estatal brasileña “purasangre”, controlada única y exclusivamente por los objetivos y metas estipulados por el “Estado Nacional Brasileño”. Petrobras es una empresa transnacional. Para alcanzar este objetivo haremos un recorrido que va de la creación de Petrobras hasta el gobierno de Lula, pasando por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, destacando cómo Petrobras fue tratado por las autoridades gubernamentales brasileñas a lo largo de las casi seis décadas de su existencia. Por último, pero no por eso menos importante, este artículo analizará también las perspectivas engendradas por el pre-sal (petróleo en la alta mar⁷³) a la sociedad brasileña y del capital extranjero, destacando el nuevo modelo regulador que fue creado para la producción de petróleo en esa nueva frontera de explotación.

El génesis de Petrobras

Al término de la Segunda Guerra Mundial se inició en Brasil un debate acalorado acerca de la mejor manera de realizar investigaciones exploratorias preliminares y al mismo tiempo extraer el petróleo en el país. El asunto estaba envuelto en polémicas de todo orden, porque se entraba en terrenos “pantanosos”, tales como: la soberanía nacional, el papel de los recursos minerales estratégicos, la política de

73 nota del editor.

industrialización y los límites de actuación de las empresas multinacionales en Brasil. Para debatir, se constituyeron dos grupos con posiciones distintas: uno que defendía la apertura del sector petrolero brasileño a la iniciativa privada, nacional y extranjera, y otro, que deseaba el monopolio estatal del petróleo.

Entre 1891 y 1930, el andamiaje legal brasileño determinaba que la propiedad del suelo y la propiedad del subsuelo eran inseparables. Además, en el ámbito de ese andamiaje, la propiedad de las tierras desocupadas y la reglamentación de la minería le correspondían a los estados. Sin embargo, en 1931, el Gobierno Federal de Brasil, bajo el comando del entonces Presidente de la República, Getúlio Vargas, anuló la Constitución de 1891 y determinó que a partir de aquel momento la autorización de las actividades de investigación y explotación de recursos naturales en todo el territorio brasileño sería prerrogativa del Gobierno Federal.

En ese sentido, se puede afirmar que tanto los particulares como los estados perdieron el control sobre los yacimientos y la actividad de la explotación minera. La elaboración del Código de Minas está directamente ligada al movimiento, en escala internacional, de “efectivación de la autoridad pública central, sobre recursos considerados esenciales o estratégicos (y que) constituyó uno de los mecanismos típicos de formación de los Estados Nacionales” (Draibe, 1985: 94).

Según Macedo y Silva (1985), el año de 1938, por lo tanto, aún durante el primer gobierno de Vargas (que duró entre 1930 y 1945), puede ser considerado como parteaguas específicamente en relación al petróleo brasileño. A partir de aquel año, una serie de decretos-ley (como el que creó el Consejo Nacional del Petróleo-CNP) fue publicada y su contenido evidencia la preocupación en crear un “proyecto nacional-estatista para el petróleo” (Macedo y Silva, 1985:3). Como el sector privado no se animaba a participar en el rubro de las investigaciones exploratorias preliminares y de producción, se evidenciaba la importancia del establecimiento de un marco legal en que la presencia del Estado brasileño

ocupara dicha vacío. Para muchos, por lo tanto, la solución para esa “falla de mercado” sería alcanzada con la creación de una empresa estatal.

No obstante, conforme ha sido resaltado, había mucha polémica en torno del sector petrolero brasileño. La creación de una empresa estatal, el monopolio estatal y la prohibición al capital extranjero de operar en este sector, no eran puntos pacíficos. Hasta la creación de Petrobras, en el año de 1953, “la política del petróleo permanecía (...), a la espera de una definición más clara del peso relativo de los varios proyectos para el petróleo que se enfrentaban en la sociedad brasileña” (Macedo y Silva, 1985: 18). El CNP, creado por Getúlio Vargas en 1938, con la incumbencia de evaluar los pedidos de investigación y explotación, además de fiscalizar las actividades de importación, exportación, transporte, distribución y comercio del petróleo en Brasil, oscilaba “de un polo a otro, del estatismo a la apertura hacia el capital extranjero” (Macedo y Silva, 1985: 18).

Prueba de este enfrentamiento existía debate acerca de los rumbos a ser tomados por el sector petrolero brasileño es el hecho de que en 1948, el entonces Presidente de la República, Eurico Gaspar Dutra, envió al Congreso Nacional de Brasil un anteproyecto que, en caso de ser aprobado, sería posible la participación de la iniciativa privada en la industria de combustibles. El ala “nacionalista” no estaba de acuerdo con dicha propuesta, por creer que su aprobación representaría la entrega a las multinacionales de un sector estratégico para la economía y sociedad brasileñas. En base a esa visión, esto es, con el objetivo de evitar la “internacionalización” del sector petrolero brasileño, este grupo creó un amplio movimiento popular, una campaña intitulada “¡El petróleo es nuestro!”.

Esta campaña alcanzó su principal objetivo, una vez que tuvo un peso decisivo en la no tramitación del Anteproyecto de Dutra, visto por los nacionalistas como una propuesta entreguista, en el Congreso Nacional. En 1951, primer año del segundo gobierno de Vargas, fue enviado al Congreso Nacional el proyecto 1516, el cual proponía la creación de Petrobras. Es importante destacar que, en aquel momento,

además del hecho de que Vargas era un político con marcada influencia nacionalista, pesaban a favor de la creación de Petrobras, el hecho de que la presencia del Estado brasileño en el sector petrolero del país ya era bastante significativa. La instalación de las refinerías de Mataripe y Cubatão evidencia tal presencia (Macedo y Silva, 1985).

En relación a los defensores de la creación de una empresa estatal destinada a controlar las actividades concernientes al sector petrolero brasileño, algunos la veían como una sociedad mixta, al paso que otros, como una empresa sin ningún vínculo con el capital privado. El mensaje de Vargas proponiendo la creación de Petrobras evidencia cuál era su posición al respecto de ese tema. De acuerdo con Vargas, teniendo en vista los beneficios para la economía del país y el éxito financiero incontestable de la Compañía Siderúrgica Nacional, creada en 1940 como sociedad por acciones, tal compañía debería servir como modelo para la constitución de Petrobras (Macedo y Silva, 1985).

En la evaluación de Vargas y de su equipo, como la concentración en las manos del Estado brasileño de las actividades vinculadas al sector petrolero nacional representaba una propuesta que no era acogida por todas las alas del congreso brasileño, la mejor estrategia sería reivindicar el mínimo realmente necesario. Frente a esto, según Lima: “el gobierno dejaba de lado la discusión en torno de la prohibición de capital extranjero en la industria petrolera y salía para crear una empresa en que el capital extranjero no estuviese presente o estuviese de manera (...) diminuta” (Lima, 1976: 90).

Por lo tanto, se puede afirmar que Vargas y su equipo se preocuparon por elaborar un texto que huyera al máximo de las polémicas subyacentes al sector petrolero brasileño. De acuerdo con Macedo y Silva “se pretendía, con esta táctica, obtener una aprobación rápida, posibilitando aumentar de inmediato la inversión en el sector” (Macedo y Silva, 1985:28). El crecimiento en el consumo de derivados en el período que antecede la creación de Petrobras era uno de los principales motivos de la urgencia. Además, conviene resaltar que era

cada vez más grande el peso del sector petrolero brasileño en la balanza comercial del país.

A partir de la aprobación de la Ley N° 2004, en 1953, durante el segundo gobierno de Vargas, quedó establecido el monopolio estatal del petróleo en Brasil y fue instituida Petrobras. Con la entrada en vigor de esta Ley, todos los segmentos del sector petrolero brasileño, con excepción de la actividad de distribución, pasaron a representar monopolio del Estado brasileño. Petrobras asumía el papel de operadora de las actividades monopolizadas por la Unión, tales como, investigaciones preliminares de exploración, producción y transporte de petróleo y sus derivados.

Al respecto de las fuentes de recursos financieros para costear las inversiones/actividades a ser desempeñadas por la empresa propuesta en el proyecto de ley enviado al Congreso brasileño, además de las tradicionales (como impuestos y tasación), se incluye la “suscripción voluntaria por los particulares y entidades públicas” (Documentos Parlamentarios, p. 59). De allí el carácter mixto de la petrolera propuesta por Vargas. Conforme hemos destacado, el éxito de la Compañía Siderúrgica Nacional reforzaba el argumento a favor de la creación de una petrolera con carácter de sociedad de economía mixta. Por lo tanto, la propuesta encaminada al Congreso preveía la creación de una compañía de capital mixto, teniendo al Gobierno Federal brasileño como su accionista mayoritario (Lima, 1976).

A pesar del hecho de agrandar a aquellos que no veían con buenos ojos la creación de un marco legal que restringiera la participación del mercado en las actividades/ingresos oriundos del sector petrolero brasileño, es posible decir que ese fue uno de los puntos más polémicos de la propuesta de Vargas. Según Macedo y Silva (1985), algunos se oponían a la creación de una compañía de capital mixto por principio, al paso que otros eran contrarios a la estructura societaria de la empresa prevista en el proyecto (el argumento usado era que no había, en el ámbito de la propuesta de Vargas, ningún impedimento para que las empresas extranjeras organizadas en el país se tornaran accionistas de Petrobras. A pesar de

la oposición que existía a la propuesta de la creación de una compañía de capital mixto, esta fue mantenida en el proyecto enviado al Congreso. Sin embargo, es importante que se diga que la Ley 2004 restringió el cuadro de accionistas de Petrobras, “excluyendo a las empresas extranjeras y los brasileños natos o naturalizados casados con extranjeros” (Macedo y Silva, 1985: 32).

Con la creación de Petrobras, se exacerbó las disputas entre los dos grupos mencionados anteriormente. El ala nacionalista veía a la empresa como un “instrumento de emancipación económica nacional”, al paso que los opositores, tachaban tal empresa como “bastión del comunismo” y “caja económica del caos” (Macedo y Silva, 1985). En 1954 Vargas se suicida y muchos asocian este evento trágico de la historia brasileña a la cuestión del petróleo. El hecho es que después de la creación de Petrobras creció la presión contra el monopolio estatal. Getúlio, en dos pasajes de su carta de testamento, de cierta forma, refuerza dicha tesis: 1ª) al denunciar la “campana subterránea de los grupos internacionales” y; 2ª) cuando afirma que “Quise crear la libertad nacional en la potencialización de nuestras riquezas a través de Petrobras; apenas si comienza está a funcionar, la ola de agitación aumenta”.

El papel de Petrobras en la política de substitución de importaciones

Al inicio de sus actividades el grado de dependencia de Petrobras en relación a materiales, equipos y servicios técnicos importados era prácticamente total. Ejemplo de esto es que, en 1954, solamente tornillos, pernos y piezas similares fueron producidos en el país para la construcción de las refinerías de Bahía (RLAM) y de Cubatão (RPBC). Por lo tanto, era evidente la debilidad de la industria brasileña de bienes de capital en el momento de la creación de Petrobras. Al completar su primer año de existencia, el índice de nacionalización de las compras de la estatal brasileña alcanzó el pobre nivel de aproximadamente 10% (ANP, 1999).

Sin embargo, como la estrategia en aquel momento era disminuir la dependencia externa, Petrobras persistió en su política de fortalecimiento de la industria de bienes de capital del país. En los proyectos de construcción de refinerías, infraestructura de producción, transporte y distribución, la compañía petrolera convocó a la industria de bienes de capital doméstica para participar (Alonso, 2004). Con el objetivo de reducir su dependencia en relación a los materiales, equipos y servicios importados la operadora nacional desarrolló una política pionera y exitosa de capacitación y calificación de los proveedores locales.

De acuerdo con Villela (1984), Petrobras puede ser considerada la primera estatal brasileña en adoptar una política de compras direccionada al mercado doméstico. Más tarde, la operadora nacional pasó a invertir en el parque industrial local “responsable por el abastecimiento de materiales, equipos, así como en el fortalecimiento de la capacitación en proyectos, ingeniería y tecnología” (Marzani et al., 2003). Cabe mencionar que, por ser importadora líquida, las actividades desempeñadas por Petrobras en esta época tenían un impacto negativo sobre la balanza comercial brasileña. Después, la estatal fue inducida por el gobierno brasileño a reducir sus importaciones.

Como consecuencia de sistemáticos esfuerzos de internalización de la producción, hubo un considerable aumento en el índice de nacionalización de materiales y equipos, que llegó a su cima al final de los años ochenta e inicios de los años noventa, cuando cerca de 90% de las compras de la estatal brasileña eran realizadas en el mercado local (Alonso, 2004). Al respecto, Macedo y Silva (1985:1) afirma que “Petrobras erigió una industria; al hacerlo, desempeñó un papel significativo en el proceso de intensas transformaciones estructurales por las que pasaba la economía brasileña”. En ese sentido, es evidente la importancia de Petrobras durante la industrialización por sustitución de importaciones en la constitución de una industria productora de equipos pesados, bastante concentrada en las manos del capital nacional.

La conquista del mar

Hasta el inicio de la década de los setentas, las actividades de E&P en el mar tenían poca relevancia dentro de Petrobras, debido a que importar petróleo era una opción más barata. El costo de la producción offshore brasileña era elevado, pues las plataformas y los equipos utilizados eran prácticamente todos importados. En este contexto, dado el bajo precio del barril de petróleo (hasta 1972) en relación al elevado precio de sus derivados, las inversiones de Petrobras se concentraban en el área del refinamiento, tendencia observada desde la fundación de la empresa en la década de cincuenta (Macedo y Silva, 1983).

A partir de 1973, en virtud del primer choque del petróleo y consecuente aumento en el precio del barril de petróleo, las actividades offshore asumieron el status de área estratégica dentro de Petrobras. En un contexto de restricción de divisas y cambio desvalorizado, la dictadura cívico-militar (1964-85) presionó a la estatal brasileña a buscar la autosuficiencia del país en la producción del petróleo, con el objetivo de reducir el impacto negativo que su actividad proporcionaba a la balanza comercial del país, problema que se agravó con los dos choques del petróleo que ocurrieron en los años setenta (Ribeiro, 2009).

En virtud de los esfuerzos endógenos, Petrobras se posiciona en la frontera tecnológica en las actividades de exploración preliminar y producción de petróleo en aguas profundas. Algunos países desarrollados con grandes industrias de petróleo offshore disputan el liderazgo en esta área, fundamentalmente los Estados Unidos y los países europeos que operan en el Mar del Norte (Reino Unido, Noruega y Francia). De tal manera, la presencia de la petrolera brasileña en este campo representaba ciertamente una destacable excepción.

La contrarreforma del Estado brasileño

El mundo fue parte, en los años setenta, de una generalizada crisis socioeconómica que dio origen a innumerables

estrategias por parte del capital para la recomposición de su tasa de ganancia. En América Latina, el aumento del endeudamiento externo, acompañado por la segunda crisis del petróleo, conformó en este período fuertes cambios en la estructura sociopolítica, que redundaron en elevada concentración de ingresos, acentuada pauperización y desempleo estructural, dictaduras políticas y consecuente desmantelamiento de las formas de representación político-sindicales de los trabajadores, además de una afirmación definitiva de la forma subordinada de los capitalismo nacionales.

Es en los años noventa en que América Latina entra en ruina, profundizando la ruptura posibilitada por las dictaduras cívico-militares. Eduardo Galeano escribió, en los años setenta, “Las venas abiertas de América Latina”, libro extremadamente actual, que sirvió para simbolizar el desangramiento de recursos lanzados para fuera de la región. Si fuera actualizado para el caso de los años noventa, posiblemente recibiría el nombre de “Las venas rotas de América Latina”. Otra mención al tema puede ser encontrada en el cuento de Julio Cortazar, “La casa tomada”, donde el autor retrata la invasión de una casa, que poco a poco es completamente tomada. El paralelo con la América Latina “tomada” es plenamente admisible, en función de la pérdida de control de los centros de decisión para las potencias del norte, principalmente el imperio estadounidense.

Para Harvey (2004), estamos viviendo una nueva era de acumulación “primitiva” o de acumulación por desposesión. Robo del agua, de la tierra, de los minerales, de los ferrocarriles, de las carreteras, del petróleo, del gas, de la madera, del patrimonio genético, pasan a hacer parte de los noticiarios de los periódicos más críticos y pasan a hacer parte de las luchas de los movimientos sociales latinoamericanos.

De acuerdo con Ianni (1989; 2000), diferentes proyectos de Brasil fueron estructurados en nuestra historia, que variaron fundamentalmente entre dos: capitalismo asociado o transnacional (períodos de 1956-1962, 1964-1982, 1985-1994, 1995-1998 y que extenderíamos por nuestra cuenta para

1999-2002) y capitalismo nacional (1930-1945, 1950-1954, 1962-1964).

Ianni, por ejemplo, no tiene dudas al encuadrar la gestión de Cardoso (1994 a 2002) como promotora de un Brasil provincia del capitalismo global, lo que nos lleva a creer que se trató de la promoción del capitalismo asociado, sin embargo con el agravante de la desindustrialización. De acuerdo con Ianni (2000):

esta es la ironía de la historia: Brasil nace en el siglo XVI como provincia del colonialismo e ingresa al siglo XXI como provincia del globalismo. Después de una larga y errática historia, a través del mercantilismo, colonialismo e imperialismo, ingresa al globalismo como modesto subsistema de la economía global. [...] [Brasil] ingresa al siglo XXI como simple provincia del capitalismo global; revelándose un caso de dependencia perfecta (Ianni, 2000:51).

Y prosigue: “lo que caracteriza la encrucijada en que se encuentra Brasil en la transición del siglo XX al XXI es el abandono y el desmonte del proyecto nacional, con sus implicaciones político-económicas y socioculturales, y la implantación de un proyecto de capitalismo transnacional, con sus implicaciones político-económicas y socio-culturales” (Ianni, 2000:51).

Los años ochenta fueron marcados por el bajo crecimiento, estancamiento del empleo con contrato formal e inicio de la exacerbación de los conflictos sociales. Pero es solamente en los años noventa que la barbarie se configura en su plenitud en América Latina. En la década de los noventa, “década vendida”, en la cual, por cierto, el crecimiento fue aún menor que el de la “década perdida”, vivimos otro estancamiento económico, procesos de apertura comercial y la aplicación de las políticas estructuradas por el “Consenso de Washington” y consentidas por la nueva correlación de las fuerzas de centro-derecha ascendidas al poder, que dio aval a estos procesos. En Brasil, fueron elegidos Collor y Fernando Henrique Cardoso. En Argentina, Carlos Menem

privatiza la nación. América Latina fue desindustrializada y desnacionalizada, tornándose una “colonia moderna”.

Fue en el Gobierno de Mario Covas que el Estado de São Paulo privatizó el Banespa, la Comgás, la CPFL, la CESP-Tietê y Eletropaulo, las carreteras estatales, la Telesp fue vendida para la empresa Telefónica, etc., todas vendidas a “precio de banana”, como se dice en el habla popular y con subsidios de Bancos, especialmente el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) para la compra del patrimonio intencionalmente desvalorizado. En las palabras de Octávio Ianni:

Muy simbólicamente, el BNDES, que se había creado para servir a la política de industrialización substitutiva de importaciones, en los moldes del proyecto de capitalismo nacional, es reorientado para favorecer a la transnacionalización, o sea, al desmonte del proyecto de capitalismo nacional. Simultáneamente, se intensifica la privatización de los sistemas de enseñanza y de salud, al mismo tiempo que se redefinen las relaciones de trabajo y las condiciones de funcionamiento de la previdencia, para favorecer la transformación de esas esferas de la “cuestión social” en espacios de aplicación lucrativa del capital privado, en el cual predominan las empresas, corporaciones y conglomerados transnacionales (Ianni, 2000:52).

Para Francisco de Oliveira, que probablemente estaría de acuerdo con Ianni, “Fernando Henrique Cardoso realizó lo que ni siquiera la Dama de Hierro [Margareth Thatcher] había osado: privatizó prácticamente toda la extensión de las empresas estatales, en una transferencia de renta, de riqueza y de patrimonio que tal vez solamente haya sido superada por el régimen ruso después de la caída de Mikhail Gorbachev” (Oliveira, 2009:3). Y prosigue, en un tono irónico: “Este grupo se deshizo de lo mejor de la estructura del Estado largamente creada desde los años 30, cortando los pulsos en un afán suicida sin paralelo en la historia nacional” (Oliveira, 2009:3). Es también en la década de noventa, a cambio del “apoyo” internacional para la realización de estas políticas y de la estabilización monetaria, que América Latina recibirá grandes

flujos de capital financiero de corto plazo. La “respuesta” dada a esta crisis por los Estados latinoamericanos fue llamada por los científicos sociales como modelo neoliberal. Una solución apuntada por el neoliberalismo para la crisis fiscal fue la reducción gradual de la actuación del Estado para el ejercicio de ciertas funciones. Entre otras, es en este momento que para hacer efectiva la máxima, el Estado productor de bienes y servicios es tachado como “ineficiente”. Algunos autores latinoamericanos resumieron esta cuestión en la siguiente expresión: Estado Mínimo para los trabajadores y para la soberanía nacional, Estado Máximo para el capital, principalmente para el capital financiero.

La adopción de políticas de ajustes estructurales por América Latina, en la década de los noventa, profundizó el desmantelamiento de la estructura salarial y laboral y la pérdida de derechos sociales y de la protección social adquirida, conformando así un aumento del desempleo, del subempleo y, en líneas generales, de indigencia social y de la dependencia (Behring y Boschetti, 2004).

Azpiazu y Basualdo (2001), al analizar los impactos de los cambios de la década de los noventa, observan que hubo en Argentina una profundización de los procesos de concentración y centralización de capital, lo que resultó en la reconfiguración del poder económico en el país. La mayoría de las 200 mayores empresas está en manos del capital extranjero sea en función de la adquisición de empresas públicas, sea a través de la asociación a los pequeños grupos (ex)-nacionales. Para estos autores, son los conglomerados locales y extranjeros, principalmente en función de los procesos de privatización, que se consolidaron como el núcleo hegemónico de poder económico en Argentina, adecuando el Estado a sus necesidades.

Tal como nos informa la tesis de doctorado de Isabella Jinkings (2007), las transformaciones recientes del capitalismo mundial apuntan para movimientos simultáneos de privatización y desregulación de la vida social y económica, de ataque a los derechos democráticos y de fortalecimiento de los aparatos coercitivos del Estado, caracterizando un Estado

cada vez más criminalizadora. La adopción de políticas de seguridad de “tolerancia cero” en los EUA es expresiva de estos movimientos constitutivos de la globalización del capital, bajo el predominio del neoliberalismo, que convierten amplios segmentos sociales en desheredados de las condiciones básicas de supervivencia.

La emergencia de un nuevo consenso mundial en los años noventa llevó a la revisión de las políticas para el sector de energía en Brasil. Específicamente en el caso de la industria de petróleo y gas natural, el gobierno brasileño promovió cambios en el plano institucional cuyo objetivo era crear un nuevo ciclo de inversiones en esta industria, atrayendo la entrada de nuevas empresas (nacionales y multinacionales) para el sector. Además de eso, en el plano macroeconómico, la sobrevalorización del real también tuvo importantes reflejos sobre la dinámica de la industria en cuestión (Almeida, 2003).

Una de las reformas implementadas por el gobierno brasileño en la década de noventa es la constitución de un nuevo andamiaje institucional para la industria de petróleo y gas natural. Dicho andamiaje se inauguró con la nueva ley de concesiones de servicios públicos (Ley N° 8987/95), que estableció la base jurídica de la competencia y para la actuación de la iniciativa privada en proyectos energéticos. Esta ley sometió a todos los servicios públicos a licitaciones públicas previas, introduciendo así la competencia en las inversiones para la expansión del sector. En 1997, durante el gobierno de FHC, fue promovida la flexibilización del sector de petróleo y gas natural mediante la promulgación de la “Ley del Petróleo” (N° 9.478/97), la cual determina que toda empresa, nacional o extranjera, puede realizar actividades de preliminares de exploración, producción, transporte, refinamiento, importación y exportación de petróleo en el país, mediante autorización, permiso o concesión de la autoridad pública. Bonneli & Veiga (2003:11) afirman que hasta la promulgación de la Ley del Petróleo, que instituyó la quiebra del monopolio de la operadora nacional, “Petrobras ocupaba en los segmentos bajo monopolio de la Unión, el

centro del triángulo cuyos vértices son: política pública, regulación y operación”.

A partir de la aprobación de la Ley del Petróleo, se creó el Consejo Nacional de Política Energética (CNPE) y la Agencia Nacional de Petróleo (ANP), los cuales pasaron a ocupar los vértices de la política pública y de la regulación, respectivamente, restando a Petrobras la operación, en la cual no ocupaba más la posición de monopolista. Por lo tanto, Petrobras, a partir de la instauración de ese nuevo ambiente institucional en el sector, perdió la exclusividad y pasó a ser legalmente obligada a participar en las subastas promovidas por la ANP, para obtener áreas de extracción (Ribeiro, 2005).

A la ANP le cupo la función, después de la quiebra del monopolio de Petrobras, de realizar licitaciones para la concesión de áreas o bloques destinados a la extracción de petróleo y gas natural, los cuales, aún con la entrada en vigor de la “Ley del Petróleo”, continuaron siendo propiedad de la Unión (Brasil, 1997). Las actividades de la ANP incluyen la realización de estudios con el objetivo de delimitar los bloques, así como la organización de las licitaciones de áreas para exploración preliminar, desarrollo y producción de óleo y gas. Además, tal agencia reguladora tiene como atribución celebrar, en nombre de la Unión, los contratos con las petroleras vencedoras de las rondas de licitación y fiscalizar su ejecución.

Entre 1999 y 2008, la ANP implementó la apertura del segmento de exploración preliminar y producción, a través de la realización de diez “rondas” de licitación para concesión de áreas de exploración y extracción de hidrocarburos en territorio brasileño. Actualmente, existen 76 compañías de petróleo operando en Brasil (siendo 39 nacionales y 38 extranjeras), a las cuales fueron concedidos bloques para la exploración preliminar y producción de petróleo y gas natural por la ANP en las diez rondas mencionadas anteriormente (ANP, 2013).

Cuadro 1. Lista de compañías petroleras en E&P en Brasil.

	Brasileiras	Estrangeiras
1	Aloes/Silver Marlin	Anadarko
2	Arclima	Arcadis
3	Aurizônia	BG
4	Barra Energia	BP
5	Brasoil	BrazAlta
6	CEMIG	Chevron-Texaco
7	Cheim	Ecopetrol
8	Codemig	El Paso
9	COMP/Imetame	Eromanga
10	Const. Cowan	Esso
11	EBX	Forbes & Manhattan
12	Egesa	Galp Energia
13	Engepet	Gran Tierra
14	ERG	Hess
15	Genesis 2000	Inpex
16	HRT	Integral
17	Lábrea	Karoon
18	Orteng	Koch/Central
19	Panergy	Maersk
20	Petrobras	Norse
21	PetroRecôncavo	ONGC
22	Phoenix	Partex
23	Pioneira	Perenco
24	Proen	Petro Latina
25	Quantra	Repsol YPF
26	Queiroz Galvão	Shell
27	RAL Engenharia	Sinochem
28	Rio Proerg	Sinopec
29	Severo & Villares	Somol/Serena
30	Sipet	Sonangol
31	Sollita	Statoil
32	Sotreq	SynergyGroup
33	STR	TDC
34	UBX	TNK-BP
35	UTC	Vanco
36	Vale	TotalFinalElf
37	Vibrapar	Woodside
38	Vitória Ambiental	VB Group
39	W.Washington	

Fuente: ANP (2013).

Por último, pero no menos importante, frente a los cambios que ocurren en el andamiaje legal del sector petrolero brasileño introducidos por el gobierno de FHC, cabe aquí destacar que Petrobras, siguiendo una tendencia internacional del sector petrolero, pasó a externalizar buena parte de las funciones que acostumbraba asumir en sus grandes proyectos de inversión y a contratar proyectos Turn-Key (“llave en mano”). Como las empresas extranjeras estaban más preparadas para asumir el papel de EPCistas en estos proyectos hubo un retroceso en las compras locales realizadas por Petrobras, teniendo en vista la falta de interés de tales empresas de relacionarse con la industria parapetrolera doméstica. En el año de 1999, de las 12 unidades de producción encomendadas por Petrobras, solamente una estaba siendo construida en el país (Furtado et al., 2003).

Frente a las modificaciones en el ambiente macroeconómico, en el marco regulador que rige el sector petrolero brasileño y en la política de compras de Petrobras, los astilleros y las empresas de ingeniería del país tuvieron graves problemas financieros. Muchas de estas empresas pasaron a atrasar con frecuencia sus respectivas entregas y algunas de ellas quebraron, o fueron adquiridas por empresas extranjeras (Ribeiro, 2005).

Tentativa de desmonte de Petrobras durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (FHC)

Biondi (1996) argumenta que a Petrobras, así como a otras estatales brasileñas, le fue prohibido recibir financiamiento de bancos estatales (como el BNDES), a partir de un Decreto del Presidente de la República en 1989, durante el gobierno de Sarney, lo que el autor clasifica como una decisión extravagante. Biondi apunta también para el congelamiento de precios y tarifas practicadas por las estatales como instrumento de combate a la inflación descontrolada que el país vivenciaba hasta el advenimiento del Plan Real. En virtud de estas dos políticas, la capacidad de invertir y de ampliar servicios de las estatales brasileñas cayó de manera

acentuada, perjudicando de sobremanera la actividad de estas empresas. En este sentido, Biondi afirma que “no es verdad que el servicio de las estatales se haya deteriorado por ‘incompetencia’. Como es también mentira que el ‘Estado perdió capacidad de invertir’, como dice la campaña de los privatizadores. Lo que hubo fue una política económica absurda, que sacrificó a las estatales” (Biondi, 1996:30).

Biondi argumenta que los sectores petrolero y de minería sufrieron menor control de precios por parte del gobierno brasileño. Frente a esto, para tales sectores los cofres de los banqueros internacionales continuaron abiertos, poniendo por tierra el argumento de que las exestatales del sector minero (como la Vale do Rio Doce y la Compañía Siderúrgica Nacional) y Petrobras habían “agotado su capacidad de financiamiento en el exterior” (Biondi, 1996:31). Específicamente en relación a Petrobras, Biondi va más allá cuando afirma que “El gobierno es el que le ha impedido recurrir a esas fuentes para acelerar la producción de petróleo; por lo tanto, no es por culpa suya que Brasil no sea autosuficiente en petróleo hasta hoy, argumento deshonestamente utilizado para abrir camino a la privatización de Petrobras a la sordina (...)” (1996: 31).

Biondi argumenta que, pese al éxito de Petrobras en lo que se refiere a la exploración y producción de petróleo en alta mar, el expresidente Fernando Henrique Cardoso exigió que la petrolera brasileña invitara a grupos privados para participar en un proyecto en el campo de Marlim, en la Cuenca de Campos, y usufructuar de las ganancias extraordinarias provenientes del gran volumen de petróleo presente en este yacimiento. El problema es que la empresa brasileña, en este proyecto, aplicaría R\$ (reales) 5 billones, al paso que sus “socios” inyectarían la cantidad “espantosamente baja de 140 millones de reales” (Biondi, 1996:54). El autor afirma que la información de entonces apuntaba para 20 empresas, de manera que cada una aplicaría R\$ 7 millones en el proyecto, pasando a asumir la condición de socias de un proyecto presupuestado en R\$ 5 billones para la sociedad brasileña. Frente a estas cifras Biondi clasifica esa operación “como un negocio escandalosamente escandaloso” (1996: 54).

Aún, en relación al proyecto en Marlim, Biondi apunta otro agravante: a pesar de desembolsar un monto muy inferior a los recursos desembolsados por Petrobras para el proyecto en Marlim, la ganancia obtenida por las “socias” en tal proyecto no sería pequeña, proporcional a las inversiones realizadas. De acuerdo con el autor, tales “socias” tendrían aproximadamente 30% o un tercio de las ganancias oriundas del proyecto en Marlim. En base a estas cifras, Biondi aboga que la fórmula adoptada en tal proyecto, “con socios ‘paracaidistas’ tragándose ganancias de billones que serían de la nación, es solamente una de las operaciones que el gobierno (de FHC) realizó para privatizar a Petrobras de forma silenciosa, sin reacción de la opinión pública” (1996:54).

En relación a la quiebra del monopolio de Petrobras a partir de la “Ley del Petróleo”, Biondi afirma que el gobierno FHC también ‘tomó’ de Petrobras áreas en que esta había descubierto petróleo, o indicios de petróleo, para entregarlas a empresas nacionales o multinacionales, por medio de licitaciones (competencia). Parece increíble, pero es verdad: con base en la nueva ley, Petrobras fue obligada a entregar todos los estudios y reportes de investigación que hizo sobre los posibles yacimientos de petróleo en Brasil. Estudios e investigaciones de décadas, que le costaron decenas y decenas de billones de reales a Petrobras, o sea, al pueblo brasileño. Y que se los entregaron a la Agencia Nacional del Petróleo de forma gratuita, con un único objetivo: ser vendidos a las empresas interesadas en participar en la competencia. ¿El precio cobrado por la Agencia? De nuevo, parece increíble: solamente 300 mil reales por todo el ‘paquete’ de investigaciones que le costaron billones de reales a Brasil. Eso mismo, 300 mil reales. Y hay más: las empresas que quisieran comprar los estudios relativos solamente a una región del país podrán pagar unos 20 mil, 30 mil reales, algunas migajas por ellos. Un asalto, literalmente, contra los contribuyentes y ciudadanos brasileños, que pagaron las investigaciones de Petrobras a lo largo de décadas (Biondi, 1996:56).

Biondi argumenta que además de “entregarles” a empresas multinacionales grandes reservas de petróleo

localizadas en la Cuenca de Campos, el gobierno de FHC encogió a Petrobras, al obligarla a vender refinerías, puestos de distribución, gasoductos y oleoductos. David Zylberrsztain, el entonces Director General de la ANP y yerno de FHC, para justificar tales ventas adoptaba como argumento el hecho de que Petrobras era una empresa demasiado grande, de manera que necesitaba renunciar a una parte de sus negocios para tornarse más eficiente. Por lo tanto, el gobierno de FHC y la ANP en relación al sector petrolero y a Petrobras tenían dos prioridades que se ajustaban a la tesis del “Estado mínimo”, a saber: crear competencia y reducir el monopolio de Petrobras. Aún, vale observar que tales estrategias, estaban en dirección contraria a la tendencia mundial de gigantismo.

A mediados de 1999, frente a la creciente vulnerabilidad externa del país, en virtud, sobre todo, de las políticas de intereses estratosféricos y apertura comercial para mantener el cambio elevado y la consecuente elevación de la deuda externa del país, aumentó la desconfianza internacional en relación a Brasil. Frente a este escenario, el FMI y el gobierno de los Estados Unidos exigieron como moneda de cambio para la concesión de nuevos préstamos a Brasil la adopción de medidas vinculadas al “Consenso de Washington”, tal como la continuidad en la política de la privatización/desnacionalización de sectores como el petrolero, el minero, el de telecomunicaciones, etc.

Se puede afirmar que además de quebrar el monopolio de Petrobras, forzar su desmonte y vender yacimientos descubiertos por esta empresa a otras firmas, hay indicios claros de que los objetivos de privatización del gobierno de FHC en relación a Petrobras eran más ambiciosos. En aquel momento, corrieron rumores de que el expresidente FHC habría sido advertido por las Fuerzas Armadas brasileñas, para no incurrir en este error. La opinión pública, en su mayoría, en virtud del carácter estratégico del sector petrolero para la economía y la sociedad brasileña, también se posicionaba contraria a la privatización de Petrobras.

Frente a estas presiones, se puede afirmar que el gobierno de FHC fue forzado a retroceder y a adoptar una

estrategia más sutil y menos explícita que la privatización que implementó en el caso de otras empresas como la Vale do Rio Doce. La estrategia adoptada fue pulverizar en el mercado (principalmente estadounidense) acciones de la empresa, aprovechándose del hecho de Petrobras haber sido creada como una sociedad de economía mixta. En 2000 fue realizada la venta de 179.639.300 acciones ordinarias de emisión de Petrobras, de propiedad de la Unión Federal, siendo 108.345.748 acciones, básicamente, en la bolsa de valores de Nueva York. Con la conclusión de la operación de venta de esas acciones ordinarias, la Unión Federal redujo su participación accionaria para 32,53% del capital social (total) y 55,71% del capital votante. Es importante resaltar que, desde su creación, el capital social de Petrobras fue mantenido en una proporción de 80% del Estado y el restante privado.

Antes de esto, en 1997, durante el primer mandato del gobierno de FHC, el BNDES se deshizo de dos billones de acciones preferenciales que detentaba Petrobras (Magnavita, 1997). En base a estos datos, se puede afirmar que la política de FHC en relación a Petrobras fue coherente con el principal lema de su gobierno, la necesidad de “enterrar la era Vargas”. Es decir, tal gobierno mantuvo el control de la empresa en manos del Estado brasileño (por continuar a detentar la mayoría del capital votante), pero no la mayoría de su capital total. Cabe observar que FHC, además de disminuir la participación del Estado brasileño en la estructura societaria de Petrobras, también fue responsable por la pulverización de las acciones de la empresa en el exterior, una vez que 60% de las acciones vendidas se quedaron en manos de inversionistas extranjeros. Otro episodio bastante emblemático y que apunta para el sesgo privatizante de la política del gobierno de FHC en relación a Petrobras fue la tentativa de alteración de las marcas Petrobrás y BR para Petrobrax. El entonces presidente de Petrobras, Henri Philippe Reischstul, utilizó el siguiente argumento para justificar tal alteración. “El nombre Petrobrás estaba muy vinculado al monopolio, que fue quebrado en 1997. Hoy en día, el final ‘brás’ es mucho más una carga que una ventaja” (Caldas y Chiarini, 2000). Algunos días después,

Reischstul retrocedió, suspendiendo las providencias para la alteración de la marca fantasía de la empresa. El expresidente de Petrobras soltó una nota, en la cual justificaba que la suspensión había sido una orientación del expresidente FHC “sensible a la reacción de la opinión pública a tal cambio y dentro del espíritu democrático que preside sus decisiones” (Farid, 2000).

Las contradicciones del gobierno de Lula: ¿retomada del desarrollismo, o continuidad del neoliberalismo?

En función del mal desempeño de la economía y del recrudecimiento de los problemas sociales enfrentados por el país durante el segundo mandato de FHC, la agenda del “Consenso de Washington” pasó a ser cuestionada en Brasil, abriendo espacio para la elección de Lula, candidato ligado al Partido de los Trabajadores (PT). Todo llevaba a creer que el recetario neoliberal sería sustituido por otra agenda de desarrollo, no solamente por la historia de vida de Lula, vinculada a la lucha sindical, y del sesgo social del PT, pero también por la férrea oposición (ejercida por Lula y por el PT) a las reformas de índole neoliberal implementadas principalmente durante los dos mandatos de FHC (Fagnani, 2011).

Aun así, cabe observar que antes de la toma de posesión, durante la campaña electoral de 2002, el entonces candidato Lula abandonó la retórica de ruptura con la agenda neoliberal, al asegurar, en la “Carta a los Brasileños”, que en su gestión los contratos serían respetados. Erber (2011) argumenta que había dudas sobre el futuro gobierno ligadas al pasado de Lula vinculado al movimiento sindical. Según este autor, también deben ser llevadas en cuenta las dificultades enfrentadas por el nuevo gobierno en virtud del “prejuicio contra un ex-obrero y la insistencia de los oponentes, secundada por los medios de comunicación, sobre su falta de preparación intelectual para el ejercicio de la Presidencia” (Erber, 2011:36-37).

Así, pese a la expectativa que se creó en torno al gobierno de Lula, la adopción de instrumentos macroeconómicos

ortodoxos como el superávit primario y los intereses elevados para dar sustentación al régimen de metas de inflación se tornaron la tónica de la política económica de este gobierno. Cabe observar que tales políticas no fueron transitorias, utilizadas solamente para develar las dificultades económicas y las desconfianzas del mercado.

Frente al conservadurismo en lo que se refiere a la política macroeconómica, la cual colocó como imperativo la necesidad de obtención de superávits primarios elevados para el pago de intereses y la amortización financiera, viabilizando, concomitantemente, el control de la inflación, impidió que metas más ambiciosas en términos sociales fuesen concretizadas. Ejemplo de esto es el hecho de que entre 2003 y 2005 el gasto social federal se mantuvo en el mismo nivel (en proporción del PIB) de aquel observado en los últimos años de gobierno de FHC (Castro, Ribeiro y Carvalho, 2007). Otro dato que corrobora la tesis de que la manutención del conservadurismo de la política económica inviabilizó el alcance de avances sociales más significativos es que el gasto medio del gobierno en términos de intereses de la deuda, entre los años de 2003 y 2008, fue de cerca de 6% del PIB al año, superando en aproximadamente 10 veces los recursos destinados al programa Bolsa Familia (Erber, 2011).

Frente a lo expuesto, se destaca que hay indicios claros de que el gobierno de Lula le dio continuidad a algunas medidas vinculadas a la agenda de desarrollo pregonada por el “Consenso de Washington”, lo que reforzaría la tesis de que en su gobierno no hubo un rompimiento en relación a tal agenda. Aun así, es innegable que este gobierno también adoptó medidas con un fuerte sesgo desarrollista, en relación a las cuales es posible identificar una tentativa de restablecer el protagonismo del Estado brasileño en el proceso de desarrollo del país, tales como el Programa de Aceleración de Crecimiento (PAC) y la política adoptada por este gobierno en relación al sector petrolero. Específicamente en relación a tal sector, objeto de análisis de este artículo, cabe resaltar las siguientes medidas: restablecimiento de la política sustitutiva de importaciones practicada por Petrobras, aumento de la

participación del gobierno en la composición del capital de esta empresa y la adopción del régimen de partición para los yacimientos localizados en el pre-sal.

A partir del inicio del gobierno de Lula, la política de compras de Petrobras es contestada. La revisión de las licitaciones de la P-51 y P-52 representa un síntoma claro del compromiso de este gobierno en promover la nacionalización de las compras de Petrobras. Así, a partir del gobierno de Lula, Petrobras pasó a incorporar exigencias en términos de contenido local para la construcción de sus plataformas. Con la retomada de las compras locales por parte de Petrobras, la situación de la industria de construcción naval, uno de los segmentos más importantes de la industria para Petrolera de Brasil, fue completamente revertido. De un total de 2.000 empleados, en 2000, esta industria saltó para 78.000 puestos de trabajo, en 2010.

Los lanzamientos del PROMINP (Programa de Movilización de la Industria Nacional de Petróleo y Gas Natural) y de la RBT (Red Brasil de Tecnología) también confirman que existía un compromiso por parte del gobierno de Lula en estimular el desarrollo de la industria parapetrolera local, anclado en el poder de compras de Petrobras. Además de esto, con el objetivo de engendrar un proceso de revitalización de la industria parapetrolera brasileña y, concomitantemente, aumentar la generación de empleos en el país, el gobierno federal introdujo, a partir de 2003, modificaciones substanciales en el tratamiento concedido a la cuestión de abastecimiento local en los emprendimientos de E&P de P&GN. Las nuevas reglas para las licitaciones de la ANP y las exigencias de contenido local mínimo para la construcción de las plataformas de la estatal brasileña son ejemplos de esos cambios de postura de gobierno federal en relación a las inversiones realizadas por el sector petrolero. La dirección de la ANP, nombrada por Lula, se apoyaba en la visión de que la apertura de la industria petrolera brasileña debería estar acompañada de nuevas oportunidades a los integrantes del parque abastecedor local, de modo a tornarlos más competitivos y menos dependientes de la demanda

de Petrobras. Así, después de haber determinado el índice potencial de nacionalización de los emprendimientos offshore en Brasil, la ANP pasó a encabezar las discusiones en torno a los mecanismos que deberían ser creados para fomentar la participación de las empresas locales en los emprendimientos de las concesionarias de los bloques subastados.

Aumento de la participación del gobierno en la composición del capital de Petrobras

En 2003, durante el primer año del gobierno de Lula, Petrobras contaba con 131.577 accionistas, siendo la Unión su accionista mayoritario (con 55,7% de sus acciones ordinarias, por lo tanto, de su capital votante). Conforme se ha resaltado anteriormente, el gobierno federal detentaba más de 80% del capital votante de Petrobras hasta la megaoferta de acciones de su propiedad en el mercado brasileño y estadounidense que ocurrió en 2000, durante el gobierno de FHC, reduciendo la participación del Estado tanto en términos del capital votante, como en lo que se refiere al capital total (formado por el conjunto de las acciones ordinarias y preferenciales).

Lula se oponía, aún antes de gobernar el país, a la privatización de las estatales brasileñas, así como, no aprobaba la disminución de la participación del Estado brasileño en la composición del capital de Petrobras. En 2010, para revertir este cuadro y capitalizar a Petrobras (con el objetivo de estimular los recursos destinados a las inversiones en el pre-sal) fue realizado un megalançamento de acciones de Petrobras, a partir del cual el gobierno aumentó su participación en el capital votante y total de la empresa. Se emitieron 2.369.106.798 acciones ordinarias y 1.901.313.392 acciones preferenciales, totalizando R\$ 120,2 billones, lo que equivalía a US\$ 69,9 billones. De acuerdo con información de la empresa fueron compradas por el gobierno brasileño 1.810.505.485 acciones ordinarias y 994.917.669 acciones preferenciales (Petrobras, 2010).

Con este lanzamiento de acciones, el gobierno brasileño (en particular la Unión, el BNDES y el Fondo

Soberano) aumentó su cuota en el capital votante, lo ordinario de Petrobras, que garantiza el control de la compañía, de 57,5% para 64%. Ya la cuota del capital total (o social), que es compuesto por la suma de las acciones ordinarias y preferenciales, perteneciente al gobierno, pasó de 39,8% en 2009, para 48,3% en 2010 (Petrobras, 2010a). En este sentido, comparativamente al gobierno de FHC, hubo en el gobierno de Lula un aumento de la participación del gobierno en la estructura societaria de Petrobras.

Entretanto, es importante resaltar que cerca de 36% de las acciones que componen el capital votante de la empresa están pulverizadas en el mercado (brasileño y extranjero). Además, considerando el conjunto formado por las acciones ordinarias y preferenciales (el capital social, o total de la empresa), la participación del mercado es aún mayor (poco más de 50%). Frente a esto, es evidente el carácter “anfíbio” de Petrobras, porque esta no es ni Estado “purasangre”, ni totalmente privada. Como no es una estatal “purasangre”, es innegable que la participación privada en el capital de la empresa acaba interfiriendo en sus estrategias y políticas. Así, se puede afirmar que la necesidad de remunerar a sus accionistas puede hacer que la empresa coloque su ganancia al frente de algunas metas más importantes del punto de vista del desarrollo socio-económico del país.

La descubierta del pre-sal y la creación de un nuevo marco regulador para el sector petrolero brasileño

La llamada capa de pre-sal es una franja que se extiende a lo largo de 800 km entre los estados de Espírito Santo y Santa Catarina, abajo del nivel del mar y engloba tres cuencas sedimentarias. Esta franja está localizada a 300 km de la costa brasileña. El petróleo encontrado en esta área está a una profundidad que supera los 7 mil metros, abajo de una extensa capa de sal. Uno de los campos descubiertos en el pre-sal, el campo de Tupi, posee reservas gigantes, es decir, entre 5 y 8 billones de barriles (de acuerdo con estimativas de Petrobras). Para tener una idea de lo que esto representa,

las reservas de petróleo y gas natural de Petrobras en Brasil eran de aproximadamente 13,920 billones de barriles en 2007 (Costa, 2007).

Si las estimativas son correctas, solamente el campo de Tupi tiene potencial para doblar el volumen de petróleo y gas extraído del subsuelo brasileño, haciendo pasar al país de 16°, para 11° o 12° productor de petróleo más grande del mundo. Algunos estudios apuntan que la capa, en su total, puede abrigar cerca de 100 billones de barriles, lo que colocaría a Brasil entre los 10 mayores productores del mundo (Costa, 2009). El descubrimiento del pre-sal a finales de la década de 2000 creó un nuevo panorama para la actividad de producción de petróleo de Brasil. Frente a este nuevo contexto, y teniendo en vista una alteración en la agenda de desarrollo practicada por el gobierno brasileño, al menos del punto de vista de la industria del petróleo, entre los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso y Lula, hay la emergencia de un nuevo sistema regulador para las actividades de producción de petróleo en el país. El marco regulador del pre-sal, instituido a partir de la Ley n° 12.351/2010, alteró la “Ley del Petróleo” y, además de instituir el régimen de partición, prevé la creación de la Pre-Sal Petróleo S.A., del Fondo Social y la capitalización de Petrobras. En el modelo de partición, parte o totalidad del petróleo producido en los pozos brasileños queda en manos del gobierno, mientras que las empresas son remuneradas por el servicio y reciben un adicional en petróleo. Por lo tanto, para las áreas del polígono del pre-sal y otras áreas estratégicas, el gobierno de Lula, por medio de la Ley N° 12.351/2010, substituyó el régimen de concesión instituido por FHC, por el régimen de partición de la producción. Hay que observar que la Ley determina que cabe al Consejo Nacional de Política Energética (CNPE) la decisión entre la realización de licitaciones y la contratación directa de Petrobras, sin licitación, “buscando la preservación del interés nacional y el atendimento de los demás objetivos de la política energética” (Brasil, 2010).

Para garantizar más control sobre la producción en el pre-sal, Petrobras será operadora única de los bloques, o sea,

la responsable por perforar y operar los pozos. En los casos en que el CNPE se decida por la licitación de un bloque (en vez de la contratación directa) la petrolera brasileña tendrá por lo menos 30% de participación en los consorcios que participarán en las licitaciones. En base a lo expuesto, es evidente, al menos desde el punto de vista normativo, la preocupación del gobierno de Lula por reforzar el papel del Estado brasileño en el marco regulador creado después del descubrimiento del pre-sal.

La relación entre la nueva estructura societaria y la explotación del trabajo en Petrobras

La relación entre la nueva estructura societaria con el nuevo patrón de explotación de la fuerza de trabajo en Petrobras aún ha sido poco estudiada en Brasil. Figueiredo (2012) nos muestra, al contrario de lo que pueden pensar los lectores bolivianos, que existen muchos trabajadores terciarizados en Petrobras, en general vinculados a procesos de trabajo fundamentados en la superexplotación. Él observa que teníamos en el año de 2002, 47.000 trabajadores efectivos y 121.000 (72%) terciarizados, ya en el año de 2010, teníamos 80.000 efectivos y 291.000 (78%) terciarizados. Los terciarizados tienen más probabilidades de morir en el trabajo y en el transporte de ida o retorno, poseen peores instalaciones para dormir, reciben peores salarios y derechos de los trabajadores. Es así que nacen el petróleo y el gas brasileños, en base a la intensificación del trabajo y con derramamiento de sangre.

En un plano más general, muchos estudios han mostrado que el surgimiento de nuevas formas de explotación/precarización está íntimamente conectado con la financierización de la economía, que trajo para el campo de la producción nuevas formas de gestión más simplificadas, liofilizadas, volcadas a la disminución de los costos de las corporaciones. Además, estos estudios también muestran que la terciarización también es una de las herramientas políticas de disminución del poder de los trabajadores (Sevá Filho, 1995). Para estos estudios, vivenciamos un momento

“peligroso” en el capitalismo, iniciado en los años sesenta, a partir del cual el capital llegó a perder las riendas del capitalismo y pasa a retomar el control de los rumbos del capitalismo principalmente a través de la reestructuración productiva.

Catherine Sauviat (2005), reflexionando sobre el capitalismo financierizado y sus consecuencias para los trabajadores, observa que en realidad el nuevo poder accionario poco desestabilizó el poder de control de los administradores de empresa. Frente al objetivo fijado de maximización del valor accionario para responder a las exigencias de los mercados y a la intensificación de la competencia, no son los intereses de los asalariados los que guían la política de los dirigentes de la empresa.

Al contrario, estos privilegian esquemas que coinciden con las “preferencias” de los inversionistas, tales como la reducción de costos, la reestructuración de los grupos en torno de segmentos de actividad más rentables, los programas recurrentes de recompra de acciones, etc.

El nuevo contexto llevó a una segmentación creciente del mercado de trabajo y al aumento de las desigualdades en el estatuto y en la remuneración de los asalariados. Las empresas “innovadoras”, simbolizadas por las empresas de Silicon Valley, no escaparon de esta tendencia. Éstas también tienen su porción de empleos precarios, al lado de empleos que benefician a los segmentos más educados de una mano de obra en el plano de los “mercados internos” o de “mercados profesionales” cada vez más internacionalizados—trabajadores precarios bien remunerados mientras están empleados, pero cuya vida profesional es dada por la obligación de generar permanentemente esa precariedad. Así, una empresa como la Microsoft emplea a 6 mil trabajadores temporales que se autodenominan *permatemps*, al lado de 20 mil regulares. (Sauviat, 2005, p. 126-127).

Chesnais busca identificar los “actores llave” de la finanza mundializada. Para él, estos son principalmente las instituciones financieras no bancarias, también llamadas como inversionistas institucionales, fondos de pensión,

fondos de aplicación colectivos y sociedades aseguradoras, así como empresas financieras especializadas que gravitan alrededor de ellas. La centralización de las rentas no invertidas en la producción y no consumidas (alineadas en bloque bajo la etiqueta bastante engañosa de “ahorros”) permitió que estas instituciones se tornaran propietarias-accionistas de un nuevo tipo de empresa y detentaran, al mismo tiempo, elevados volúmenes de títulos de la deuda pública, de forma que los gobiernos se tornaron sus “deudores”. Y concluye:

Ciertamente [...] la liberalización y la mundialización financiera dieron a los más importantes propietarios de acciones y obligaciones—las grandes fortunas de familia [...] pero sobre todo los inversionistas institucionales (y los administradores los cuales existen en abundancia)—los medios de influir sobre la repartición de la renta en dos dimensiones esenciales: la distribución de la riqueza producida entre salarios, ganancias y renta financiera, y la de la repartición entre la parte atribuida a la inversión y la parte distribuida como dividendos e intereses. Como las dos determinaciones de la repartición afectan el nivel de la inversión y comandan el empleo y el crecimiento, es difícil imaginar un poder mayor de la finanza (Chesnais, 2005, p.27).

La liberalización y la mundialización financiera trajeron consigo el régimen de acumulación flexible, es decir, una nueva forma de organizar la producción. En Brasil, surge la “birôla”, enfermedad proveniente de la actividad de trabajo en los cañaverales que lleva a los trabajadores al agotamiento. En Japón, surge el “karoshi”. En Petrobras, conforme vimos, tenemos una enorme cantidad de trabajadores terciarizados que están enfermándose y sufriendo todas las consecuencias del trabajo enajenado, con derechos y condiciones de trabajo nítidamente inferiores a los de trabajadores efectivos de Petrobras (Figueiredo, 2012).

Conclusiones

La creación de Petrobras representa la victoria del ala nacionalista sobre el ala más conservadora de la sociedad

brasileña, la cual consideraba que la implantación del sector petrolero brasileño no podría prescindir de inversiones/tecnologías extranjeras. Petrobras, así como otras estatales que surgieron en ese período de la historia de Brasil, materializa un Estado que decidió asumir las riendas del desarrollo del país, dentro de un proyecto de capitalismo nacional y con la internalización de los centros de decisión. Más que todo, Petrobras representó la victoria de la campaña “El petróleo es nuestro” contra la campaña (no declarada, pero que de hecho existía) “El petróleo es vuestro”.

Conforme se ha destacado en este artículo, Petrobras desempeñó un papel importante en la política de sustitución de importaciones adoptada por el gobierno brasileño hasta los años ochenta, contribuyendo para la constitución de la industria de bienes de capital del país. Su condición de importadora líquida de petróleo en ese período, el cambio desvalorizado y el alta en el precio del barril de petróleo (resultado del 1º y 2º Choques del Petróleo) reforzaron la necesidad de substituir importaciones de equipos y servicios. Este mismo escenario y los pocos descubrimientos de petróleo en área terrestre empujaron a Petrobras a direccionar esfuerzos para la actividad de extracción del petróleo en el mar brasileño. A partir de estos esfuerzos fueron descubiertos grandes yacimientos en aguas profundas, en la Cuenca de Campos, obligando a la empresa a capacitarse para el desafío representado por la producción de petróleo en esas condiciones. Se puede afirmar que Petrobras superó tal desafío, pues además de haber logrado aumentar significativamente la producción brasileña de hidrocarburos, pasó a ser reconocida internacionalmente como una de las empresas petroleras más capacitadas para la exploración y producción de petróleo y gas natural en aguas profundas.

Conforme se ha destacado a lo largo del texto, la adopción de la agenda neoliberal en Brasil a partir de finales de los años ochenta e inicio de los años noventa dilapidó buena parte del patrimonio que había sido levantado a partir de Getúlio Vargas, bajo los argumentos de que el Estado había “quebrado”, que su “hipertrofia le causó ineficiencia” y que

la salida sería, por lo tanto, la construcción de un “Estado mínimo”. Frente a este contexto, la “resaca” desarrollista del período 1930-1970 debería ser curada por medio de medidas como la apertura comercial, el equilibrio en las cuentas públicas, las privatizaciones, etc.

FHC, en sus dos mandatos, siguió al pie de la letra el manual del “Consenso de Washington”, no por imposición, y sí por adhesión, apoyándose en el argumento de que para modernizarse, el país tendría que “enterrar la era Vargas”. Partiendo de este argumento, la coalición político-partidaria que sustentaba el gobierno de FHC vendió una serie de empresas estatales (muchas de ellas a empresas extranjeras) en operaciones extremadamente cuestionables, inclusive del punto de vista legal. En lo que respecta al sector petrolero, a partir de la “Ley del Petróleo”, el expresidente FHC quebró el monopolio de Petrobras, atrayendo nuevas petroleras para explorar y producir petróleo en las cuencas marítimas brasileñas.

De acuerdo con lo expuesto en este artículo, hay indicios de que la privatización de Petrobras (tal como pasó con la Vale do Rio Doce, la Embraer y otras exestatales) estaba en los planes de ese gobierno. Al darse cuenta que tendría dificultad para conseguir la aprobación en el Congreso de una medida impopular, que con seguridad sería muy mal recibida por una parte considerable de la sociedad brasileña, FHC tuvo que retroceder. Como el plan A no iba a funcionar, fue adoptado el Plan B, o sea, la pulverización de acciones de la empresa en el mercado (brasileño y extranjero). Es evidente que la mayor participación privada en el capital de la empresa, acaba interfiriendo negativamente en algunas de sus estrategias y políticas. Como Petrobras tiene que remunerar a sus accionistas, la ganancia puede ser colocada como una meta más importante que la necesidad de desarrollar tecnológicamente el parque industrial doméstico y lidiar con el problema de las deudas sociales históricas brasileñas.

En virtud de los problemas económicos y sociales resultado de la implementación de la agenda neoliberal en Brasil, el proyecto “enterrar la era Vargas” fue puesto en jaque,

abriendo espacio para la elección de Lula, candidato del PT, partido político que se identificaba con las aspiraciones de cambio de la sociedad brasileña. Además, la historia de Lula, vinculada al movimiento sindical, era un indicio de que en su gestión se substituiría el proyecto de FHC, por otro, cuyo lema central sería el desarrollo socioeconómico del país, en cierta medida, retomando la era Vargas. Sin embargo, en la práctica lo que se vio fue la implementación de un proyecto contradictorio, que incluía algunos elementos vinculados a la agenda pregonada por el “Consenso de Washington” (como el control draconiano de la inflación y del gasto público), pero que también contenía elementos que apuntaban hacia el papel del Estado brasileño como actor protagonista del proceso de “desarrollo” del país. El trato concedido por el gobierno de Lula al sector petrolero brasileño y a Petrobras evidencia el sesgo neo-desarrollista de este gobierno. Sin embargo, apoyándonos en Fernandes (2006) y Oliveira (2009), podemos afirmar que nuestro capitalismo “ornitorrinco” y de “circuito cerrado” no permite reformas estructurales que traigan mejorías significativas para los trabajadores brasileños. Dicho de otra forma, las “mejorías” promovidas por los gobiernos Lula-Dilma están lejos de caracterizar una “revolución pasiva” (Gramsci) y sí un proyecto de continuidad de la contrarrevolución permanente (Fernandes, 2006) iniciado en la dictadura cívico-militar de 1964.

Aun así, es necesario analizar los detalles. Conforme fue destacado a lo largo del texto, a partir de Lula, Petrobras volvió a utilizar sus encomiendas (de plataformas petroleras, equipos submarinos, petroleros etc.) para fomentar la industria parapetrolera brasileña y crear empleos en el país, retomando una política que había sido abandonada en los años de Cardoso (FHC). Aún en relación a Petrobras, Lula aumentó la participación del gobierno brasileño en la composición del capital de la empresa. No obstante, es innegable que el aumento en la participación de accionistas particulares en la estructura societaria de Petrobras, de una forma o de otra, subyuga la estrategia de esta corporación a los dictámenes del mercado.

Con el descubrimiento del pre-sal y la creación de un marco regulador pautado en el régimen de participación este gobierno demostró que, al menos en relación al sector petrolero brasileño, había una preocupación en retomar el protagonismo del Estado brasileño en los rumbos del desarrollo del país. A pesar de este hecho, como la creación del marco regulador es relativamente reciente y la producción petrolera en el pre-sal se encuentra en un estadio muy incipiente, aún es temprano para construir un análisis preciso acerca de los acontecimientos del pre-sal para la sociedad brasileña, así como del legado dejado por el gobierno Lula-Dilma en relación a este tema.

Bibliografía

- Alonso, P. S. R.
2004 Estratégias corporativas aplicadas ao desenvolvimento do mercado de bens e serviços: uma nova abordagem para o caso da indústria de gás natural no Brasil. 474 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção)–Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
- Almeida, A.
2009 Petrobras no Equador. In: Instituto Rosa Luxemburg et. al. (orgs.) Empresas transnacionais brasileiras na América Latina: um debate necessário. São Paulo: Expressão Popular.
- Azpiazu, D.; Basualdo,
2001 E. Concentración económica y regulación de los servicios públicos. Obtenido em:www.wilsoncenter.org/topics/docs/concentración%20economica.doc. Retirado em junho de 2007.
- Baran, P.; Sweezy, P.
1966 Capitalismo Monopolista: ensaio sobre a ordem econômica e social americana. Rio de Janeiro: Zahar.
- Batista, P. N.
1996 O Consenso de Washington. São Paulo: Pedex (Caderno 6), 1994.
- Behring, E. Boschetti, I.
2004 Política Social: fundamentos e história. São Paulo: Cortez.
- Biondi, A. O Brasil privatizado: um balanço do desmonte do Estado. São Paulo: Perseu Abramo, 48 p.
- Chesnais, F.
2005 Apresentação. In: CHESNAIS, F. (org.) A Finança Mundializada. São Paulo: Boitempo Editorial.
- Draibe, S. M.
1985 Rumos e metamorfoses – um estudo sobre a constituição do Estado e as alternativas da industrialização no Brasil, 1930 – 1960. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
- Erber, F.
2011 Convenções de desenvolvimento no governo Lula: um ensaio de economia política. Revista de Economia Política, v. 31, n. 1, jan/mar, 2011.

- Erber, F. E Cassiolato, J. E.
1997 Política industrial: teoria e prática no Brasil e na OCDE. Revista de Economia Política. v.17, p.32-60, abr- jun.1997.
- Erber, F.S.; Guimarães, E. A.; E Araújo Jr., J. T.,
1984 A política tecnológica da segunda metade dos anos oitenta. Texto para Discussão, n. 66, UFRJ/ IEL.
- Fernandes, F.
2006 O circuito fechado. Rio de Janeiro: Ed. Globo.
- Dagnino, R.
2004 A relação pesquisa - produção: em busca de um enfoque alternativo. In: SANTOS, L. et al. (Org.). Ciência, Tecnologia e Sociedade: o desafio da interação. 2ed. Londrina: IAPAR, 2004, p. 101-154.
- Fagnani, E.
2011 Política social do governo Lula (2003-2010): perspectiva histórica. Texto para Discussão. n. 192, IE/Unicamp,.
- Fontes, V.
2009 O Imperialismo brasileiro. In: Instituto Rosa Luxemburg et. al. (orgs.) Empresas transnacionais brasileiras na América Latina: um debate necessário. São Paulo: Expressão Popular.
- Figueiredo, M.
2012A Face oculta do ouro negro – trabalho, saúde e segurança na indústria petrolera offshore da Cuenca de Campos. Niteroi: UFE.
- Furtado, A. T.
1996 A trajetória tecnológica da Petrobras na produção offshore. Revista Espacios. v. 17, n. 3. 1996.
- Furtado, A.; Freitas, A. G.
2004 Nacionalismo e aprendizagem no Programa de Águas Profundas da Petrobras. Revista Brasileira de Inovação, v. 3, n. 1, jan./jul. 2004.
- Freitas, A. G.
1993 Capacitação tecnológica em sistemas para águas profundas: o caso da Petrobrás. Dissertação (Mestrado em Política Científica e Tecnológica) - Instituto de Geociências, Departamento de Política Científica e Tecnológica, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 178 f.
- Harvey, D.
2004 O novo imperialismo. São Paulo: Loyola.

- Ianni, O.
1989 Estado e Capitalismo. São Paulo: Brasiliense.
- Ianni, O.
2005 O declínio do Brasil-nação. São Paulo: Revista de Estudos Avançados 14 (40), 2000, p. 51-58.
- Jinkings, I.
2007 Sob o domínio do medo: controle social e criminalização da miséria no neoliberalismo. Tese de Doutorado, IFCH, Unicamp, Campinas.
- Leroy, J.P; Malerba, J. (Orgs.)
2005 Petrobrás: integración o explotación? Rio de Janeiro: FASE.
- Lima, M.
1976 Petróleo, energia elétrica, siderurgia – a luta pela emancipação (um depoimento de Jesus Soares Pereira sobre a política de Vargas). Rio de Janeiro: Paz e Terra.
- Macedo E Silva, A. C.
1985 Petrobras: a consolidação do monopólio estatal e a empresa privada (1953-1964). Dissertação (Mestrado em Economia) - Instituto de Geociências, Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
- Martins, F. C.
2003 O Fundo CTPetro e o setor produtivo: análise de política científica e tecnológica para o desenvolvimento do fornecedor local de equipamentos e serviços para o setor de petróleo e gás natural”Dissertação de mestrado apresentada ao Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
- Marzani, B; Furtado, A. T.; Guerra, S. M.
2003 Novo contexto de abertura do mercado brasileiro de petróleo e os fornecedores locais: a criação do REPETRO. In: 2º Congresso de P&D em Petróleo & Gás, Rio de Janeiro. Anais do 2º Congresso de P&D em Petróleo & Gás.
- Novaes, H. T.
2013 O esgotamento da fase “civilizatória” do capital e a necessidade histórica de uma educação para além do capital. Marília, impresso (mimeo).
- Oliveira, A. De; Rocha, F.
2009 Conclusões e recomendações de política. In: Estudo da Competitividade da Indústria Brasileiras

- de Bens e Serviços do Setor de P&G. Disponível em: <<http://www.prominp.com.br/paginadinamica.asp?grupo=245>>. Acesso em: 25 abr. 2009.
- Pagotto, C.
2009 Brasil e o petróleo: neocolonialismo e uma festa para poucos. In: Instituto Rosa Luxemburg et. al. (orgs.) Empresas transnacionais brasileiras na América Latina: um debate necessário. São Paulo: Expressão Popular.
- Ribeiro, Darcy,
1997 Confissões. São Paulo: Companhia das Letras.
- RIBEIRO, Cassio. G. A
2005 Política de Compras de Entidades Públicas como Instrumento de Capacitação Tecnológica: o Caso da Petrobras. 163 f. Tese (Dissertação em Política Científica e Tecnológica) - Instituto de Geociências, Departamento de Política Científica e Tecnológica, Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
- Ribeiro, C. G.
2009 Compras Governamentais e Aprendizagem Tecnológica: Uma análise da política de Compras da Petrobras para seus empreendimentos offshore. 306 f. Tese (Doutorado em Política Científica e Tecnológica) - Instituto de Geociências, Departamento de Política Científica e Tecnológica, Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
- Rodrigues, F. C.; Novaes, H. T.; Batista, E. L.
2012 (orgs.) Movimentos sociais, trabalho associado e educação para além do capital. São Paulo: Outras Expressões.
- Romão, F.
2009 Óleo da terra, homens e mulheres da luta: petroleiros de Getúlio a FHC. São Paulo: Expressão Popular.
- Sauviat, C.
2005 Os fundos de pensão e os fundos mútuos: principais atores da finança mundializada e do novo poder acionário. In: CHESNAIS, F. (org.) A Finança Mundializada. São Paulo: Boitempo Editorial, p. 109-132.
- Sevá Filho, A.
1998 O comando capitalista reestrutura e terceiriza a produção para reforçar a si próprio, em meio à crise. Campinas, impresso.

- Sevá Filho, A.
2012 Prefácio-A face ocultada e o chorume essencial. In: FIGUEIREDO, M. A face oculta do ouro negro – trabalho, saúde e segurança na indústria petrolera offshore da Cuenca de Campos. Niteroi: UFF
- Siqueira, F.
2012 A política do petróleo no Brasil. TV Senado, Agenda Econômica, 27/12/2012.
- Villela, A. V.
1984 Empresas do governo como instrumento de política econômica: os sistemas Siderbrás, Eletrobrás, Petrobrás e Telebrás. IPEA/INPES, Relatório de Pesquisa, nº 747.
- Yergin, D.
2012 Petróleo: uma história mundial de conquistas, poder e dinheiro. São Paulo: Paz e Terra.

Revistas

- Agência Nacional De Petróleo (Rj), Avaliação da Competitividade do Fornecedor Nacional com relação aos Principais Bens e Serviços, publicação baseada em trabalho de consultoria realizado pela PUC-RJ, intitulado Mecanismos de Estímulo às Empresas Concessionárias de petróleo a adquirirem Equipamentos e serviços do Mercado Nacional, Rio de Janeiro, 1999.
- Agência Nacional De Petróleo (Rj), Relação de concessionários, 2013. Disponível em: < http://www.brasil-rounds.gov.br/portugues/lista_de_concessionarios.asp>. Acesso em: 01 jul. 2013.
- Almeida, E.L.F. Por uma Política Petroleira Sustentável. Brasil Energia, 2003.
- Bonnelli, R. E Veiga, P. M. (2003) A dinâmica das Políticas Setoriais no Brasil na década de 1990: Continuidade e Mudança, In: Revista Brasileira de Comércio Exterior, n. 75 – Abril/Junho de 2003.
- Brasil. Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997. Dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, 07 jun. 1997.

- Castro, J.; Ribeiro, J. A.; Carvalho, B. Gasto social e política macroeconômica: trajetória e tensões no período 1995-2005. Texto apresentado no Congresso Anual de Economia Política realizado em São Paulo, jun. 2007.
- Costa, A. L. M. C. Um oceano de ouro negro. Carta Capital, n.471, nov. 2007. (manter)
- Costa, A. L. M. C.. A realidade é nossa. Carta Capital, n.562, nov. 2009. (manter)
- Fadul, S. Bndes venderá suas ações da Petrobras em 1997. Gazeta Mercantil. 24 out. 1996. Disponível em: <<http://infoener.iee.usp.br/infoener/hemeroteca/imagens/14567.gif>>. Acesso em: 11 mar. 2013.
- Mugnatto, Sílvia. Leilão da Petrobras rende R\$ 7 bilhões ao governo. Folha de São Paulo. 11 ago. 2000. Disponível em: <<http://diariodopresal.wordpress.com/2010/10/16/recordar-e-viver-como-fhc-e-serra-tentaram-privatizar-a-petrobras/>>. Acesso em: 11 mar. 2013.
- Petrobras. Relatório de sustentabilidade 2010a. Disponível em: <<http://www.petrobras.com.br/rs2010/pt/relatorio-de-sustentabilidade/atuacao-corporativa/perfil/atuacao-global/>>. Acesso em: 11 mar. 2013.
- Petrobras. Um desafios atrás do outro. 2010b. Disponível em: <<http://www.hotsitespetrobras.com.br/petrobrasmagazine/Edicoes/Edicao56/pt/internas/pre-sal/>>. Acesso em: 12 jan. 2010.
- Magnavita, Mônica. Ações da Petrobras podem render R\$ 5,8 bilhões. O Estado de São Paulo. 13 ago. 1997. Disponível em: <<http://infoener.iee.usp.br/infoener/hemeroteca/imagens/20240.gif>>. Acesso em: 11 mar. 2013.
- Observatorio Petrolero Sur. www.opsur.org.ar/blog
- Oliveira, F O avesso do avesso. Revista Piauí, nº 37, outubro 2009.
- Tereza, Irany; Neumann, Denise. Petrobrás pode ser vendida em 3 anos, diz Zylbersztain. O Estado de São Paulo, 20 mai. 1999.
- Sevá Filho, A. Néo-desenvolvimentismo: máscara do imperialismo, ameaça à democracia Revista Democracia Viva, IBASE, outubro de 2010. Obtido em:
http://www.ifch.unicamp.br/profseva/T15_artigoSEVA_neodesenvolvimentismo_out2010.pdf

